



NUEVA SOCIEDAD | 273

América Latina: respuestas populares a las crisis

COYUNTURA

Fernando Molina
Leticia Salomón

TRIBUNA GLOBAL

Macià Serra / Gemma Ubasart González /
Salvador Martí i Puig

TEMA CENTRAL

Julia Roth / Albert Manke
Alejandro Grimson
Claudia Tomadoni / Carlos Romero Grezzi /
Sebastián Chirino
Valeria Coronel / Luciana Cadahia
Ronny J. Viales Hurtado / David Díaz Arias
Nicole Schwabe
Bea Wittger
Blanca Estela Ruiz
Hans-Jürgen Burchardt

ENSAYO

José Fernández Vega

NUEVA SOCIEDAD

es una revista latinoamericana abierta a las corrientes de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social.

Se publica cada dos meses en Buenos Aires, Argentina, y circula en toda América Latina.

Directora: Claudia Detsch

Jefe de redacción: Pablo Stefanoni

Coordinadora de producción: Silvina Cucchi

Editor de la plataforma digital: Mariano Schuster

Administración: María Eugenia Corriés, Vanesa Knoop, Karin Ohmann

NUEVA SOCIEDAD Nº 273

Diseño original de portada: Horacio Wainhaus

Arte y diagramación (portada e interior): Fabiana Di Matteo

Ilustraciones: Alina Najlis

Fotografía de portada: Shutterstock

Corrección: Germán Conde, Vera Giaconi

Traducción al inglés de los sumarios: Kristie Robinson

Impreso en Talleres Gráficos Nuevo Offset,
Viel 1444, Buenos Aires, Argentina

Los artículos que integran **NUEVA SOCIEDAD** son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Revista. Se permite, previa autorización, la reproducción de los ensayos y de las ilustraciones, a condición de que se mencione la fuente y se haga llegar una copia a la redacción.

NUEVA SOCIEDAD – ISSN 0251-3552

Oficinas: Defensa 1111, 1º A, C1065AAU Buenos Aires, Argentina.

Tel/Fax: (54-11) 4361-4108/4871

Correo electrónico: <info@nuso.org>

<distribucion@nuso.org> (distribución y ventas)

<www.nuso.org>

El portal **NUEVA SOCIEDAD** es una plataforma de reflexión sobre América Latina.
Articula un debate pluralista y democrático sobre política y políticas latinoamericanas.



**NUEVA
SOCIEDAD**

es un proyecto de la

**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

COYUNTURA

4386	Fernando Molina. Tendencias socioelectorales en la Bolivia del caudillismo	4
4387	Leticia Salomón. Indignación y crisis política en Honduras	14

TRIBUNA GLOBAL

4388	Macià Serra / Gemma Ubasart González / Salvador Martí i Puig. Cataluña y la triple crisis española	22
------	--	----

TEMA CENTRAL

4389	Julia Roth / Albert Manke. ¿Qué crisis y qué respuestas? Pensar las crisis en su contexto sociohistórico	34
4390	Alejandro Grimson. Argentina y sus crisis	44
4391	Claudia Tomadoni / Carlos Romero Grezzi / Sebastián Chirino. Impensar las crisis socioambientales: Producción cooperativa de un hábitat inclusivo	55
4392	Valeria Coronel / Luciana Cadahia. Populismo republicano: más allá de «Estado <i>versus</i> pueblo»	72
4393	Ronny J. Viales Hurtado / David Díaz Arias. Costa Rica y los pactos sociales multclasistas. La Reforma al Código Procesal Laboral (2015-2017)	83
4394	Nicole Schwabe. «No somos hijos de la democracia, sino nietos de la dictadura». El movimiento estudiantil chileno en 2011 y después	98
4395	Bea Wittger. La crisis urbana brasileña y sus soluciones «desde abajo»	110
4396	Blanca Estela Ruiz. Los memes: una respuesta popular y humorística ante la crisis mexicana	122
4397	Hans-Jürgen Burchardt. Bienestar del tiempo: respuesta latinoamericana frente a la crisis socioecológica	136

ENSAYO

4398	José Fernández Vega. Nueva civilización política, barbarie económica	151
------	---	-----

■ Segunda página

Con este número, NUEVA SOCIEDAD vuelve a dedicarse a las crisis en América Latina, que pueden enmarcarse en la coyuntura de crisis de las sociedades contemporáneas a escala global. Desde una perspectiva crítica, se intenta presentar posibles respuestas de individuos, grupos y entidades a quienes o cuyas acciones se define como «populares» —en referencia no solamente al «pueblo», sino al sentido más amplio de «población»—, y que a la par de exigir responsabilidad a los gobiernos contribuyen en forma activa a una redefinición de contextos y coyunturas de crisis.

Una crisis es una situación de cambio abrupto en la cual las condiciones de vida más básicas pueden ser reformuladas. Además, conlleva una renovación permanente. Los artículos del Tema Central de este número de NUEVA SOCIEDAD dedicados a esta cuestión son producto de las elaboraciones del recientemente fundado Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (por sus siglas en inglés) y ponen el énfasis en las acciones, prácticas y reflexiones de actores populares durante momentos o circunstancias «críticas», con el fin de elaborar una «topografía de la crisis» poniendo el foco en situaciones paradigmáticas de cambio social en las que se mapean varios alineamientos propuestos por actores contemporáneos concretos. El objetivo es, por tanto, lograr una comprensión más amplia de las culturas políticas que surgen, cambian o se desvanecen en coyunturas de crisis de este tipo.

En este marco, el artículo de Alejandro Grimson nos brinda una definición de tipos de crisis para analizar la situación argentina actual, sobre la base de tres momentos críticos que se sucedieron durante los últimos 35 años. Destaca la problemática del uso «inflacionario» de la noción de crisis y critica el hecho de que los enfoques aislados de la economía no consideren la dimensión cultural y las repercusiones sociales e (inter)subjetivas de cada crisis. Constata que, en Argentina, la «crisis permanente» ya forma parte del debate político e indica una sedimentación y previsibilidad de las crisis, ante lo cual propone un enfoque más diversificado.

La contribución de Claudia Tomadoni, Carlos Romero Grezzi y Sebastián Chirino presenta un análisis de la(s) crisis como «procesos en los cuales entran en tensión situaciones que no encuentran soluciones». Poniendo a prueba su marco conceptual en un estudio sobre el Polo Cooperativo de Innovación Inclusiva (PCI) en la provincia argentina de San Juan, muestra que la sucesión de varias crisis puede dificultar su superación hasta el punto de representar desafíos a las estructuras de poder establecidas.

La historiadora Valeria Coronel y la filósofa Luciana Cadahia proponen repensar la crisis desde un enfoque teórico y establecen un marco para encontrar alternativas al neoliberalismo mediante nuevos mecanismos de comunicación e institucionalidad. Abogan por dejar atrás la oposición entre «pueblo» y «Estado» en favor de una «recíproca interpelación» que abra la posibilidad de pensar una nueva institucionalidad que refleje la capacidad de autodeterminación del pueblo «mediante el uso del derecho».

Por su parte, Ronny J. Viales Hurtado y David Díaz Arias analizan los procesos de negociación para producir la reciente reforma al Código Procesal Laboral en Costa Rica, haciendo referencia a la dinámica histórica de las relaciones político-legales en el siglo xx, marcada por la búsqueda de consensos. Con esto, contextualizan el proceso actual en una tradición consensual muy diferente de los otros países centroamericanos y logran definir tanto el marco como el modo en que se desarrollan crisis.

Nicole Schwabe, a su turno, interpreta el movimiento de protesta estudiantil de 2011 en Chile como una «fisura en el orden social» posdictatorial que muestra características de una «respuesta retrasada» a las estructuras desiguales y autoritarias heredadas de la dictadura. La autora identifica como crisis el desastre del sistema educativo que el movimiento estudiantil hizo visible, lo que posibilitó una reflexión más amplia sobre otros problemas de una sociedad que había negociado una paz superficial para lograr la transición a la democracia.

En su artículo, Bea Wittger tematiza la crisis habitacional en Río de Janeiro en el contexto de la exclusión urbana y la desigualdad en Brasil. Muestra la forma en que grupos como el Movimiento Nacional de Lucha por la Morada respondieron a un abandono por parte de las autoridades que forzó a los ocupantes de edificios vacíos a desarrollar sus propias estrategias de apropiación, resistencia y autogobierno. Con esto, presenta una radiografía de la cooperación entre varios actores de la sociedad, del uso de recursos legales y de la transformación del marco legal.

Desde otra perspectiva, Blanca Estela Ruiz ofrece un análisis semántico y mediático de los memes como una expresión de crítica satírica que ha visto un incremento inédito gracias a la revolución digital y las redes sociales. Partiendo de la crisis de violencia actual en México, sitúa los memes en una tradición humorística que se desarrolló para contrarrestar una larga «tradición hagiográfica de control ideológico y político» por parte de las elites. Dado el peligro particular que actualmente corren los periodistas en el país, Ruiz supone que los memes sirven tanto como instrumento de denuncia como de válvula de escape para la sociedad civil, en vistas de la falta de un cambio político.

Finalmente, Hans-Jürgen Burchardt parte de dos crisis actuales –social y ecológica– y reflexiona sobre el desarrollo del índice de vida saludable y bien vivida (IVSBV) en Ecuador, un modelo alternativo que introduce nuevos parámetros para medir el bienestar que se basan en la cosmovisión del «buen vivir». El autor postula la importancia del «bienestar del tiempo» para un futuro mejor y más sostenible para todos.

Este número fue elaborado en colaboración con el CALAS, un espacio transdisciplinario de estudios avanzados creado por cuatro universidades alemanas y cuatro latinoamericanas. La coordinación del Tema Central estuvo al cuidado de Albert Manke y Julia Roth, autores asimismo del artículo introductorio.

Como enfatizan las autoras y los autores en sus contribuciones, las «crisis múltiples» que se analizan en esta edición de NUEVA SOCIEDAD están arraigadas en tradiciones y coyunturas locales, regionales y a veces transnacionales; requieren múltiples respuestas, estrategias, intervenciones y negociaciones, que a menudo demandan la formación de alianzas que atraviesen fronteras sociales e ideológicas.

Tendencias socioelectorales en la Bolivia del caudillismo

FERNANDO MOLINA

La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia de avalar la reelección indefinida del presidente y del resto de los cargos electivos marca un punto de inflexión en un país tradicionalmente reacio a la «perpetuación en el poder». Además, esa posibilidad había sido rechazada en referéndum en febrero de 2016. Frente al nuevo escenario, la mayor parte de la oposición se ha lanzado a denunciar la «dictadura» e incluso el «totalitarismo» del gobierno, exageración que puede constituir un serio error de lectura de cara al futuro próximo. Evo Morales, aunque menos popular que antaño, sigue siendo una figura política con arraigo social y electoral y se mantienen abiertos espacios para la acción política.

El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia falló en favor de un recurso presentado por un grupo de legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) para declarar improcedentes las restricciones a la reelección de las autoridades bolivianas que figuran en la Constitución, lo que habilita la repostulación sin limitaciones del presidente Evo Morales. El hecho marcó una inflexión histórica por varios motivos: por primera vez en la

historia boliviana, se autorizó la reelección indefinida, en contra de una tradición jurídica muy antigua; por primera vez se usó el Tribunal Constitucional (que solo existe desde 1999) para alterar un aspecto de la Constitución, lo que los juristas de oposición consideran «aberrante», ya que por su naturaleza el Tribunal debería limitarse a compatibilizar las leyes con la Constitución; por primera vez, finalmente, el MAS ha recurrido al poder de las instituciones estatales

Fernando Molina: es periodista y escritor. Ha producido numerosas obras ensayísticas, históricas y políticas sobre Bolivia. Dos de sus últimas publicaciones son *La izquierda boliviana frente a la revolución y la democracia. Del marxismo nacional al MAS* (Libro Nómadas, Cochabamba, 2016) y *La idea aristocrática y la idea liberal. Estudio de la élite política boliviana del siglo XIX* (Libro Nómadas, Cochabamba, 2017).

Palabras claves: caudillismo, democracia, oposición, socialismo, Evo Morales, Bolivia.

en contra de las expresiones de masas en las que había confiado prioritariamente durante su existencia. En efecto, el trámite realizado por el oficialismo para habilitar a su candidato contradice directamente el resultado del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016: entonces, 51% de los votantes rechazó la reforma de la Carta Magna aprobada en 2009 para levantar las limitaciones a la reelección de Morales, las mismas que ahora el Tribunal Constitucional ha levantado mediante una «interpretación» del texto constitucional.

Solía decirse que la democracia boliviana era «plebiscitaria», ya que apelaba directamente a los electores para definir las disputas de poder¹. Y así fue hasta que el MAS perdió la mayoría, por lo menos en lo concerniente a la cuestión –para este partido, crucial– de la reelección, que en las encuestas es rechazada por más de 60% de la población². Por esta razón, Morales no pensó en organizar un nuevo referéndum para «enmendar» los resultados adversos de 2016 y acudió en cambio a un expediente de mucha menor legitimidad, pero más seguro: la consulta a unos magistrados a punto de terminar su mandato y en su momento elegidos, entre otras razones, por su proximidad al partido de gobierno. Ante estos jueces, el MAS argumentó que el derecho de un ciudadano a elegir y ser elegido, consagrado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también

conocida como Pacto de San José de Costa Rica), no puede ser menoscabado por las restricciones establecidas por la Constitución que en su momento el oficialismo no objetó. El Tribunal aceptó este alegato.

Ulteriormente, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, planteó ciertas dudas sobre la salida preparada por el oficialismo, pero lo cierto es que nadie posee la fuerza institucional o política para impedir que Morales sea candidato en las elecciones de 2019. La oposición tradicional, es decir, la de los partidos políticos, se ha limitado a condenar la evolución de los acontecimientos en los tonos más agudos posibles. Un fenómeno más nuevo e interesante fue el estallido de protestas callejeras, protagonizadas especialmente por jóvenes de clase media de la región más rica y menos izquierdista del país, Santa Cruz. Uno de los objetivos de estas acciones no muy numerosas (de varios cientos de participantes), pero sí fervorosas, fue presionar a los dirigentes tradicionales de la región, llamados dirigentes «cívicos», para que actuaran, dejando la pasividad frente al gobierno que los ha caracterizado desde que, en 2008-2009, Morales se impusiera a la resistencia de las clases

1. Simón Pachano: «Democracias plebiscitarias» en *El Universo*, 25/11/2011.

2. Según una investigación de la encuestadora Ipsos (24/10/2017), en las capitales de departamentos el rechazo a una nueva habilitación de Morales asciende a 68%. No obstante, ese porcentaje baja en encuestas en el área rural.

dominantes y los sectores políticos desplazados por la revolución política que conducía. Desde entonces, los líderes cruceños han mostrado un perfil poco aguerrido, condicionado por el acuerdo que poco después los empresarios de la región alcanzaron con el gobierno y que garantizó la abstención política de los primeros a cambio de la colaboración económica del segundo³.

Las protestas fueron interrumpidas por las fiestas de fin de año y por un conflicto sectorial entre el gobierno y los médicos, pero su espontaneidad mostró que el malestar de las clases medias, principales adversarias del dominio de Morales, había llegado a un punto en el que superaba el «intelectualismo» que normalmente las inviste, aunque como «fuerza física» de movilización siguieran siendo muy inferiores a los campesinos y los sectores populares de «clase baja» —para usar la estratificación propia de las estadísticas electorales—, que en gran medida siguen apoyando al MAS y a los que este partido puede poner rápidamente y con gran efectividad en las calles.

No hay, pues, fuerza política suficiente para impedir que la maniobra reeleccionaria del oficialismo se lleve adelante, por lo menos en las condiciones actuales, que son de estabilidad social y crecimiento económico moderado. Por eso la proclamación de Evo Morales como candidato, escenificada en Cochabamba el 16 de diciembre pasado frente a una multitud de decenas

de miles de adherentes, inició una campaña electoral a la que la oposición tendrá que sumarse, a pesar de los «peros» estratégicos e ideológicos que pueda oponer a una participación que terminaría por avalar esa alteración constitucional.

■ ¿Gobierno totalitario? ¿Dictadura?

Los políticos bolivianos vienen discutiendo la caracterización del gobierno de Morales desde su inauguración. Al comienzo, la confusión era mayor, inducida por críticas como la de Gabriel Dabdoub, el principal líder empresarial durante el primer periodo del MAS (2006-2009), quien deploró la anticuada y peligrosa ideología «socialista» de los adherentes de Morales cuando estos se oponían a la libertad de comercio⁴.

A la incertidumbre de los observadores contribuyeron las afirmaciones contradictorias de Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera sobre el objetivo del proceso que dirigían. En 2006 Morales desautorizó una de las primeras definiciones realizadas por el vicepresidente como teórico del proceso. Este planteó que, si bien el socialismo constituía el norte de la revolución, en una primera etapa esta se abocaría a la

3. Gustavo Pedraza: «Los cambios políticos que reconfiguraron Santa Cruz» en *Página 7*, 23/7/2017.

4. ANF: «IBCE: Caudillos socialistas desplazados evitan tratar ingreso al TLC», 24/3/2005.

construcción del «capitalismo andino-amazónico», una plataforma nacionalista de posteriores y más avanzadas transformaciones⁵. Es probable que esta nomenclatura molestara a Morales por la tradición «anticapitalista» del MAS y la suya propia, aunque sin duda era la que mejor representaba lo que quería hacer el gobierno.

Capitalismo nacional, sí, pero «de Estado», pues se basaría en la nacionalización de la principal industria del país, la del gas, y la de varias empresas importantes que fueron estatales antes de su privatización de los años 90. En verdad se trataría, como en ese momento señalamos⁶, de un regreso al modelo económico y al método polarizador de hacer política que habían inventado los movimientos nacional-populares latinoamericanos, en concreto, al «nacionalismo revolucionario» que había irrumpido a fines de los años 30 e imperado sobre el país hasta 1985. Como ya hemos dicho, entre 2006 y 2008 este proyecto fue resistido por las clases dominantes, que apoyaban a la antigua y desplazada elite política neoliberal. Pero, en 2008, el MAS finalmente se impuso y al año siguiente celebró un acuerdo con el empresariado, en particular el cruceño, que le concedió la completa gobernabilidad del país.

El 22 de enero de 2010 se produjo la ceremonia de arranque de la segunda gestión de gobierno del MAS y, en otra salida algo desconcertante, García

Linera dijo que el «horizonte» de la revolución boliviana era «el socialismo». Frente a lo cual el ya mencionado Dabdoub, quien entonces ya se había convertido en aliado del oficialismo, declaró que el sector que representaba no temía al socialismo gubernamental, pues «el empresario no tiene ideología (...) Si (...) el socialismo que se nos plantea (...) reconoce a la propiedad privada [y] facilita la generación de empleo»⁷. Al final, la ideología oficial se estabilizó en una orientación sintetizada por dos fórmulas: la «economía plural» o coexistencia de la gran propiedad con los emprendimientos populares y las formas productivas colectivistas que se dan en el campo, y el «socialismo comunitario», que con su apelación a un crecimiento más armónico e igualitario tiene un valor ético y retórico antes que económico.

El contraste entre las teorías revolucionarias sobre la democracia de García Linera y el grupo Comuna (1998-2005), por un lado, y la práctica representativa que el MAS realizaba desde su fundación en los años 90, por el otro, dio pábulo también a debates

5. A. García Linera: «El 'capitalismo andino-amazónico'» en *Le Monde diplomatique*, edición chilena, 1/2006.

6. F. Molina: *Evo Morales y el retorno de la izquierda nacionalista. Trayectoria de las ideologías antiliberales a través de la historia contemporánea de Bolivia*, Eureka, La Paz, 2006. V. tb. Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto: *La revolución de Evo Morales. De la coca al Palacio*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2007.

7. «Patronal boliviana no teme al socialismo planteado por Gobierno de Morales» en *Hoy Bolivia.com*, 1/2/2010

sobre la calidad de la adhesión del MAS a la democracia⁸. Y finalmente, la ideología oficial en este campo se estabilizó en la aprobación, en 2009, de una Constitución con elementos liberales, «aliberales» e innovaciones «posliberales», que si bien complementaba la democracia representativa con derechos y modos de organización colectivos, la mantenía como columna vertebral del sistema político.

Desde el principio, la oposición liberal asignó al gobierno una condición «autoritaria», ya que este usaba su mayoría de más de dos tercios en la Asamblea Legislativa y sus grandes números electorales para saltarse las salvaguardas que hasta entonces se habían considerado imprescindibles para la preservación del pluralismo, tales como enjuiciar lo menos posible a los líderes opositores, no acosar a la prensa privada, no monopolizar la comunicación pública, no usar con descaro los recursos estatales en las campañas oficialistas, no esconder o tergiversar la información estatal, etc. La suposición de que la poliarquía boliviana no era pluralista⁹ respondía entonces, en particular, a la tendencia del MAS a redactar o interpretar las leyes de manera que favorecieran su propio poder. Por ejemplo, el oficialismo impuso normas electorales que valoran más el voto rural que el urbano, que es lo que le convenía; por la misma razón se prohibió el financiamiento estatal a los partidos; se pusieron obstáculos legales a la crítica a

los candidatos oficiales en el periodo de campaña electoral, etc. Al mismo tiempo, los medios de comunicación críticos del gobierno perdieron la publicidad oficial, que en cambio favoreció abundantemente a los medios que sí mostraron voluntad de acercamiento al oficialismo.

Intelectuales vinculados al gobierno han defendido estas y otras medidas como propias de una democracia no procedimental sino sustantiva, una democracia con proyecto que, mirándose en el espejo del jacobinismo, dejaba de lado las limitaciones legales formalistas (Estado de derecho) y desplegaba su genuina fuerza motora, que no era otra que el logro de la igualdad socioeconómica. Para esta visión, lo importante no es el cumplimiento de reglas, sino que accedan al escenario público y la toma de decisiones sobre la suerte colectiva unas masas indígenas y trabajadoras que hasta ahora han sido simple «carne de cañón electoral» de los partidos oligárquicos.

«No hay democracia por seguir unos procedimientos establecidos sino, precisamente, porque cualesquiera que sean esos procedimientos (...) hay personas y colectividades que ahora buscan participar en la dirección de esos procedimientos, buscan responsabilizarse de la producción

8. F. Molina: *Conversión sin fe. El MAS y la democracia*, Eureka, La Paz, 2007.

9. Robert Dahl: *La democracia y sus críticos*, Paidós, Barcelona, 1992.

de dirección de la sociedad, modificando las normas y procedimientos de la práctica política legítima». Por tanto, «[los] procedimientos e instituciones [democráticas] son medios transitorios, simples efectos revocables del hecho democrático». De esta forma,

Las normas, reglas, instituciones, saberes y legitimidades que regulan la vida política de una sociedad democrática son circunstanciales, cristalizaciones provisionales de la estructura de resolución del desacuerdo anterior, que habrán de dar paso a una nueva estructura de poderes resultante de los nuevos desacuerdos que dan inicio a la acción democrática de una sociedad. La democracia no es la ausencia de reglas, sino la contingencia necesaria de esas reglas y el consenso acordado de esa contingencia (...).¹⁰

Aunque la apelación a la épica de la participación democrática ha ido menguando con el tiempo, conforme los movimientos sociales que se insurreccionaron en 2003 y 2005 se fueron retirando de la escena política y fueron dejando la gestión de la transformación exclusivamente en manos del Estado¹¹, nunca hasta ahora la hegemonía política había dejado de legitimarse con una mayoría electoral indisputable. Por ejemplo, la última vez que el mandato de Morales fue testeado en las urnas, en las elecciones del 12 octubre de 2014, recibió un respaldo de 62% de los votos y obtuvo una mayoría legislativa de más de dos tercios. Sin embargo, el referéndum de 2016 terminó con la posibilidad del

MAS de apelar al poder mayoritario. Con su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para «voltear» la voluntad de la mayoría (por más que esa mayoría fuera estrecha¹²), impuso su hegemonía de una manera legal, pero ilegítima.

¿Cómo ha afectado esto a la crítica de la oposición liberal al «autoritarismo» del régimen boliviano? Como es lógico, ha habido una general percepción de «ruptura» del consenso político que en los años 80 y 90 había dado fundamento al periodo democrático más prolongado de la historia de Bolivia, y que consistía sobre todo en cierta resignación democrática de los actores políticos que permitía la alternancia en el poder. En un tuit, el dirigente opositor Samuel Doria Medina comparó el fallo con un «golpe de Estado», enfoque que luego han repetido otros. Por otro lado, algunos líderes de la oposición, el más estridente de los cuales fue el derechista Jorge Quiroga, comenzaron a considerar al gobierno boliviano como una «tiranía totalitaria». El ex-presidente e historiador Carlos Mesa escribió que Morales se internó por la senda del «totalitarismo, basado, no en el imperio de la ley, sino en el

10. A. García Linera: *Democracia, Estado, Nación*, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2013.

11. A. García Linera: «Las clases altas no tragan que gobierne un indígena», entrevista de F. Molina en *El País*, 16/11/2016.

12. El «No» obtuvo 51,3%, frente a 48,7% del «Sí».

imperio del poder total»¹³. Y analistas internacionales conservadores, como Álvaro Vargas Llosa, también consideraron «dictatorial» a Evo¹⁴.

En la medida en que no sean solo una expresión de la rabia por lo ocurrido, estas categorías pueden conducir a los estrategas de la oposición a callejones sin salida. Por ejemplo, uno de los estrategas de campañas electorales bolivianos, Ricardo Paz, llamó a no entrar en la campaña electoral a la que el MAS está invitando a la oposición –a fin de «pasar la página»– y a concentrarse en organizar manifestaciones pacíficas que logren que Morales desista de ser candidato en 2019¹⁵, un propósito que hoy aparece como muy superior a las fuerzas con que cuenta la oposición. En general, podemos decir que las definiciones extremistas pueden darle a la oposición boliviana una orientación maximalista similar a la que ha tenido la oposición venezolana en diferentes momentos de su lucha contra el chavismo y que ha conducido a esta repetidamente al fracaso.

Los partidos de Doria Medina y del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que se habían inclinado hasta ahora, con matices, hacia el centro político, parecen dudar al enfrentarse a un reiterativo argumento de los radicales, que puede formularse de la siguiente manera: «Ahora que el oficialismo ha torcido la justicia y ha desoído los resultados de la votación en el referéndum, ¿qué nos garantiza que

respetará los resultados de la elección de 2019, que no hará fraude o que no inventará alguna trampa para desconocer su (hipotética) derrota?». Este argumento, si se siguiera hasta el fin, podría sacar a los actores políticos del escenario electoral y llevarlos a adoptar métodos extraparlamentarios.

Sin embargo, la oposición tendrá que llegar hasta ese puente antes de cruzarlo. Que el régimen político haya dejado de ser «democrático» en el sentido de las definiciones minimalistas de democracia¹⁶ –según las cuales un requisito fundamental es que no sea imposible que quienes están en el gobierno pierdan las elecciones– es algo que todavía no se ha probado, que solo se verá en 2019 (aunque se admiten dudas razonables dada la actual conformación del Tribunal Electoral).

Además, que un régimen no sea democrático de acuerdo con las definiciones antedichas no lo convierte automáticamente en dictatorial y mucho menos en totalitario, al menos si usamos estas definiciones en su sentido politológico habitual. Con las limitaciones ya anotadas, Bolivia sigue gozando de las libertades civiles y políticas que diferencian una democracia

13. C. Mesa: «Gases, canicas y descomposición» en blog personal, <<https://carlosdmesa.com/2017/12/25/gases-canicas-y-descomposicion/>>, 24/12/2017.

14. A. Vargas Llosa: «El derecho a ser dictador» en *La Tercera*, 3/12/2017.

15. R. Paz: «¿Qué hacer?» en *Página 7*, 13/12/2017.

16. Guillermo O'Donnell: *Disonancias. Críticas democráticas*, Prometeo, Buenos Aires, 2007.

de una dictadura, como muestra el hecho de que las acusaciones de la oposición en contra de un gobierno «dictatorial» se enuncien desde dentro del país, por los medios masivos de comunicación, etc., y que no haya habido serias represalias en contra de los manifestantes espontáneos de los que hemos hablado. Sin embargo, no cabe duda de que la «democracia plebeya» que instauró el «gobierno de los movimientos sociales» ya no existe en Bolivia, como muestran tantas cosas, entre ellas que últimamente este lema ya no sea usado por los voceros oficialistas. En lugar de la democracia igualitarista del pasado, se ha instaurado, como «retorno» de un fenómeno muy antiguo, lo que podemos llamar «caudillismo», que subordina el conjunto de la institucionalidad y la práctica política democráticas al poder y la voluntad de un líder carismático. El caudillismo vuelve al gobierno aristocrático allí donde nunca ha existido otra aristocracia que la que vence en la lucha política diaria.

Lo más probable es que en los próximos dos años las fuerzas que se desaten en torno de «lo electoral» terminen por arrastrar a la oposición y, con ella, a todo el país. En este tiempo la oposición deberá resolver cuestiones claves, como la definición (o no) de un candidato único y la sustitución de Mesa –quien posee el mejor puntaje en las encuestas, pero ha rechazado postularse– como baza contra el evismo. En este camino, una mala

caracterización del gobierno puede resultar un obstáculo. Al exagerar sus rasgos autoritarios, la oposición podría mostrarse incapaz de distinguir las fuentes de legitimidad con que el MAS todavía cuenta y sentirse tentada de plantear la lucha en un terreno solo en apariencia más realista, que sería el de la movilización y la denuncia de la «dictadura» de cara al público extranjero, en lugar de emplearse en una acumulación política en todos los escenarios posibles, proceso que se ha revelado complicado y larguísimo, y que por eso la desanima y exaspera.

■ Tendencias socioelectorales

El 3 de diciembre, inmediatamente después del fallo que habilitó a Morales para intentar su cuarta reelección en 2019, se produjeron las elecciones judiciales. Desde 2011, los altos magistrados se eligen por voto popular en Bolivia, un método que no ha cuajado hasta ahora. En esta ocasión, más de la mitad de los electores expresó su rechazo al gobierno y sus medidas, tal como le pidiera la oposición, mediante el gesto de anular el voto. El voto nulo fue abrumador en los barrios más acomodados de las ciudades y se fue debilitando conforme estos barrios se hacían más populares o el conteo llegaba a las áreas rurales. También fue más fuerte en Santa Cruz de la Sierra (alrededor de 67%) que en el resto de las ciudades. Y fue más débil en El Alto, alrededor de 47%. Lo inverso pasó con el voto válido (es decir,

a favor de alguno de los candidatos en liza, sin importar cuál fuera), que es al que llamó el MAS y que en promedio estuvo alrededor de 35%. Este resultado ratificó casi con exactitud el del referéndum constitucional de 2016 en cuanto al rechazo a Evo (o voto por el «No»). Este también fue más intenso en Santa Cruz que en el resto del país y más fuerte en los sectores acomodados que en los populares.

Para estudiar la composición de un determinado resultado electoral, el método más preciso es el de la «encuesta autopsia», que desgraciadamente se practica muy poco en Bolivia. Sin embargo, en 2016, excepcionalmente, el Tribunal Supremo Electoral realizó una de estas encuestas después del referéndum constitucional y llegó, entre otras conclusiones, a la siguiente, que es fundamental para el análisis sociológico del proceso político-electoral boliviano: *mientras más jóvenes son y más ingresos tienen los electores, más tienden al «No», es decir, a rechazar a Evo, y mientras más edad y menos ingresos tienen, más votan «Sí», es decir, más apoyan a Morales.*

Esta conclusión se ha confirmado en las elecciones judiciales del 3 de diciembre pasado, por lo menos en la variable que podemos observar, que es la socioeconómica. Mientras más acomodados eran los electores, más negativos respecto del gobierno, y a la inversa. De ahí que en algunos recintos electorales de La Paz, por ejemplo en el del Colegio Franco Boliviano en el barrio de Achumani, que es uno de

los más ricos de la ciudad, alrededor de 85% de los votos fuera nulo. Las elecciones judiciales también mostraron que el MAS puede contar con un voto fiel de 35%, incluso en un proceso tan complicado como este (en el que la actitud de los electores era contraria al acto de votar por alguien a quien no conocían ni querían conocer). Ahora bien, el 21 de febrero de 2016, en el referendo constitucional –una elección muy difícil porque su deseo reeleccionario iba en contrasentido de la tradición política del país–, el MAS obtuvo un respaldo de 49% de los electores. ¿Qué pasó entonces con el 14% con el que ya no contó en las judiciales?

El sociólogo experto en opinión pública Julio Córdova tiene la hipótesis de que ese grupo de votantes pertenece mayoritariamente a la «clase media baja»; es un electorado espontáneamente favorable a las medidas básicas tomadas por el MAS, pero que duda cada vez más de Morales sin por eso simpatizar con la oposición. Y dice que es probable que este grupo explique una buena parte del voto en blanco en las judiciales, que coincidentemente fue de 15%. Así, Córdova establece la siguiente demografía electoral: dos polos enfrentados de alrededor de 35% cada uno: el 35% de los antievistas convencidos, que se confunde con la «clase media típica» o más acomodada, frente al 35% de los evistas convencidos, que proviene casi íntegramente de la «clase baja». Junto a ellos, el 30% de la «clase media baja», que se divide en dos grupos iguales: 15% de ex-votantes por Morales que

lo abandonaron en las urnas en 2016 y 2017, pero que no son «propiedad» (es decir, no son voto duro) de la oposición, especialmente si tomamos en cuenta que esta probablemente se presentará en 2019 en varias versiones; y 15% que votó por Morales en 2016 pero que no es «patrimonio» del MAS, como lo muestra que lo abandonara el 3 de diciembre pasado. Algo que, por supuesto, el carácter de la elección hacía más fácil: no debe olvidarse que los candidatos a jueces eran desconocidos para los votantes y la ley no les permite hacer campaña proselitista. En una elección similar en 2011 también se impuso el voto nulo y en blanco, sin consecuencias para la reelección de Morales.

Es obvio decir que los resultados de los comicios de 2019 dependerán enteramente de este 30% del padrón; en otras palabras, de la clase media baja. El resultado dependerá de: a) si algún grupo de la oposición sabe atraer al 15% de los antievistas «blandos» y b) si el MAS logra reconquistar al 15% de los evistas *soft*, como dice la jerga del marketing político. Este hecho, es decir, la correlación entre alineamiento político y pertenencia social, que es casi totalmente favorable al oficialismo en el tercio inferior y casi completamente favorable a la oposición en el tercio superior, es quizá el más característico de la situación política boliviana. Y se debe a un conjunto de factores de corto y largo plazo:

- indica que la política gubernamental, su énfasis redistributivo y su

simbología reivindicativa han sido finalmente *propobre*, como por otra parte correspondía con la extracción social del MAS. Pero también muestra algo distinto: que la clase media alta es la que, por conveniencia, educación o ideología, posee una mayor sensibilidad respecto a los quiebres de la institucionalidad democrática, que probablemente no son tan importantes para los sectores populares;

- la polarización social deja ver también lo que es evidente: quiénes han ganado y quiénes han perdido (material pero también simbólicamente) durante el proceso político dirigido por Morales en estos 12 años;

- y, en el amplio escenario histórico, es una de las consecuencias de la sempiterna heterogeneidad, de la desigualdad de ingresos y derechos, de grupos sociales y étnicos; una fractura que convierte a algunos partidos en oligárquicos y torna a otros, más allá de sus merecimientos históricos y sus resultados concretos, en portavoces de la identidad oprimida. Solo esta polaridad entre un «nosotros» y un «ellos» puede explicar fenómenos como que el chavismo continúe en el poder, pese a sus múltiples falencias y su indudable autoritarismo, o que la oposición boliviana tienda a encerrarse en un discurso autorreferencial, para ser ovacionada en los salones, lo que le genera graves dificultades para convertir su mayor legitimidad democrática actual en una mayoría operativa como la que necesita para llegar al poder. ☐

Indignación y crisis política en Honduras

LETICIA SALOMÓN

Las recientes elecciones hondureñas introdujeron muchas dudas acerca de la seguridad del sistema de procesamiento de datos, hecho que fue denunciado tanto por la oposición como por organizaciones internacionales. Los opositores a la reelección de Juan Orlando Hernández han hecho valer su derecho constitucional a la desobediencia civil y han salido a las calles a denunciar fraude electoral y violaciones de la Constitución, en el contexto represivo abierto con el golpe de Estado de 2009 y continuado desde entonces. La corrupción, la impunidad y la violencia constituyen el combustible para una intensa indignación popular.

El domingo 26 de noviembre de 2017, la ciudadanía hondureña acudió a ejercer el sufragio para las elecciones generales que definirían nuevos ocupantes del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, las corporaciones municipales y el Parlamento Centroamericano. El proceso electoral de ese día se desarrolló con gran afluencia a los centros de votación y sin mayores signos de violencia, por lo cual los observadores nacionales e internacionales coincidieron en que la elección había sido una verdadera fiesta cívica. Pero el panorama se volvió

sombrío cuando, al cierre del proceso, se prolongó el anuncio del ganador por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pese a que las autoridades se habían comprometido a difundir los datos a primeras horas de la noche.

Pasada la una de la mañana, el TSE, obligado por la presión nacional e internacional, anunció oficialmente que con 57,19% de las actas recibidas por transmisión directa se ubicaba a la cabeza Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra

Leticia Salomón: es una socióloga y economista hondureña. Es investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) en temas de defensa, seguridad y gobernabilidad; directora de Investigación Científica y Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras e integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

Palabras claves: corrupción, elecciones, golpe de Estado, Juan Orlando Hernández, Honduras.

la Dictadura, que reunía al partido Libertad y Refundación (Libre) –nacido como brazo político de la resistencia nacional contra el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales en 2009–, al pequeño grupo socialdemócrata Partido Innovación Nacional y Unidad (PINU) y a los seguidores de Salvador Nasralla, un periodista deportivo que fundó el Partido Anti Corrupción (PAC), participante en las elecciones de 2013.

Pero la suspensión de la energía eléctrica y las caídas del sistema informático por varias horas provocaron la desconfianza e indignación de la ciudadanía, especialmente cuando el propio Tribunal anunció que la tendencia se había revertido y que el ganador era entonces el presidente, Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección por el Partido Nacional. Los seguidores de la Alianza de Oposición salieron a las calles a denunciar el fraude que se realizaba en el TSE y recibieron como respuesta oficial el establecimiento de un toque de queda desde las seis de la tarde a las seis de la mañana y el despliegue de las fuerzas armadas, la Policía Militar del Orden Público y la Policía Nacional con órdenes de reprimir a los manifestantes. El saldo fue la muerte de 34 civiles que ejercían el derecho constitucional a la desobediencia civil.

■ El contexto nacional

En Honduras existe la prohibición constitucional de la reelección presidencial,

con penas muy severas para quienes la promuevan. La única posibilidad de impulsarla es mediante una consulta popular y con previa aprobación de la reforma constitucional por el Congreso Nacional en una legislatura y ratificación en la siguiente. Nada de esto se hizo para que el actual presidente pudiera participar en las elecciones del 26 de noviembre y de hecho, cuando en 2009 el presidente Zelaya Rosales (2006-2010) intentó impulsar ese proceso, lo castigaron con un golpe de Estado que lo sacó del poder y del país, acusado de querer violentar la Constitución de la República y de intentar reelegirse para un nuevo periodo presidencial.

No obstante, Hernández logró, desde la Presidencia de la República, que la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados eran y son controlados directamente por él, «interpretara» la Constitución y avalara un fallo que permite la reelección¹. Esto fue ratificado por el TSE, que selló de esa manera la violación de la Constitución de la República, frente al silencio de las mismas fuerzas que habían avalado el golpe de Estado de 2009 en circunstancias similares:

1. Para ello, se declaró la inaplicabilidad del artículo 239 (que prohíbe la reelección y castiga a quienes la impulsen) y del quinto numeral del artículo 42 de la Constitución de la República y, en consecuencia, la inconstitucionalidad del artículo 330 del Código Penal, porque estas normativas estarían en contradicción con otros artículos de la propia Constitución, además de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

fuerzas armadas, cúpulas religiosas, dueños de medios de comunicación, líderes de gremios empresariales y Congreso Nacional (controlado también por el partido de gobierno).

El control de los magistrados del TSE, y particularmente de su presidente, ha sido fundamental en este proceso electoral, al igual que en los anteriores: el TSE está conformado por un representante de cada uno de los dos partidos tradicionales de Honduras, el Liberal y el Nacional, que se disputaron las elecciones desde 1980, más un representante de la Democracia Cristiana, un minúsculo partido que saca una cantidad reducida de votos, pero que siempre es el aliado incondicional del partido mayoritario en el Congreso Nacional. Por otro lado, la situación de la representación en el TSE no se modificó pese a la aparición de dos partidos nuevos que en las elecciones de 2013 quedaron en segundo lugar (Libre) y en cuarto lugar (PAC). De esta manera se evidenció, una vez más, el «pacto de gobernabilidad» entre los partidos tradicionales que hizo que el presidente del TSE fuera un incondicional del presidente de la República, al igual que sus otros dos integrantes, dispuestos siempre a negociar.

Por todos es conocida la escasa legitimidad del TSE, tanto en las elecciones primarias de los partidos como en las elecciones generales. Siempre ha existido manipulación de resultados electorales, de común acuerdo entre

los dos partidos tradicionales y el TSE: ahí se ha decidido cuándo se deja de contar las actas; cuándo se «aumenta» la cantidad de personas que acuden a votar, para minimizar el abstencionismo –como ocurrió en las elecciones de 2009, en pleno golpe de Estado, cuando la resistencia hizo un llamado a no votar–; en cuánto se reducen los votos nulos; cómo se concede una mayor cantidad de votos a candidatos claves de ambos partidos e, inclusive, se negocian los números de diputados o alcaldes de uno u otro partido. Un aspecto central en estos procesos es el control del sistema electrónico de procesamiento de actas electorales: es allí donde se produce la manipulación técnica de resultados que ya contienen vicios de las etapas previas. Es en el control manipulador del sistema de procesamiento donde está la clave y es eso, precisamente, lo que por primera vez adquirió visibilidad internacional y obligó a los observadores a concentrarse en lo que no suele mirarse cuando se producen elecciones en Honduras (y en muchos otros países).

El otro elemento que jugó un papel clave en estas elecciones fue la existencia de un nuevo actor político, la Alianza de Oposición, que no estaba en el circuito negociador del TSE, con el agravante de que constituía una de las dos fuerzas políticas de mayor beligerancia, porque el Partido Liberal sigue relegado y pagando el costo político de haberle hecho un golpe de Estado a un presidente surgido de

sus propias filas y de haber sido un aliado incondicional del Partido Nacional en la toma de decisiones en el Poder Legislativo.

■ El contexto internacional

Como suele suceder, las elecciones hondureñas fueron observadas por misiones internacionales entre las que se destacaron la de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la de la Unión Europea, invitadas por el propio gobierno con la intención de conseguir legitimación internacional. Pero esta vez las condiciones poselectorales y las acciones poco convencionales tomadas por el TSE forzaron a las misiones a adoptar un papel más beligerante a favor de la transparencia de los resultados, presionadas por la oposición. Ante las denuncias y demostraciones de la manipulación técnica de los datos, la OEA, por ejemplo, se vio obligada a traer a un experto de la Universidad de Georgetown para analizar la confiabilidad de los resultados, al que se sumó un equipo de profesores de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ambos equipos concluyeron, por separado, que «sobre la base de este análisis, se rechaza la proposición de que el Partido Nacional ganara legítimamente las elecciones»² y que la tendencia no había cambiado luego de contabilizar 57,19% y 73,8% de los datos³. Esto se suma a la afirmación pública del magistrado suplente del TSE, Ramiro

Lobo, en el sentido de que la tendencia mostrada por el TSE en la madrugada del 27 de diciembre, que le daba una ventaja de casi cinco puntos al candidato opositor Nasralla, «era irreversible»⁴. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA concluyó, por su parte, que «la Misión (...) puede afirmar que [el sistema] no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad (...) la MOE considera que ha observado un proceso de baja calidad electoral y por ende no puede afirmar que las dudas sobre el mismo estén hoy esclarecidas»⁵.

Lo anterior llevó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a plantear la necesidad de realizar nuevas elecciones, a lo cual se opuso el gobierno hondureño, y el TSE declaró finalmente ganador al presidente/candidato para evitar mayores contratiempos que afectaran la toma de posesión del 27 de enero de 2018. Almagro señaló: «Creemos muy importante la aprobación de este informe para evitar la lumpenización [deterioro] de la

2. Irfan Nooruddin: «Analysis for the Organization of American States», 17/12/2017, disponible en <www.oas.org/fpdb/press/Nooruddin-Analysis-for-OAS-Honduras-2017.pdf>.

3. Jorge Destephen, Iván Enríquez, Cristian Cruz y Marvin Guifarro: «Análisis del cambio de tendencia nivel electivo presidencial, Elecciones Generales, Honduras 2017», 16/12/2017.

4. Rudy Mejía: «Magistrado del TSE: La tendencia es irreversible» en *Tiempo Digital*, 27/11/2017.

5. «Informe Final de la MOE-Honduras sobre las Elecciones Generales del 26 de noviembre de 2017», 27/12/2017.

política, en el sentido de que en un proceso electoral vale todo, y que no importa la dimensión de las irregularidades o malas prácticas que incluso puede afectar al resultado»⁶.

Así, por primera vez se despierta el interés en unos y la curiosidad en otros organismos internacionales por el cinismo y la desfachatez con que el TSE revirtió tendencias estadísticas irreversibles, provocó la caída del sistema informático, al igual que del fluido eléctrico, en repetidas ocasiones, y habilitó que se contaran votos en papeles impecablemente lisos cuando el votante estaba obligado a doblarlos para depositarlos en las urnas. Lo ocurrido en Honduras atrajo la atención de matemáticos especialistas en procesamiento de datos de varias partes del mundo, de periodistas y comentaristas de cadenas internacionales, de políticos con auténtica vocación democrática y de grupos solidarios que, con fuerza similar o superior a 2009, alzan sus voces para protestar contra el fraude electoral producido en el país.

Pero no toda la reacción ha sido «técnica». Hay otros que colocan una mirada ideológica sobre lo que ha ocurrido con la manipulación de los resultados electorales y observan que el coordinador de la Alianza Opositora es el ex-presidente Zelaya Rosales, hacia el cual existe una animadversión expresa por su simpatía con el gobierno venezolano. Y la reflexión es

rápida: «No importa que haya habido fraude en contra del candidato de la Alianza de Oposición, mejor que quede quien ha demostrado ser un conservador, un baluarte del orden y un luchador frontal contra la violencia». La situación va más allá cuando se valora que el presidente/candidato es un verdadero «amigo de Estados Unidos», como lo ha demostrado al permitir la lucha estadounidense contra el narcotráfico en tierra hondureña y el apoyo incondicional a ese país en decisiones internacionales que reciben el rechazo de la mayoría de los países del mundo. Se valora también la lucha contra la violencia de maras y pandillas y de delincuentes comunes, para lo cual se invierten cantidades enormes de recursos estatales y se deforma el papel de los militares, todo ello como propaganda hacia afuera. Hacia adentro, la ciudadanía siente que la situación empeora porque no se combaten las causas de esta violencia ni se coloca al ser humano en el centro de la acción estatal.

■ La sombra de la corrupción

El aspecto central de la crisis político-electoral hondureña radica en que nunca se imaginaron que Hernández podría perder las elecciones teniendo el control de todos los mecanismos legítimos o ilegítimos, legales o

6. «Almagro busca que OEA apruebe informe electoral sobre Honduras» en *El Herald*, 4/1/2018.

ilegales, que garantizarían su triunfo en las elecciones del 26 de noviembre. Menospreciaron el hartazgo de la ciudadanía, su frustración y su impotencia ante lo que estaba ocurriendo. A la frustración de no haber podido revertir el golpe de Estado de 2009, pese a la enorme movilización social a que dio lugar, siguieron las constantes y masivas manifestaciones en contra de la corrupción que azota el país. En particular, generó rechazo el saqueo a los recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, buena parte de los cuales, según denuncias, fueron transferidos a la campaña electoral de Hernández en 2013, hecho que el mismo candidato debió reconocer para luego anunciar que esos recursos serían devueltos al Estado⁷.

Esas manifestaciones, que se mantuvieron durante varios meses con antorchas y bajo el lema «Fuera JOH», concentraron a varias generaciones indignadas y a una diversidad social y política que se rebelaba ante la corrupción e impunidad que parecían haberse adueñado de la institucionalidad del Estado. Pero de nada sirvieron las denuncias, los señalamientos y los detalles del escandaloso saqueo, ya que nunca fueron capaces de llegar hasta altas figuras del mundo político y empresarial ni lograron castigar debidamente a los responsables de actos criminales, como la venta dolosa de medicinas adulteradas o vencidas que provocaron la muerte de muchos hondureños que no encontraban las

medicinas necesarias ni el tratamiento adecuado para sus diversas afecciones de salud⁸.

La lucha contra la corrupción y la impunidad fue asumida por el gobierno, que promovió la creación de una entidad similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pero con menos funciones y mayores esperanzas de controlarla en sus procesos investigativos. Mientras la de Guatemala fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la de Honduras lo fue por la OEA y fue denominada Misión de Apoyo en la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Rápidamente, ha tenido que enfrentar presiones del gobierno y cuestionamientos de la ciudadanía ante la necesidad de ver a los corruptos procesados y purgando alguna pena. Pero la corrupción está asociada directamente al gobierno y no se encuentra investigado ni castigado ningún funcionario, empleado de alta categoría o político de larga data.

El grito «Fuera JOH» se aplacó con el tiempo pero no desapareció de la conciencia colectiva. La propuesta de Nasralla de combatir la corrupción se

7. «El presidente de Honduras reconoce financiación fraudulenta» en *BBC Mundo*, 4/6/2015.

8. V. Thelma Mejía: «La MACCIH en Honduras: conformación, temas centrales, fortalezas y debilidades» en Víctor Meza (coord.): *El control de la corrupción y la impunidad en Honduras, 2014-2018*, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Tegucigalpa, 2017.

convirtió en una consigna movilizadora que prometía restaurar la fe en el sistema electoral, en la democracia y en el derecho a que el voto realmente contara al momento de elegir a los nuevos conductores del país.

■ La debilidad institucional

La experiencia acumulada en los últimos años hizo que la ciudadanía, indefensa ante las instituciones del Estado –en particular, ante una Corte Suprema de Justicia subordinada y controlada por los intereses político-partidarios–, intentara por la vía electoral un cambio de grandes dimensiones que fuera capaz de restaurar la esperanza de vencer el fraude que se gestaba. El gran desafío era desmontar el fraude electoral, desafiar a la maquinaria del Estado y poner en evidencia su incondicionalidad ante un partido y, específicamente, ante un candidato de ese partido.

De ahí la articulación de una Alianza de Oposición a la que luego se denominó Alianza de Oposición contra la Dictadura, que apostó por un cambio tendiente a recomponer el Estado de derecho y rescatar la institucionalidad aprisionada por los los partidos tradicionales y los grandes intereses económicos que giraban en torno de estos. También se intentaba frenar la escalada acaparadora de Hernández, quien hizo de la compra de conciencias de funcionarios claves, medios de comunicación y líderes políticos

y religiosos un hecho normal y cotidiano. Por ello no es casual que sean estos mismos sectores los que salieron a aplaudir la decisión del TSE de declarar ganador al presidente/candidato y los que asociaron la desobediencia civil ante el fraude electoral con violencia callejera, delincuencia y actividades pandilleriles, con el propósito de justificar la escalada represiva que se desató cuando el gobierno sacó a militares y policías a las calles para sofocar la ola de protestas que se extendía por todo el país. Son ellos quienes invocan la paz y tranquilidad para acallar las voces cuestionadoras y sofocar las marchas incómodas, y quienes proclaman el orden frente a la anarquía y la resignación espiritual ante la perturbadora demanda social.

■ Perspectivas

La certeza ciudadana de la existencia de un gran fraude electoral, tal como lo habían anunciado desde la articulación de la Alianza de Oposición, y la constatación de que nuevamente el gobierno se saldría con la suya, burlando la voluntad de los electores que acudieron a votar de forma masiva, pacífica y esperanzada, motivaron la salida a las calles para ejercer el derecho constitucional a la «desobediencia civil a un gobierno usurpador». La interrupción momentánea de las protestas por las festividades de Navidad y Año Nuevo solo dio un momento para la articulación de una estrategia de lucha que no presagia nada alentador para el país.

La comunidad internacional ha ido reconociendo de forma cautelosa a Hernández. Desde Honduras, con gran parte de la ciudadanía indignada por la corrupción, la impunidad, la violencia y el fraude electoral, se sigue acumulando ese sentimiento de indefensión que se arrastra desde hace mucho tiempo, a la espera del momento propicio para estallar en un contexto nacional e internacional plagado de cinismo, pragmatismo y servilismo. Mientras la situación social se perfila grave para el primer año de gobierno ilegal, por los antecedentes expuestos, la situación política en el Congreso se perfila igualmente difícil, en tanto el partido de

gobierno está cerca de la mayoría simple. A esto se suma la puesta a prueba del Partido Liberal, que tendrá que definirse entre su integración a la verdadera oposición o su anulación política en caso de aliarse –como siempre lo ha hecho en aras de asegurar una supuesta gobernabilidad– con el partido de gobierno, con lo cual terminaría de hundir sus posibilidades de recuperación político-electoral. Así está el panorama en Honduras: sombrío y confuso para unos, pero profundamente esperanzador para otros. La gran pregunta sigue siendo: ¿hasta dónde llegará la capacidad de soportar de una ciudadanía cada vez más indignada? ☐



Diciembre de 2017

Barcelona

Nueva época Nº 117

VIOLENCIA DE GÉNERO Y RELACIONES INTERNACIONALES

Coordinado por Alison Brysk

ARTÍCULOS: **Alison Brysk**, Introducción: violencia de género y relaciones internacionales. **Lynn Stephen**, Violencia transfronteriza de género y mujeres indígenas refugiadas de Guatemala. **Celeste Saccomano**, El feminicidio en América Latina: ¿vacío legal o déficit del Estado de derecho? **Jerónimo Ríos y Roberto Brocate**, Violencia sexual como crimen de lesa humanidad: los casos de Guatemala y Perú. **Verónica María Teresi**, La violencia de género en Brasil: un balance de la Ley «Maria da Penha» (2006-2016). **María Catalina Monroy y Felipe Jaramillo Ruiz**, Violencia urbana: la Red Mujer y Hábitat de América Latina (el caso de Colombia). **Cristina Oddone**, Poner el foco en los hombres para eliminar la violencia contra las mujeres. **OTROS ARTÍCULOS:** **Itziar Ruiz-Giménez Arrieta**, Una mirada crítica al «humanitarismo» desde los estudios pospositivistas. **Ana María Valido Alou**, Las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos: incidencia en América Latina. **RESEÑAS DE LIBROS.**

Revista CIDOB d'Afers Internacionals es una publicación académica cuatrimestral de relaciones internacionales y desarrollo de la Fundación CIDOB, c/ Elisabets, 12 - 08001 Barcelona, España, Tel. (+34) 93 302 6495. Se edita en formato impreso y digital. Página web: <www.cidob.org/publicaciones/filter/53216>.

Cataluña y la triple crisis española

MACIÀ SERRA / GEMMA UBASART GONZÁLEZ / SALVADOR MARTÍ I PUIG

El *procés* independentista catalán puso en crisis el Estado del 78, surgido de la Transición posfranquista. Un ala del antiguo nacionalismo catalán, tradicionalmente moderado en lo político y liberal en lo económico, se lanzó a una deriva que incluyó una declaración de independencia unilateral. Aunque esta no tuvo efectos reales, pareció dinamitar la política catalana. Más allá de las motivaciones coyunturales, las raíces de la crisis actual son profundas y van más allá de la histórica tensión entre el nacionalismo catalán y el español: están relacionadas con la triple crisis –económica, política y territorial– que ha experimentado España desde 2007. Como se vio el 21 de diciembre, una elección no basta para resolverla.

¿Cómo interpretar las elecciones catalanas del 21 de diciembre (21-D) de 2017? y, sobre todo, ¿cómo interpretar la dinámica política de confrontación entre las instituciones catalanas y las del gobierno de Madrid, y la tensión política entre un sector de la sociedad catalana que se siente exclusivamente catalán y reclama un referéndum para decidir

que la Comunidad Autónoma de Cataluña pueda convertirse en una república independiente, y otro sector que quiere mantenerse dentro del Reino de España? Estas cuestiones son las que pretende responder este texto. Para ello, presenta el contexto en que se han desarrollado las elecciones del 21-D, en segundo lugar analiza las campañas electorales y,

Macià Serra: es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Se desempeña como profesor del Área de Ciencia Política de la Universidad de Girona.

Gemma Ubasart González: es doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora del Área de Ciencia Política y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona.

Salvador Martí i Puig: es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeña como coordinador del Área de Ciencia Política de la Universidad de Girona y es miembro del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.

Palabras claves: crisis, independentismo, nacionalismo, Carles Puigdemont, Cataluña, España.

finalmente, muestra e interpreta resultados y aporta algunas claves de lectura de los posibles desenlaces.

■ El 21-D y su contexto

Antes de analizar las elecciones del 21-D, es preciso señalar que estas fueron un episodio más de un ciclo político que ha encadenado, a lo largo de una década, grandes movilizaciones en las calles, dos referendos no oficiales (los del 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017) y tres comicios para elegir a los diputados del Parlament catalán (2010, 2012, 2015).

No es fácil identificar una ola de movilización ni un proceso de realineamiento político en tiempo real; sin embargo, se puede afirmar que en Cataluña se han dado ambos fenómenos. Sus raíces son profundas y van más allá de la histórica tensión entre el nacionalismo catalán y el español, pues también están relacionadas con la triple crisis (económica, política y territorial) que ha experimentado España desde 2007. La crisis económica no puede desligarse de la crisis financiera global, aunque fue particularmente onerosa en España debido a un modelo de crecimiento extremadamente frágil y con tasas de desempleo que doblaban (y continúan doblando) la media europea. La crisis política fue producto del agotamiento de los consensos de la Transición y de la esclerosis partidocrática generada por un sistema bipartidista

entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que alentó la falta de control (y, por tanto, la corrupción) y que terminó creando fuertes dosis de apatía, sobre todo entre los jóvenes. La crisis territorial, por último, fue producto del agotamiento de un modelo de organización territorial del Estado que nació en 1978 para dar respuesta a las demandas de autogobierno del País Vasco y Cataluña, pero que derivó en la creación de 17 entidades (las comunidades autónomas) con instituciones propias, prestadoras de servicios y sin capacidad de recaudación fiscal (con excepción del País Vasco y Navarra). Así, la apelación al «agravio» comparativo daba rendimientos electorales en la política catalana, a la par que para el gobierno de Madrid posicionarse en contra de las reivindicaciones catalanistas también daba rendimientos electorales.

En este marco cabe interpretar el incremento del sentimiento independentista en Cataluña durante la última década, que se nutre de una variopinta mezcla de ingredientes, entre los que se destacan el rechazo al modelo territorial vigente, el hastío frente a la clase política tradicional (la de Madrid y la de Barcelona) y el malestar y la incertidumbre frente a la crisis económica. Este sentimiento, que se expresó en grandes movilizaciones sociales en las calles (sobre todo en las celebraciones del 11 de septiembre, fiesta «nacional»

de Cataluña), es el que pretendió capitalizar en 2012 el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, quien había llegado al poder en 2010 con un discurso que apelaba al rigor neoliberal y a las políticas *business-friendly*¹.

Desde entonces, los acontecimientos políticos se aceleraron, a la par que implosionó el sistema de partidos y la dinámica de competencia electoral se polarizó entre dos bloques: el independentista y el «unionista». En este marco se celebraron en 2015 nuevas elecciones en las que las dos formaciones independentistas mayoritarias, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Convergència i Unió (ciu), se presentaron coaligadas en una plataforma llamada Junts pel Sí (jxsí). El programa de esta plataforma contenía una hoja de ruta para transitar unilateralmente hacia la independencia, ya que se consideraba que las propias elecciones constituían un plebiscito y que si ganaban los independentistas quedaba legitimada esa vía para la secesión. La coalición jxsí, con el apoyo de una tercera formación independentista de izquierda radical, la Candidatura de Unidad Popular (cup), obtuvo la mayoría absoluta en el Parlament en escaños, pero no en votos. Después de una corta y tortuosa legislatura se introdujeron algunas modificaciones en la hoja de ruta para materializar la promesa electoral: durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017, se aprobó (de forma expeditiva,

en trámite de urgencia y con el único apoyo de los partidos independentistas) una legislación que emplazaba a la ciudadanía catalana a la celebración de un referéndum sobre la independencia el día 1º de octubre de 2017 para, en caso de un resultado afirmativo, proclamar sin dilaciones la República catalana. Este referéndum se llevó a cabo mediante la autorganización ciudadana, a pesar de la prohibición y la represión de las fuerzas de seguridad del Estado.

Todas estas acciones, sin embargo, fueron suspendidas y posteriormente declaradas nulas por el Tribunal Constitucional por no respetar la Constitución española ni el Estatut

1. En 2010, Convergència i Unió (ciu) recuperaba las riendas del gobierno catalán después de haber gobernado las dos anteriores legislaturas una coalición progresista (excepción en tres décadas de autogobierno). En los dos años que siguen, y gracias a un acuerdo de gobernabilidad con el pp, los convergentes hacen de Cataluña un laboratorio neoliberal y el Ejecutivo catalán se presenta como un alumno aventajado de las políticas de austeridad promovidas en Europa. Esta acción gubernamental provoca importantes movilizaciones sociales: el 15-M en Cataluña tiene un carácter más social que en España. Cabe tener en cuenta que para los nuevos dirigentes de ciu, que se consolidaron en la oposición contra los gobiernos progresistas de Pasqual Maragall y José Montilla, todo era preferible a una vuelta al poder de la izquierda, y el contexto de crisis económica *a priori* puede provocarla. Existe socialmente una desafección generalizada frente a un modelo autonómico que se fue agotando, desafección que algunas organizaciones ciudadanas articulan como demanda independentista. Después de la gran manifestación independentista del 11 de septiembre de 2012, ciu decidió convocar a elecciones abrazando por primera vez los postulados independentistas y subiéndose a la ola.

catalán. Además, el mismo día que se votó la República en el Parlament catalán, el Senado español aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, una norma de coerción federal que faculta al gobierno del Estado a asumir las riendas de una comunidad autónoma (artículo nunca utilizado desde su inclusión en la ley fundamental). La misma tarde de su aprobación, el presidente Mariano Rajoy anunció la destitución del presidente Carles Puigdemont y de su gobierno, la disolución del Legislativo catalán y una convocatoria electoral en el plazo más corto posible: el 21 de diciembre. El Consejo de Garantías Estatutarias (un órgano similar al Tribunal Constitucional previsto en el Estatut catalán de 2006), en su dictamen 14/2017, cree justificada la disolución y la rápida convocatoria de elecciones, pero no así la destitución del presidente y el gobierno ni la intervención de la Generalitat.

A pesar de la dura disputa y de haber llegado tan lejos con la votación de una declaración de independencia unilateral y la activación del artículo 155 de la Constitución, todos los partidos catalanes aceptaron participar en la cita electoral. Además, el Legislativo y el Ejecutivo catalanes acataron sustantivamente la intervención y no opusieron resistencia a la decisión del gobierno central. Parecía pues que el retorno a la legalidad que pedía Europa se transitaba

implícitamente a través de las urnas. Dicho esto, el *president* Puigdemont y otros *consellers* (ministros) se desplazaron a Bruselas y desde allí hicieron un acto simbólico de reconstrucción de las instituciones, aunque posteriormente su estadía en la ciudad belga derivó en una estrategia de defensa judicial contra la orden de detención emanada de la justicia española. Entretanto, el vicepresidente Oriol Junqueras (de ERC) quedó detenido en una cárcel madrileña y siguieron el mismo camino hacia la prisión preventiva otros políticos catalanes involucrados en el movimiento independentista.

Cabe tener en cuenta que durante los dos últimos años el fenómeno de la judicialización de la política ha ido ganando centralidad en el conflicto catalán. El gobierno español ha ido delegando en el Tribunal Constitucional, jueces y fiscales (e incluso en la policía) la resolución del litigio. Así pues, existen distintos procedimientos judiciales en marcha, a los que se añadió la iniciativa del Juzgado de Instrucción N° 3 de la Audiencia Nacional, que citó a declarar por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos al (ex-) presidente catalán y a los miembros de su Ejecutivo. A esto se añadió posteriormente la convocatoria por parte del Tribunal Supremo de los miembros de la mesa del Parlament catalán (aún aforados). A los primeros se les aplicó prisión provisional como

medida cautelar; los segundos quedaron libres bajo fianza. Así las cosas, empezó la campaña electoral *sui generis* del 21-D: dos de los principales candidatos estaban en el «exilio» (Puigdemont) o en prisión (Junqueras).

■ Con la emoción a flor de piel

El 27 de octubre, Rajoy convocó las elecciones, lo que generó un escenario complejo para las fuerzas independentistas: se iban a medir en comicios en un momento de desconcierto. Con esa iniciativa el gobierno español se sintió ganador. El independentismo se había quedado sin relato unitario y parecía enfrentarse a una desmovilización de sus partidarios: una parte de sus votantes sentía frustración porque no se había llegado lo suficientemente lejos, se había votado la declaración de independencia sin efectos reales y, finalmente, se había acatado la intervención de Madrid y la República catalana parecía reducirse a una aventura sin perspectivas; otra parte, más conservadora, estaba asustada por las repercusiones económicas y de fractura social que parecía estar causando la vía unilateral, lo que incluía la salida formal de empresas de Cataluña. Por contra, la defensa del *statu quo* mostraba una fuerza y vitalidad importantes, como pudo verse en las manifestaciones del 8 y 29 de octubre convocadas por la Societat Civil Catalana «por la unidad de España», hecho que podía

traducirse en un ligero crecimiento del voto antiindependentista. Ciudadanos, pero también el PP o el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)² podían arañar algunos votos de la abstención capaces de mover el tablero electoral hacia la pérdida de la mayoría absoluta de las fuerzas independentistas sumadas.

Pero el panorama mutó rápidamente. Apenas después de la rueda de prensa que dio Puigdemont el lunes 30 de octubre desde Bruselas, las actuaciones de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien dictó una orden internacional de captura contra él, activaron una nueva dinámica electoral. Más allá de la evaluación jurídica que se pueda hacer del encarcelamiento de los integrantes del Ejecutivo catalán (que una parte muy importante de juristas valora como desproporcionada), esa decisión tuvo evidentes efectos políticos. Los procedimientos judiciales, una vez iniciados, toman autonomía en países donde existe –aun con sus problemas– la separación de poderes. Y en este caso no parece que el fallo judicial fuera muy en la línea de lo que tenía pensado el gobierno central. Así pues, estas acciones volvieron a movilizar a los votantes independentistas y cerraron filas alrededor de un único relato: el antirrepresivo. Ver a los representantes políticos entre rejas incomodó también al resto de las

2. Articulado con el PSOE en el nivel estatal.

fuerzas no alineadas, como Catalunya en Comú-Podem (CEC-P) e incluso los socialistas del PSC, partidos sin capacidad de obtener rédito electoral en una escena nuevamente polarizada por las decisiones judiciales.

La oferta de fuerzas políticas con que se llegó a elecciones es compleja y es la foto fija de un largo proceso de mutación del sistema de partidos catalán, que había permanecido estable desde la recuperación del autogobierno con las elecciones de 1980 hasta 2012. En un primer lugar cabe situar al sector independentista, que ha actuado como un bloque en la pasada legislatura a pesar de la gran diferencia ideológica presente entre sus miembros: el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECat) –de ideología liberal y heredero de Convergència–, la ERC (centroizquierda) y la CUP (anticapitalista)³. Ahora bien, cabe decir que la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) incluyó al PDECat pero lo desbordó, y por ello se bautizó, de manera más precisa, como la «lista del *president*» cesado⁴. En un segundo lugar se sitúa el bloque del *statu quo*: Ciudadanos (centroderecha) y PP (conservador). En un tercer lugar, se sitúa un espacio intermedio (algunos sitúan al PSC en el segundo bloque) que promueve el federalismo o la plurinacionalidad: PSC (centroizquierda) y CEC-P (izquierda). Cabe decir que a estas dos fuerzas políticas no las favorece en lo más mínimo la polarización en el eje nacional que se

produce en estas elecciones (como ya había ocurrido en las de 2015).

Las elecciones del 21-D son excepcionales como mínimo por tres razones: son convocadas por una instancia a la que no le compete, se hacen con el propósito de elegir los representantes de una institución intervenida y se celebran con la mayor parte de los líderes políticos independentistas en la cárcel o en el extranjero. La campaña también tiene características excepcionales: se desarrolla con mucha emotividad y cada bloque se va cargando de razones. Por un lado, se construye un relato contra la represión y la «maldad» del Estado

3. La CUP es una organización independentista catalana de extrema izquierda. Durante la primera década del siglo XXI su presencia se limitó a la política local y obtuvo representación en algunos ayuntamientos. No es hasta 2012 cuando se presenta a las elecciones al Parlamento catalán, donde obtiene tres escaños. No se presenta a las elecciones legislativas ni a las elecciones al Parlamento Europeo. Las decisiones son tomadas siguiendo mecanismos asamblearios y los parlamentarios no pueden estar más de una legislatura en su cargo. A partir de las elecciones de 2015, priorizan claramente el eje nacional, facilitan el gobierno de un presidente de *civ* y votan sus presupuestos.

4. Existe cierto distanciamiento entre los dirigentes del PDECat y Puigdemont (y su entorno), tanto que en la lista electoral JxCat no se encuentran los principales dirigentes partidarios. Mientras que los primeros trabajan para reconstruir ideológicamente el partido y para darle contornos liberales y moderados a la organización, JxCat adopta un discurso radicalizado en el eje nacional, poniendo acento en la unilateralidad y el enfrentamiento con el Estado español. Este discurso puede asustar a una parte de los tradicionales votantes del PDECat por los efectos económicos y de fractura social que ha generado el último tramo del *procés* independentista.

español; por el otro, contra la «amenaza» independentista y en favor del artículo 155. Se trata de una campaña muy polarizada en torno de un solo eje. Ahora bien, aunque esté focalizada en la cuestión nacional, no se discute en ella realmente sobre cómo canalizar el conflicto. Solo lo hacen de manera tímida desde CEC-P y el PSC, pero sin encontrar contrincantes dispuestos a profundizar la discusión. Evidentemente no se habla de programas, de políticas sociales, económicas o culturales. Existió un intento por parte de Xavier Domènech (líder de CEC-P) de emular a Jeremy Corbyn en el último tramo de campaña e introducir el eje ideológico en favor de un acuerdo catalanista y de progreso para tratar de romper los dos bloques existentes. Pero el intento no resultó electoralmente rentable.

Las incógnitas de campaña fueron cuatro y modularon los detalles de la disputa: a) qué movilización electoral se produciría y a quién beneficiaría un potencial aumento de la participación; b) si el independentista continuaría siendo mayoritario o no, o ninguno de los dos conseguía sumar una mayoría; c) qué reconfiguraciones intrabloques podían producirse, y allí aparecían la batalla entre JxCat y ERC por la dirección del espacio nacionalista catalán, y la de Ciudadanos y el PSC como oposición a la apuesta independentista; y d) qué capacidad habría después de las elecciones de establecer coaliciones

gubernamentales a partir de un sistema de partidos multipartidista atomizado y polarizado; y si existiría algún partido, sobre todo del espacio intermedio, indispensable para formar alianzas.

■ Resultado: se mantuvieron los bloques

Las elecciones al Parlamento de Cataluña se regulan a través de un sistema electoral cuya principal característica es el elevado grado de proporcionalidad. Esta deriva de la aplicación de las normas subsidiarias del Estatut y de la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de España, ya que la catalana es la única comunidad autónoma del Estado sin ley electoral propia. Los 135 escaños del Parlament se reparten en 4 distritos electorales en los que Barcelona escoge 85 escaños, Girona 17, Lleida 15 y Tarragona 18. El elevado número de escaños por distrito, junto con una fórmula proporcional como es la del sistema D'Hondt, provoca que en todas las circunscripciones obtengan representación un mínimo de 5 partidos. Así, aun constatando una desigualdad en el valor del voto entre circunscripciones (en las urbanas, el escaño es más «caro» que en las rurales), como sucede también en el caso de las elecciones generales españolas, el principal efecto del sistema electoral es la gran proporcionalidad entre el porcentaje de

votos y el porcentaje de escaños en todos los partidos. Esta proporcionalidad permite y hasta incentiva un sistema multipartidista. Después de 30 años (1980-2003) en los que 5 partidos se dividían la representación parlamentaria, la fragmentación ha aumentado y hoy son 7 las fuerzas con diputados autonómicos.

Las elecciones del 21-D fueron las cuartas elecciones al Parlament en siete años. La reiteración electoral no ha conllevado modificaciones significativas del mapa electoral catalán, sino que más bien es una muestra de la inestabilidad política (la convocatoria a elecciones anticipadas no era una práctica usual antes de 2010). En el cuadro 1 se muestran los resultados de las elecciones del 21-D comparados con los de las elecciones del 27 de septiembre de 2015.

Los resultados de las elecciones del 21-D no han diferido demasiado de los anteriores. Si se parte de la existencia de dos bloques, uno favorable a la independencia formado por JxCat, ERC y CUP, y otro contrario a ella, formado por Ciudadanos, PSC y PP (con CEC-P intentando zafarse de la dinámica de la polarización), los resultados entre los bloques apenas han sufrido modificaciones. Ello ha permitido al bloque independentista volver a disponer de una mayoría absoluta de escaños en el Parlament, aunque como en 2015, sin llegar a 50% de los votos.

Pero cuando se focaliza el análisis dentro de cada bloque se pueden apreciar más cambios. Por primera vez ha ganado las elecciones en votos y escaños Ciudadanos, un partido cuyo rasgo más definitorio es una

Cuadro 1
Resultados de las elecciones al Parlament, 2015 y 2017

2015				2017			
Candidaturas	Votos	% votos	Escaños	Candidaturas	Votos	% votos	Escaños
JxSí (CiU+ERC)	1.628.714	39,6	62	JxCat	940.602	21,7	34
				ERC	929.407	21,4	32
Ciudadanos	736.364	17,9	25	Ciudadanos	1.102.099	25,4	37
PSC	523.283	12,7	16	PSC	602.969	13,9	17
CSQP*	367.613	8,9	11	CEC-P	323.695	7,5	8
PP	349.193	8,5	11	PP	184.108	4,2	3
CUP	337.794	8,2	10	CUP	193.352	4,5	4

Fuente: elaboración de los autores.
* Catalunya Sí que es Pot, alianza que incluyó a Podemos.

actitud hostil hacia el nacionalismo catalán. No obstante, el resultado del resto de los partidos lo sitúa sin opciones reales de formar una mayoría de gobierno. Los socialistas se mantienen, mientras que el PP, el partido de Rajoy, ha quedado reducido a unos casi anecdóticos cuatro diputados. Los votantes a favor de la unidad de España, pues, se han agrupado en Ciudadanos, un partido nuevo sin casos de corrupción y que muestra una oposición rotunda al proceso independentista.

Por otro lado, en el campo independentista, no se reeditó la coalición ganadora en las elecciones previas (JxSí), lo que dio lugar a la candidatura de JxCat y ERC. En la pugna intraindependentista ganó JxCat por muy poco (2 escaños y apenas 11.000 votos), pero obtuvo los peores resultados de la historia de su espacio político, mientras que ERC obtuvo sus mejores resultados desde la muerte del dictador Francisco Franco. La extrema izquierda nacionalista, representada por la CUP, perdió más de la mitad de sus fuerzas, pero se mantuvo en el Parlament.

En definitiva, en cada uno de los bloques ganó la fuerza política que articuló en campaña un discurso más radical en el eje nacional (fuera a favor o en contra de la independencia): JxCat y Ciudadanos. Curiosamente, ambos partidos pertenecen al grupo liberal europeo, en detrimento de ERC

y PSC, partidos de centroizquierda, que planteaban sus propuestas con un acento más dialogante. Más aún debe considerarse que ERC partía con unas grandes expectativas electorales que desde hace un par de años hasta las últimas encuestas publicadas lo daban como líder indiscutible en las elecciones catalanas. Por último, CEC-P, la candidatura con fuertes lazos con Podemos, intentó huir de la lógica frentista priorizando la agenda social, pero no consiguió mantener sus anteriores resultados, que ya habían sido modestos.

Hay algunos elementos relevantes que es preciso señalar, más allá de la dinámica de cada partido concreto. En primer lugar, la altísima participación, más de 4 puntos superior a la de 2015, que se ubicó en 79%, la más alta en elecciones autonómicas. Hasta las elecciones autonómicas de 2012 no se había superado el 65% de participación en elecciones al Parlament catalán, mientras que en las generales se habían registrado participaciones históricas, como 80,8% en las de 1982.

La altísima participación muestra, pues, la percepción mayoritaria de que en estas elecciones se dirimían aspectos políticos cruciales. Aunque siempre estuvo presente en la política catalana, la cuestión de la independencia se ha convertido en el clivaje más relevante para explicar el comportamiento electoral en las dos últimas

Cuadro 2

Recuerdo de voto en 2015 y respuesta a la pregunta: «¿Quiere usted que Cataluña se convierta en un Estado independiente?»

Recuerdo de voto 2015	Sí	No
JXSí	97,7	5,2
Ciudadanos	1,2	98,8
PSC	8,5	87,4
CSQSP	30,4	55,7
PP	8,3	91,7
CUP	93,3	3,4
Total	48,7	43,6

Fuente: Centro de Estudios de Opinión (CEO), Generalitat de Catalunya: «Barómetro de opinión política. 3ª ola 2017», 2017.

elecciones al Parlament. Tanto es así que el cuadro 2 muestra que existe una alineación importantísima entre la opinión acerca de la independencia catalana y el voto.

La opinión respecto a la independencia es así el elemento central a la hora de explicar el comportamiento en las elecciones al Parlament catalán. No obstante, esto no es así en todas las elecciones celebradas en Cataluña. En las elecciones legislativas de ámbito español, CEC-P (en el marco del auge de Podemos) ganó en Cataluña con más de 800.000 votos, con lo que casi triplicó los resultados obtenidos el 21-D. Este es el caso más extremo, pero en todos los partidos se encuentran diferencias relevantes en función del tipo de elección. Por lo tanto, muchos

votantes se comportan de una manera diferente de acuerdo con lo que se esté eligiendo.

También hay que destacar la diferente distribución geográfica del apoyo a cada bloque. En la mayor parte del territorio catalán, en el ámbito rural y en las ciudades medianas se verifica un amplio apoyo al independentismo. En cambio, el apoyo al unionismo está mucho más concentrado geográficamente. Su apoyo más fuerte se ubica en el centro del litoral catalán, en la ciudad de Barcelona y su entorno metropolitano, y a lo largo de la costa hasta la ciudad de Tarragona, zonas densamente pobladas.

■ Posibles desenlaces y algunas conclusiones

Después de las elecciones del 21-D, la cuestión va a residir en la capacidad de generar una coalición consistente para poder llevar a cabo un gobierno que complete la legislatura. De los resultados se observa que la única coalición con posibilidades de formar gobierno es la independentista integrada por ERC y JXC, siempre y cuando la CUP se abstenga. Con todo, al momento de escribir este artículo, una de las incógnitas es qué va a ocurrir con los líderes independentistas que han sido elegidos pero que están encarcelados o en Bélgica. También debe destacarse una desconfianza creciente cada vez más pública entre los dirigentes de las dos fuerzas

políticas independentistas, lo que puede dificultar los pactos.

Como los números no dan opción a un gobierno alternativo, si los independentistas no pueden conformar gobierno, nadie puede descartar nuevas elecciones en un futuro inmediato. Pero si eso ocurre, tampoco está claro si habría muchos cambios en el comportamiento electoral de los catalanes tras una nueva convocatoria. Si una cosa han dejado en claro estas elecciones es que no será repitiéndolas como va a solucionarse el conflicto.

Pero más allá de señalar que las elecciones del 21-D han sido excepcionales, se puede afirmar que responden, como ya lo hicieron las anteriores, a la calificación de elecciones críticas, por el hecho de haber supuesto un proceso de realineamiento electoral en tanto transformaron la lógica de competencia que existió desde 1980 hasta 2012, que se nucleaba de manera importante a partir del eje ideológico (y, de manera complementaria, el nacional). Uno de los textos

seminales sobre realineamiento expone que este sucede cuando en una elección se produce una súbita alteración del clivaje preexistente entre el electorado y aparece un clivaje nuevo⁵. Según la bibliografía al uso, hay seis elementos atribuibles al proceso de realineamiento electoral: a) la existencia de una gran participación electoral; b) la aparición de conflictos en la nominación de candidatos dentro de alguno de los grandes partidos en liza, así como de nuevos conflictos intrabloque; c) la irrupción de nuevos partidos en la arena electoral; d) la aparición de nuevos temas de conflicto (*issue cleavages*); e) una fuerte polarización ideológica y, finalmente, f) cambios sustanciales en las propuestas de políticas⁶. Sin duda, todo esto ha ocurrido en Cataluña y el reto ahora será gestionar esta nueva realidad política mediante el diálogo y preservando la convivencia. ☐

5. V.O. Key: «A Theory of Critical Elections» en *Journal of Politics* vol. 17 N° 1, 2/1955.

6. David R. Mayhew: *Electoral Realignment: A Critique of an American Genre*, Yale University Press, New Haven, 2002.



TEMA CENTRAL

América Latina: respuestas
populares a las crisis



¿Qué crisis y qué respuestas?

*Pensar las crisis
en su contexto
sociohistórico*

La mayoría de los países latinoamericanos comparten historias múltiples, fraccionadas y frecuentemente contradictorias en las que enfrentaron y enfrentan numerosas formas de crisis. En este marco, el enfoque centrado en respuestas a las crisis contribuye a «completar» un panorama fraccionado. Este artículo intenta conceptualizar una noción del término «crisis» que abra caminos para abordar y discutir las formas en que diversos actores latinoamericanos han enfrentado de múltiples maneras momentos y estructuras de crisis, con el objetivo de (re)imaginar y remapear el mundo social y

JULIA ROTH / ALBERT MANKE

concebir posibles alianzas alternativas.

¿Por qué hablar de las crisis en América Latina hoy? ¿Y de qué «crisis» estamos hablando? ¿Qué es lo que caracteriza una crisis, y la(s) crisis actual(es)? ¿Qué temporalidad conllevan y qué respuestas se pueden identificar para manejarla(s)? Conceptualmente, el análisis de las crisis permite abrir un diálogo que, por un lado, entiende que el actual desarrollo socioeconómico no sostenible es en parte consecuencia del capitalismo y de la expansión de la

Julia Roth: trabaja como investigadora y docente en el proyecto del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) «Las Américas como espacio de entrelazamientos» del Centro para Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld. Su trabajo está marcado por perspectivas feministas, antirracistas y poscoloniales. Su actual proyecto examina el hip hop como fuente de conocimiento feminista. Correo electrónico: <julia.roth@uni-bielefeld.de>.

Albert Manke: es doctor en Historia y magíster en Filología Hispánica, Filosofía e Historia por la Universidad de Colonia. Trabaja como investigador en el proyecto del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) «Las Américas como espacio de entrelazamientos» del Centro para Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld. Actualmente es profesor visitante en la Universidad de California en Berkeley. Correo electrónico: <albert.manke@uni-bielefeld.de>.

Palabras claves: capitalismo, crisis, historia, neoliberalismo, poscolonialidad, América Latina.

cultura europeo-occidental a escala global. Por otro lado, a la hora de buscar posibles soluciones y vías hacia un desarrollo más sostenible, igualitario y equitativo, no queremos quedar anclados meramente en las respuestas que parecían ofrecer las disputas ideológicas (entre ellas, las religiosas) del siglo xx. Siguiendo las ideas del historiador Prasenjit Duara, el desarrollo actual se puede entender como una «dinámica entre la historia circular y la trascendencia institucionalizada [que] se transforma radicalmente bajo las condiciones del capitalismo y del Estado-nación que el mismo ha incentivado»¹. Según Duara, para la búsqueda de un futuro mejor que incluya a toda la humanidad y el medio en que se desenvuelve, hay que (re)conceptualizar el desarrollo de las culturas (para no reducirlo a la entidad de naciones) en forma cooperativa y sostenible. Con el fin de conseguir esto, Duara enfoca su argumento en la circularidad de ideas, personas y bienes y en la fertilización recíproca de las culturas, para lo cual hace referencia a tradiciones asiáticas que enfatizan la sustentabilidad; de esta forma se crea una modernidad transnacional postoccidental. Arjun Appadurai, por su parte, observa una traslación hacia la noción de soberanía cultural como efecto de la pérdida de soberanía económica en el neoliberalismo globalizado, lo cual se puede observar en las distintas expresiones de movimientos populistas recientes². En el caso latinoamericano, un número creciente de autores hace referencia a tradiciones indígenas para evocar modelos de convivencia más equilibrados y sostenibles³.

Nuestro acercamiento a la problemática de la(s) crisis se inspira en estas ideas macroconceptuales y trata de llevarlas a una escala regional, local o incluso micro. De esta manera, se puede constatar que algunas de las propuestas para solucionar crisis en varias regiones de América Latina tienen un carácter tradicionalmente ideologizado de protesta polarizada entre «el pueblo» y las elites, mientras que otras tratan de entablar cooperaciones entre grupos de diversa procedencia social y orientación política, para crear alianzas transversales que puedan hacer frente a los retos actuales y a los problemas del futuro de nuestras sociedades. Por esto, las respuestas⁴ que observamos responden tanto

1. P. Duara: *The Crisis of Global Modernity: Asian Traditions and a Sustainable Future*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, p. 7.

2. A. Appadurai: «Democracy Fatigue» en Heinrich Geiselberger (ed.): *The Great Regression*, Polity, Cambridge, 2017.

3. Ver Antonio Luis Hidalgo-Capitán, Alejandro Guillén García y Nancy Deleg Guazha (eds.): *Sumak Kawsay Yuyay. Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre sumak kawsay*, CIM / FIUCUHU / PYDLOS, Huelva-Cuenca, 2014.

4. Las calificamos como «respuestas» porque no nos atrevemos a verlas como soluciones, sino más bien como propuestas que pretenden darle solución a una situación o coyuntura crítica (tomando este último adjetivo como derivado de «crisis», no de «criticar»). En algunos casos se pueden constatar ciertos logros de estos intentos, pero para poder evaluar sus consecuencias a largo plazo habrá que volver a revisar su impacto en el futuro.

al esquema establecido de «popular» en el sentido de «pueblo» como al que se propone aquí, que lo deriva de «población» en un sentido más amplio, con la convicción de que diversos actores de la sociedad pueden ser promotores de ideas progresistas y sostenibles, tanto en el ámbito social como en la economía, la política y la cultura. En el contexto latinoamericano, los «populismos» se basan en una noción original de la democracia como «poder del pueblo», y podemos preguntarnos si hay un término medio más allá de la oposición del «pueblo» como el «otro» del Estado para lograr la autodeterminación del pueblo mediante el derecho⁵. En este sentido, creemos que es posible superar el neoliberalismo y, a la vez, la polarización entre izquierdas y derechas, mediante lo que Ernesto Laclau denominó la «dicotomización del espacio social» o la «ruptura populista»⁶ por medio de alianzas que superan fronteras ideológicas pero no pierden el norte de un bien común para todos en un sentido humanista, cooperativo e incluyente⁷. Aun así, esto no quiere decir que se pueda constatar una superación de la perspectiva nacional y, por ende, «patriótica» en el sentido que critica Appadurai⁸. Nuestra intención realmente no es la de abordar tendencias populistas actuales que en parte son el resultado de movimientos del tipo mencionado; lo que nos interesa es la multiplicidad de propuestas para solucionar crisis. Sin embargo, como apunta Ulrich Brand, hay que tener en cuenta que no todas las respuestas a las crisis se pueden calificar como progresistas⁹.

Partimos de la observación de que en América Latina existe una larga tradición de enfrentar momentos y coyunturas de crisis y por ello ha habido experiencias múltiples en el desarrollo de estrategias de resistencia y de supervivencia. Nos parece importante tener en cuenta este marco y su profundidad histórica. Como afirma la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, el riesgo de una «historia única» (*single story*) es contar la historia de un pueblo o un lugar comenzando con «en segundo lugar» (*secondly*), no porque la historia sea así falsa, sino porque resulta «incompleta»¹⁰. El enfoque

5. V. el artículo de Valeria Coronel y Luciana Cadahia en este número.

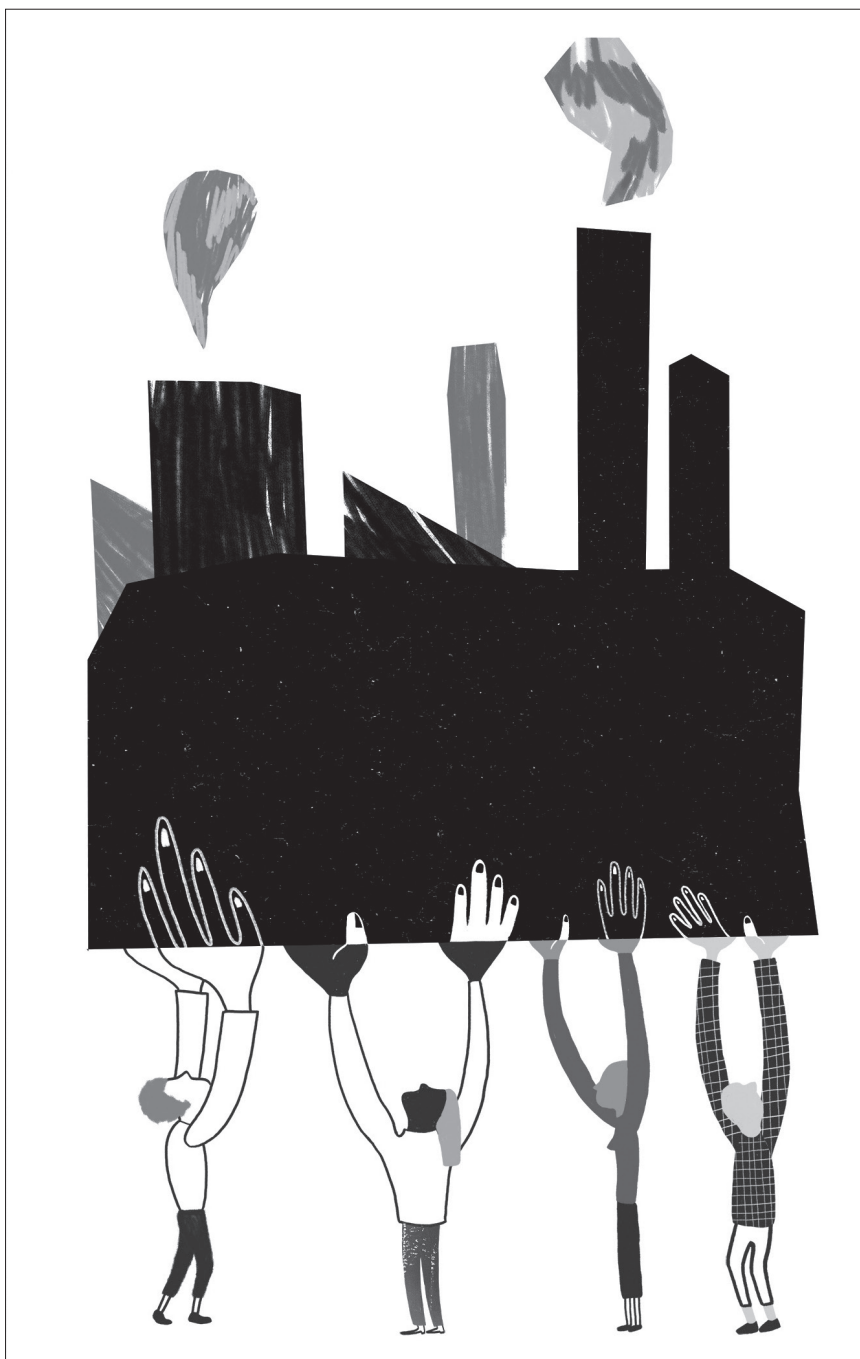
6. E. Laclau: «La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana» en *Nueva Sociedad* N°205, 9-10/2006, disponible en <www.nuso.org>.

7. Para una discusión acerca de la superación del neoliberalismo y la creación de un futuro sostenible, v. tb. los artículos reunidos en el volumen editado por Ulrich Brand y Nicola Sekler en *Development an Dialogue* N° 51, «Postneoliberalism: A Beginning Debate», 1/2009.

8. A. Appadurai: *La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización*, FCE, Buenos Aires, 2001.

9. U. Brand: «Die Multiple Krise: Dynamik und Zusammenhang der Krisendimensionen, Anforderungen an politische Institutionen und Chancen progressiver Politik», Heinrich-Böll-Stiftung, Berlín, 9/11/2009.

10. También nos recuerda que «es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder». C. Ngozi Adichie: «The Danger of the Single Story», charla TED, 2009, disponible en <www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es>.



centrado en respuestas a las crisis contribuye a «completar» un panorama fragmentario, ya que la mayoría de los países latinoamericanos comparten historias múltiples, fragmentarias y frecuentemente contradictorias en las que enfrentaron y enfrentan múltiples formas de crisis –la resistencia contra la colonización, las guerras de independencia, las numerosas guerras civiles, dictaduras, injerencias imperialistas, distintas luchas sociales y culturales así como, más recientemente, los efectos del capitalismo neoliberal globalizado y de las estructuras de poder colonial que persisten hasta el día de hoy¹¹. No obstante, nos parece importante evitar el riesgo de estigmatizar todo un continente como una región de/en crisis. Más bien, nos interesa una conceptualización del término «crisis» que abra caminos para enfrentar y discutir las formas en que diversos actores latinoamericanos enfrentaron y siguen enfrentando momentos y estructuras de crisis con el objetivo de (re)imaginar y remapear el mundo social.

En general, podemos considerar que una crisis describe una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso determinado. El término «crisis» alude a un periodo o una situación de dificultades o cambios bruscos, y puede referir a contextos económicos, sociales, religiosos, políticos, históricos, culturales, sanitarios y muchos más. Hay definiciones psicoanalíticas que subrayan el potencial creativo de las crisis, o definiciones marxistas que constatan que el sistema capitalista fue dinamizado cíclicamente por las crisis, mientras que las teorías de la coyuntura definen una crisis de la economía política en relación con la expansión (léase: prosperidad), contracción (depresión) y punto de cambio. Desde una perspectiva (interseccional¹²) de género, observamos en la reciente «reacción» populista también una crisis de la supremacía blanca y masculinista (o de la masculinidad blanca hegemónica). En la investigación histórica y en las ciencias políticas, se habla de crisis como culminación de conflictos, los cuales pueden tener como consecuencia rebeliones, revoluciones o guerras.

Simultáneamente, hay que tomar en cuenta que el uso cada vez más frecuente y a veces indiscriminado de la noción de crisis en las ciencias sociales resulta problemático por sus concepciones objetivistas, su carácter negativo y su presunción teleológica. Esto se debe a que los enfoques aislados de la economía pueden no considerar las percepciones sociales, subjetivas e intersubjetivas¹³.

11. U. Brand: ob. cit.

12. Véase J. Roth: «Intersectionality» en *InterAmerican Wiki: Terms - Concepts - Critical Perspectives*, 2015, disponible en <www.uni-bielefeld.de/cias/wiki/i_Intersectionality.html>.

13. V. el artículo de A. Grimson en este número.

Alejandro Grimson entiende las crisis como momentos históricos que funcionan como cambios del marco referencial y, simultáneamente, requieren un nuevo sentido. La idea de «crisis crónica» indica una «sedimentación» y previsibilidad de la crisis; por tanto, Grimson propone un acercamiento al concepto de crisis más amplio cuando habla de «culturas de crisis». No obstante, concede que existen crisis económicas reales y no meramente simbólicas, como en casos de hambrunas, muertes o de exclusión social, que contribuyen a reforzar la idea de una «cultura de crisis» frente a una «crisis de la cultura»¹⁴.

La idea de «crisis crónica» indica una «sedimentación» y previsibilidad de la crisis ■

En el contexto actual emergió la noción de «crisis múltiples» que nos afectan en este momento histórico a escala global. Ese concepto se entiende como una constelación específica histórica de diferentes procesos de crisis que se influyen mutuamente dentro del capitalismo financiero neoliberal¹⁵. Estas diferentes articulaciones de la(s) crisis están relacionadas con el modelo de producción capitalista basado en los combustibles fósiles, modelo que ha sido reforzado por las condiciones neoliberales e imperiales. En este marco, además, se transformaron las instituciones políticas y sociales/comunales con el objeto de asegurar el orden neoliberal-imperial¹⁶.

Desde la conquista europea, América Latina y el Caribe formaron parte fundamental del desarrollo del capitalismo europeo. En muchos aspectos, la región sirvió como «laboratorio de la modernidad» de neto corte eurocéntrico. Como consecuencia de ello, la colonialidad –entendida no como periodo histórico sino como dimensión estructural de poder de las sociedades latinoamericanas– está marcando los procesos sociales de manera profunda y sigue manteniendo las desigualdades que persisten en el continente latinoamericano y otros espacios colonizados, así como los privilegios de las sociedades colonizadoras¹⁷. Por consiguiente, las desigualdades históricas y coloniales se reforzaron, como puede observarse en la explotación de los recursos naturales

14. Ibíd.

15. U. Brand: ob. cit.; Alex Demirović, Julia Dück, Florian Becker y Pauline Bader (eds.): *VielfachKrise. Im finanzmarktdominierten Kapitalismus, vsa* / Attac, Hamburgo, 2011.

16. U. Brand: ob. cit., p. 2.

17. Aníbal Quijano: *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*, Clacso, Buenos Aires, 2000; Walter D. Mignolo: *Historias locales, diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*, Akal, Madrid, 2011; Olaf Kaltmeier: *Konjunkturen der (De-)Kolonialisierung: Indigene Gemeinschaften, Hacienda und Staat In den ecuadorianischen Anden von der Kolonialzeit bis heute*, Transcript, Bielefeld, 2016.

por parte de empresas multinacionales, en el acaparamiento de tierras (*land grabbing*) o en los procesos migratorios en América Latina.

Paralelamente, el subcontinente posee una larga tradición de prácticas y conceptos de resistencia, que «englobaron» rebeliones, cimarronajes, contrarrelatos y crónicas, así como huelgas de nacimiento¹⁸, guerras de independencia, movimientos sociales y prácticas culturales, musicales y religiosas. No es de sorprender que de allí también haya salido una gran cantidad de pensamiento crítico y de elaboraciones teóricas que cuestionan conceptos hegemónicos de la modernidad y hacen frente así a las desigualdades que son producto de ellos y diseñan modelos alternativos de convivencia. En este campo encontramos a pensadores anticoloniales como José Martí, Frantz Fanon o Aimé Césaire o los

**No es de sorprender
 que de América Latina
 haya salido una gran
 cantidad de elaboraciones
 teóricas que cuestionan
 conceptos hegemónicos
 de la modernidad ■**

defensores de la teoría de la dependencia (Fernando Henrique Cardoso, Enzo Falleto, André Gunder Frank), quienes criticaron la persistente dependencia estructural de los países poscoloniales. Se puede pensar también en la pedagogía crítica (Paulo Freire), o en los representantes de la teología de la liberación (Rubem Alves, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez Merino, Enrique Dussel), quienes cuestionaron

conceptos eurocéntricos de la modernidad y propusieron alternativas para superar las desigualdades, como por ejemplo la «transmodernidad» de Enrique Dussel. Por su parte, pensadores del sistema-mundo y decoloniales (Immanuel Wallerstein, Aníbal Quijano, Santiago Castro Gómez, Fernando Coronil, Walter Mignolo, Freya Shiwy) o feministas (como María Lugones y Sylvia Wynter) conceptualizaron la relación dialéctica entre modernidad y colonialidad y la construcción de un «occidentalismo» (Coronil) como posición superior del Oeste, aquello que hay que superar para llegar a una situación de «decolonialidad» (Walter Mignolo). Además, representantes y activistas de comunidades indígenas influyeron sobre políticos de varios países en los que conceptos como el «buen vivir» o *sumak kwasay* llegaron incluso a la Constitución.

Las formas de resistencia se han articulado además mediante movimientos sociales como los feministas, el indianismo, los movimientos afro, los movimientos revolucionarios en Haití, México o Cuba. Más recientemente, a través de movimientos sociales que se oponen y resisten frente a la megaminería,

18. Formas de protesta entre mujeres colonizadas de América y África.

protestas de trabajadores desocupados, estudiantes o sin techo. Simultáneamente, emergen maneras alternativas de vida social y cohabitación en forma de cooperativas o colectivos¹⁹.

Como subraya Brand²⁰, los movimientos sociales en los países del llamado Norte global han sido más bien débiles y se constituyeron sobre todo como movimientos alterglobalización, como es el caso de la Asociación por la Tasaación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (Attac). En los países del llamado Sur global, y particularmente en América Latina, los movimientos sociales progresistas ya se movilizaron y actuaron en la década de 1990 y algunos contribuyeron de manera decisiva a los triunfos electorales de la izquierda en varios países²¹. Fernando Coronil analizó la ambigüedad de esos gobiernos que surgieron entre 1989 y 2010 en el marco de los «dilemas actuales de la izquierda en el contexto de la lucha recurrente de la América Latina por alcanzar alguna variante del progreso occidental», en el marco de un futuro incierto: «Mientras que el largo plazo ha sido históricamente el horizonte de la izquierda, el predominio abrumador del capitalismo ha restringido ahora el terreno de la izquierda latinoamericana al corto plazo»²².

No hace mucho tiempo, varios gobiernos de izquierda en América Latina entraron en una crisis seria, lo cual en varios casos llevó a su caída. A pesar de lo reciente de este fenómeno que Tarso Genro describió acertadamente como «crisis de la izquierda», ya se pueden identificar algunas de las causas de esta tendencia que manifiesta un decidido retroceso al neoliberalismo. Sin embargo, todavía nos faltan propuestas para soluciones sostenibles. Para el caso europeo, Juan Carlos Monedero²³ —que saca conclusiones interesantes para aplicar a otras partes del hemisferio occidental, incluyendo América Latina— interpreta esta vuelta atrás como otro ataque más a la democracia. Según Monedero, este ataque se nutre de la crisis económica y del desencanto de vastos sectores de la población, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que atribuyen la crisis al fracaso de las elites. De hecho, si tenemos en cuenta los problemas sociales masivos y las protestas enérgicas contra las políticas neoliberales, bien se puede hablar de crisis múltiples y/o estados de crisis.

19. Ver Judith Butler: «Precarious Life, Vulnerability, and the Ethics of Cohabitation» en *The Journal of Speculative Philosophy* vol. 26 N° 2, 2012.

20. U. Brand: ob. cit.

21. Ibíd., p. 13.

22. F. Coronil: «El futuro en el ruedo. Historia y utopía en América Latina (1889-2010)» en *Casa de las Américas* N° 276, 7-9/2014.

23. J.C. Monedero: «¿Posdemocracia? Frente al pesimismo de la nostalgia, el optimismo de la desobediencia» en *Nueva Sociedad* N° 240, 8-9/2012, disponible en <www.nuso.org>.

Para solucionar estas crisis se requieren propuestas viables y constructivas tanto por parte de las elites (determinantes políticas dominantes) como de múltiples actores de las sociedades en cuestión. Se requieren además consideraciones en el nivel internacional (y transnacional); ante el trasfondo ya descrito de historias entrelazadas (y desigualdades coloniales/globales), es claro que las crisis casi nunca se refieren exclusivamente a contextos nacionales o regionales, sino que casi siempre hay un aspecto que tiene que ver con interrelaciones con otras regiones o historias. Procesos y desigualdades interdependientes y globales se pueden observar, por ejemplo, respecto al cambio climático, la explotación de recursos, la migración y los regímenes fronterizos, la ciudadanía, el racismo, etc.²⁴

En este marco, para ahondar en lo que expusimos más arriba, queremos hacer hincapié en que el término «popular» no solamente se refiere al «pueblo» en el sentido tradicional de «clases humildes», sino que abarca el sentido más amplio de «población», que tiene en cuenta el involucramiento activo de la sociedad civil y de actores culturales. A raíz de las crisis actuales, nuestro propósito es tematizar no solamente movimientos de protesta contra gobiernos de derecha e izquierda, empresas multinacionales y contra la violencia (por ejemplo, para denunciar la corrupción, la precarización laboral, la impunidad, los femicidios o el extractivismo descontrolado o para abogar por la autodeterminación personal y sexual). También buscamos hacer visibles las formas de responder a coyunturas estructurales que de forma recurrente culminan en crisis más profundas, con el objetivo de pensar modos alternativos de sociabilidad y convivencia. Dentro de este abanico temático, pueden contarse estrategias que van desde las protestas culturales y en los medios de comunicación hasta la resistencia pasiva, la resignación y la emigración, así como la participación activa de personas en diversos grupos de la sociedad civil, sindicatos, partidos, instituciones y movimientos sociales, incluyendo manifestaciones artísticas. Es necesario pensar, además, las formas en que estas intervenciones proponen respuestas para enfrentar –procurando superar– las múltiples y estructurales crisis actuales basadas en el neoliberalismo y las formas imperiales del consumo y la explotación de las tierras y los recursos.

Las relaciones entre actores de diversos trasfondos pueden desembocar en confrontaciones directas, en acuerdos e incluso en cooperaciones entre los

24. Por ejemplo, en varios países de América Latina (como en Europa) se puede observar un fuerte retroceso respecto a políticas de género (y la deslegitimación de los estudios de este campo, especialmente en Brasil y Colombia) y ataques contra religiones y comunidades afrodescendientes por parte de partidos y actores populistas y religiosos.

«de arriba» y los «de abajo». Estas dinámicas contribuyen a la formulación de respuestas político-culturales, además de ofrecer posibles recomendaciones para el futuro a partir de estas respuestas, en el sentido de hacerlas viables para solucionar las crisis que están por venir.

Las «crisis múltiples» que estamos enfrentando requieren también múltiples modos de confrontarlas y diversas estrategias, actores, intervenciones y negociaciones. Algunas de las estrategias se pueden interpretar como impulsos para esbozos utópicos de una sociedad mejor, que tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de América Latina desde el siglo xx²⁵. Al mismo tiempo, y relacionado con lo anterior, parece necesario pensar maneras de formar lo que Appadurai llama «multitudes liberales», sumando varias respuestas a las crisis en forma de alianzas para enfrentar a las multitudes regresivas, en el contexto actual basado en una «ética y política de la posibilidad», más allá de la lógica de probabilidad inherente al *ethos* del riesgo y el capitalismo²⁶. En consecuencia, no solo hay que ubicar las crisis actuales en su contexto a través del espacio y en su trasfondo histórico, sino que también se deberían tener en cuenta los aportes que las soluciones propuestas en torno de estas crisis nos ofrecen para desarrollar visiones de lo social, de la cohabitación y de un futuro mejor. A través del mismo acto de estudiar la(s) crisis, es de esperar que se puedan identificar propuestas que funcionen como impulsos hacia un cambio positivo de nuestras sociedades. 

25. F. Coronil: ob. cit.

26. A. Appadurai: ob. cit.

Argentina y sus crisis

Un análisis de varias crisis argentinas permite distinguir entre los usos muy expandidos del término «crisis» en el lenguaje coloquial y la pregunta acerca de cómo abrir un debate conceptual sobre este término, sus usos, sus dimensiones económicas, políticas y culturales. Un término polisémico, normativo y objetivista conlleva varios riesgos, por lo que resulta necesario un uso «restringido». En este marco, el interés de este artículo es comprender, a través del análisis del caso argentino, las dimensiones culturales implicadas en las crisis, porque en ciertos contextos se producen crisis de confianza en la economía, crisis de confianza en la política, crisis de representación o legitimidad social.

ALEJANDRO GRIMSON

¿Argentina está en crisis? Durante varias décadas, el término «crisis» ocupó un lugar central en los ensayos sobre el país y pareció convertirse en un diagnóstico casi permanente. Una célebre revista publicada entre 1973 y 1976, dirigida en Buenos Aires por Eduardo Galeano, llevaba ese nombre y volvió a editarse desde los años 80. A diferencia de los países culturalmente centrados en su pasado dorado o en su futuro soñado, Argentina parecía

Alejandro Grimson: es doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia. Es profesor titular de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina. Entre sus numerosas publicaciones se destaca su libro *Los límites de la cultura* (Siglo XXI, Buenos Aires, 2011), que obtuvo el Premio al Mejor Libro Iberoamericano otorgado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), en 2012. Correo electrónico: <alegrimson@gmail.com>.

Palabras claves: crisis, cultura política, derechos humanos, neoliberalismo, Argentina.

concentrarse en un presente de «crisis»¹. Posiblemente hacia fines del siglo xx el país comenzó a virar, con los efectos del neoliberalismo, hacia un relato más decadentista, que aludía a distintos pasados maravillosos.

La paradoja de percibir la crisis como normalidad se fue tornando menos frecuente y, sobre todo, menos consensual. A partir del incremento de la polarización política que se produjo en los últimos años de los gobiernos kirchneristas y que se acrecentó durante el gobierno de Mauricio Macri, los argentinos parecen ya no estar de acuerdo en nada, a no ser en el hecho de que no están de acuerdo. Pero en verdad ni siquiera en eso, ya que a menudo no se considera a quien piensa diferente como alguien que piensa. En cualquier caso, para una perspectiva comprensiva e interpretativa, el uso coloquial tan habitual del término «crisis» es a la vez interesante como dato, pero problemático en términos teóricos.

■ Tres crisis configurativas

Una de las formas de comprender la Argentina actual es analizar muy brevemente tres crisis y tres formas diferentes de respuestas populares. El país atraviesa el periodo más largo con elecciones libres y sin proscripciones. Ese periodo se inició en 1983, después del fin de la más dramática dictadura militar de su historia. En 1982, mientras avanzaba la crisis económica y social, se fortalecieron las movilizaciones sindicales. La increíble Guerra de Malvinas, dirigida por unas Fuerzas Armadas que ni siquiera querían ganarla, despertó formas de organización de la sociedad para multiplicar la solidaridad con los soldados. Y después de la veloz derrota militar, se agudizó la crisis económica y política, al tiempo que se intensificaban las redes organizativas de la sociedad civil.

Los movimientos de derechos humanos, que habían tenido un momento crucial en 1977 con la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, fueron ocupando un lugar central en el fortalecimiento de las movilizaciones contra la dictadura. Lo que resulta más interesante, analizado con perspectiva histórica, es que muchas de aquellas organizaciones fueron protagonistas de estas tres décadas y media de democracia. Y dejaron un legado central en la cultura política argentina.

1. Federico Neiburg: *Los intelectuales y la invención del peronismo*, Alianza, Buenos Aires, 1998.

En efecto, uno de los elementos que distinguen a Argentina de otros países de la región es que el rechazo a la violencia política estatal devino parte del sentido común. Eso no significa que en estas décadas no haya habido represión e incluso muertos en protestas sociales, sino que el grado de esa represión y de la violencia política ha sido menor que en otros países, y que en varias ocasiones la muerte de protagonistas de protestas ha abierto crisis políticas e

**El rechazo a la
violencia política
estatal devino parte del
sentido común ■**

institucionales². Ese legado se tradujo en el emblemático Juicio a la Juntas (militares) en 1985, en la derogación y anulación de todas las leyes de impunidad aprobadas en los años 90 en 2003 y en el hecho de que en la actualidad haya más de 700 presos por crímenes de lesa humanidad. En junio de 2017, la Corte Suprema de Justicia aplicó el «2x1», que reducía el cómputo de la pena de un condenado por esos crímenes, y en una semana una multitud de argentinos salió a protestar a la calle³.

En 1989, el presidente Raúl Alfonsín adelantó las elecciones y su partido fue derrotado por el justicialista Carlos Menem. Los recurrentes problemas económicos se veían agravados por una inflación que en 1988 superó el 300%. Sin embargo, después de las elecciones se disparó un espiral hiperinflacionario que superó el 3.000% anual e ingresó en las antologías mundiales. En la ciudad de Rosario comenzó a haber reclamos de comida ante los supermercados, que terminaron en saqueos que se extendieron a Córdoba, Buenos Aires y otras ciudades. En contraste con las movilizaciones sindicales o políticas tan habituales en la historia argentina, los saqueos mostraron un fenómeno inédito en el que se combinaba el hambre con el debilitamiento de las organizaciones tradicionales. Los saqueos se repitieron como eventos en momentos de crisis aguda como 2001, o como «gran miedo» en diferentes meses de diciembre posteriores, en algunos años en que las tradicionales fiestas de fin de año se combinaron con una situación social complicada y con cierta debilidad política del gobierno.

Pero además de indicar el ingreso de otro actor u otra faceta popular, la combinación de la crisis de la hiperinflación de 1989, que tuvo nuevos brotes al

2. El caso más emblemático (aunque no el único) fue el asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 26 de junio de 2002, hecho que motivó el adelantamiento de las elecciones presidenciales que terminó ganando Néstor Kirchner.

3. «Una multitud marchó a Plaza de Mayo en contra del beneficio del 2x1 para delitos de lesa humanidad» en *La Nación*, 10/5/2017.

año siguiente, y del potencial «caos social» legó en la cultura política argentina un miedo muy distinto al de la violencia política: el miedo a la inflación. La hiperinflación es un fenómeno de disgregación social. Justamente Carlos Menem impuso su hegemonía sobre la base de la estabilidad monetaria, al fijar por ley que cada peso era convertible en un dólar (por la que se conoció como Ley de Convertibilidad). Entre 1991 y 2001 los argentinos soportaron no solo un neoliberalismo extremo, sino el aumento del desempleo, que pasó de 6% en 1989 a 22% en 2002⁴. Esa sociedad con «estabilidad» que excluía a millones de argentinos vio agravada su situación con el inicio de la recesión en 1998. Mientras crecían lentamente las protestas de los desocupados y de un sector del sindicalismo, no hubo una solución política a esa crisis económica hasta que nuevamente el país se hundió en otra crisis en diciembre de 2001, en este caso la más grave de su historia.

Entre fines de los años 90 y 2003 se desarrollaron al menos cinco procesos de respuestas populares a esta crisis. Surgieron y se expandieron grupos de desempleados para exigirle al Estado trabajo y planes de empleo y para garantizar su subsistencia cotidiana. Estos potentes movimientos de trabajadores desocupados protestaban bloqueando rutas y puentes con piquetes, y por eso se los conoció como «piqueteros». Surgieron nodos de redes de trueque, que buscaban paliar la carencia de dinero necesario para el mercado a través del intercambio de bienes o saberes, en un circuito informal que en su auge involucró a dos millones de personas. Se expandieron los comedores populares que, obteniendo insumos del Estado y eventualmente de donaciones, garantizaban un plato de comida para niños y adultos al borde de la indigencia. Surgieron asambleas barriales, generalmente en barrios de clases medias, cuya movilización no respondía solo a una necesidad económica de los propios asambleístas (no eran necesariamente ahorristas estafados, ni indigentes, ni desempleados), sino básicamente a la crisis político-institucional de representación. También ha habido unos dos centenares de empresas recuperadas por sus trabajadores después de su quiebra, cierre o abandono por parte de sus anteriores propietarios.

Estas respuestas surgieron en distintos momentos y frente a diferentes conflictos. A partir de la crisis de diciembre de 2001 se organizaron asambleas de vecinos. Las organizaciones de desocupados se remontan a la segunda mitad de la década de 1990 –en el Gran Buenos Aires comienzan a aparecer en 1997–. Los comedores populares surgieron a fines de la década de 1980, durante la crisis hiperinflacionaria a partir de la cual se restringieron planes

4. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

alimentarios del Estado. Los nodos de trueque se iniciaron a mediados de los años 90. Numerosas fábricas fueron tomadas y recuperadas por sus trabajadores desde fines de 2001, como respuesta colectiva ante el cierre de fuentes de trabajo en un contexto desolador.

**Numerosas fábricas
fueron tomadas y
recuperadas por sus
trabajadores desde
fines de 2001 ■**

Si bien todas estas reacciones populares tuvieron su auge en la crisis de 2001-2002, las asambleas y el trueque fueron las menos perdurables. Los comedores populares se consolidaron, aunque su uso disminuyó con el descenso posterior del desempleo. Muchas empresas recuperadas siguen existiendo, pero perdieron potencia como movimiento, en su momento tan idealizado por Naomi Klein y algunos intelectuales autonomistas. Y, por último, el movimiento piquetero fue perdiendo fuerza, ya sea por el crecimiento del empleo, por políticas sociales más robustas o por la fluida relación de algunos sectores con el gobierno desde 2003. Al mismo tiempo, en estos últimos años algunos movimientos se han incorporado a la nueva Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Esta central agrupa a todo tipo de trabajadores excluidos del trabajo formal y, por esa razón, habitualmente no reconocidos por el sindicalismo tradicional: desde cooperativistas hasta vendedores ambulantes, recicladores, cartoneros, artesanos o campesinos.

■ 2016-2017

Al comparar brevemente estas tres grandes crisis argentinas, se plantea al menos una certeza y una pregunta. La certeza es que no se puede explicar el ciclo de protestas sociales de 2016 y 2017 sin comprender la diversidad de actores, identidades sociales y repertorios de acción surgidos en las crisis precedentes. Las respuestas han sido sumamente disímiles, aunque al mismo tiempo fueron conformando un repertorio de posibles acciones populares. Deseables para unos, temidas por otros. La pregunta remite al significado del término «crisis» y a cómo operan las dimensiones económicas, políticas y culturales.

Argentina atravesó un año de recesión con alta inflación en 2016. Las políticas económicas, laborales, sociales y de derechos humanos del gobierno de Macri tuvieron como respuesta un ciclo de protesta que se abrió en marzo de ese año y que aún no se ha cerrado. Los organismos de derechos humanos tuvieron un fuerte protagonismo en estos años. Al momento de escribir este artículo, en noviembre de 2017, cabe destacar la lucha por la liberación de la

dirigente social Milagro Sala –considerada presa política por gran parte de la oposición y por quien han planteado demandas de liberación varios organismos internacionales– y las movilizaciones por la desaparición de Santiago Maldonado cuando apoyaba una protesta mapuche en la Patagonia⁵.

Las acciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) expresan, con una composición social muy diferente, una extensa tradición gremial, presente en la crisis de 1982-1983 y en todos los años posteriores, pero muy fortalecida por el crecimiento del empleo y de los sindicatos entre 2003 y 2015. De todos modos, las clásicas divisiones en el sindicalismo argentino entre sectores más confrontativos y más «negociadores» han imposibilitado hasta ahora un plan de lucha. La CGT realizó acciones aisladas pero no conduce las respuestas populares al ajuste.

Otra movilización muy impactante en 2016, que se repitió en 2017, fue la que tuvo lugar el día de San Cayetano, el patrono del trabajo. Históricamente, cada 7 de agosto una multitud se dirige a la parroquia y al santuario de San Cayetano, ubicados en el barrio porteño de Liniers. Pero en 2016, tres organizaciones con diferentes orientaciones políticas promovieron una movilización que fue desde ese sitio hasta la Plaza de Mayo, recorriendo la ciudad de oeste a este. Si en las movilizaciones de derechos humanos hay una masiva presencia de amplios y heterogéneos sectores medios, con participación de sindicatos y organizaciones sociales, en las movilizaciones gremiales los sectores medios no sindicalizados son una excepción. En cambio, la movilización de San Cayetano expresa a los trabajadores no registrados, que ahora se autodenominan parte de la «economía popular» y que en gran medida engrosaron las movilizaciones de «trabajadores desocupados» o «piqueteros», especialmente entre 2000 y 2002.

Cabe mencionar asimismo grandes movilizaciones docentes, tanto en 2016 como en 2017, la movilización universitaria, la protesta de científicos que llegó a tomar por cinco días el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y numerosas protestas contra el cierre de empresas y la pérdida de fuentes de trabajo. A esto se pueden agregar otras movilizaciones que ha habido en diferentes provincias, con menor repercusión en los grandes medios. Esto incluye protestas por crisis de economías regionales, demandas ambientales y movilizaciones indígenas. Y todavía hay que mencionar que

5. Verónica Smink: «Quién es Santiago Maldonado, el joven cuya desaparición tuvo en vilo a Argentina» en *BBC Mundo*, 20/10/2017.

desde 2015 se viene organizando el movimiento «Ni una menos» contra los femicidios y la violencia de género, que ha producido movilizaciones de decenas o centenares de miles cada año, además del primer paro de mujeres.

La sociedad argentina está intensamente movilizada. Más allá de que un núcleo comprometido asista a las diferentes movilizaciones, se trata de actores diferentes, con demandas e identidades diferenciadas, sin articulación social ni política hasta la actualidad. Si bien la razón evidente es la política de ajuste y recorte del poder adquisitivo de las grandes mayorías, no todo ajuste es necesariamente seguido de un ciclo de movilización intenso. Existen al menos tres motivos políticos que explican esta coyuntura particular. El primero es que, como no se produjo una crisis comparable a la hiperinflación de 1989 o a la de 2001, las organizaciones sociales se encontraron con su poder intacto ante el inicio de los despidos y de la recesión con inflación. El segundo es que tres décadas de vida democrática han producido una densidad y una diversidad organizativas muy intensas, así como una experiencia que decanta en la madurez política de muchas de las direcciones sectoriales. El tercero es que en todas las movilizaciones más multitudinarias convergen sectores sociales que hace un año tenían posiciones políticas opuestas y que actúan de modo unitario ante el avance neoliberal.

Este ciclo de protestas es parte decisiva de las relaciones de fuerza entre las políticas neoliberales y los distintos sectores sociales. A pesar de todas estas protestas, no existe hoy una crisis política en Argentina. Por un lado, en las últimas elecciones, el oficialismo nucleado en la alianza Cambiemos ganó en

**A pesar de todas estas
protestas, no existe
hoy una crisis política
en Argentina ■**

los principales distritos del país⁶. Además, sus niveles de popularidad son claramente aceptables, o incluso elevados si se considera el recorte del poder adquisitivo que ha habido. Esto se debe básicamente a dos logros del gobierno. El primero es que existe una disputa política acerca de las causas del ajuste: mientras algunos sectores de la oposición lo adjudican a las políticas neoliberales, el oficialismo afirma que ha salvado al país de la crisis económica a la que lo llevaba el «populismo» corporizado en el kirchnerismo. El segundo es que los sectores que participan en esas protestas y que no votarían al actual gobierno están altamente fragmentados en la arena electoral. Su gran

6. Ver José Natanson: «La 'ola amarilla' en Argentina. Reconfiguraciones tras el triunfo de Macri» en *Nueva Sociedad* N° 272, 11-12/2017, disponible en <www.nuso.org>.

heterogeneidad social y política no pudo hasta ahora ser articulada. No hay ninguna fuerza política ni figura alguna que pueda articular por ahora la diversidad de las protestas. Esa creciente fragmentación de la oposición es una enorme fortaleza para el gobierno.

■ ¿Qué significa «crisis»?

Por supuesto, Argentina ha vivido numerosas crisis en el siglo xx. Pero además, como mencionamos al inicio, durante décadas se instaló la idea de que se trata de un país en crisis permanente. Por eso, el caso argentino y su comparación con otros nos invitan a preguntarnos cuándo hay realmente elementos para considerar que existe una situación de «crisis». Y si la hay, cuándo se trata de una crisis económica, cuándo de una crisis política, cuándo de una crisis cultural.

Hay ciertos problemas en los usos frecuentes de la noción de «crisis» en las ciencias sociales: primero, las concepciones puramente objetivistas de la crisis; segundo, el carácter negativo de la noción de crisis; tercero, la presunción teleológica que contiene la idea de que toda crisis tiene un cierto destino. Es sencillo encontrar definiciones objetivas de crisis económicas, políticas o sociales. Cada una establece indicadores, generalmente cuantitativos. Así, la crisis económica puede asociarse a la reducción del PIB, la crisis política se refiere a la inestabilidad institucional y la crisis social deriva de indicadores de desocupación, pobreza o indigencia. Cabe hacer notar que todos esos indicadores objetivos resultan de complejos procesos de producción y de una serie de convenciones. Pero el punto que nos interesa es otro.

Nos interesa comprender aquí las dimensiones culturales implicadas en las crisis. Porque en ciertos contextos se producen crisis de confianza en la economía, crisis de confianza en la política, crisis de representación o legitimidad social. También si consideramos la angustia social ante injusticias o desigualdades intolerables, estamos haciendo referencia a una dimensión cultural. Un índice inflacionario puede ser percibido como traumático en un país y no tan grave en otro con una historia diferente. De la misma forma, en contextos nacionales diferentes, las cifras de pobreza o desempleo tienen valoraciones distintas.

Los criterios exclusivamente objetivistas para definir «crisis económica» no consideran las percepciones sociales sobre la economía. No comprenden la relevancia de las dimensiones subjetivas sobre las crisis. Para los análisis

objetivistas, hay o no hay una crisis económica o política. Sin embargo, a veces resulta evidente y hay consenso. Otras veces, lo único evidente es que se trata de una cuestión de interpretación. A su vez, desde el punto de vista de las sociedades, también emerge claramente una cuestión de interpretación. Ningún sector social o político dudaba de que Argentina estaba en crisis en 2001-2002. Pero después de ese momento, han prevalecido interpretaciones contrapuestas. El término «crisis» ha sido y es parte de la disputa política.

Usualmente, las connotaciones del término «crisis» son negativas. Si concebimos la crisis como ruptura de aquello socialmente considerado «normal», la valoración de la estabilidad o la ruptura depende de cómo valoramos la situación previa. La crisis de una dictadura, la crisis de los totalitarismos o las crisis de los consensos económicos neoliberales constituyen obviamente oportunidades cruciales. La percepción extendida de una situación de crisis es un territorio propicio para la imaginación política y cultural. En ese sentido, la

crisis puede adquirir una temporalidad mayor, como contradicción de fuerzas históricas que impulsan a las sociedades en direcciones incongruentes.

**La percepción extendida
de una situación de
crisis es un territorio
propicio para la imaginación
política y cultural ■**

Si descartamos la utilidad de la idea de «crisis permanente», también debemos tener capacidad para diagnosticar tanto su inicio como su final. Toda crisis

ocurre en el espacio-tiempo. Tiene distintas temporalidades. Se inicia, se despliega, termina. Dura horas, días, meses, años. Tiene lapsos. Puede dividirse en etapas. Si las crisis no se cerraran, estarían fuera del tiempo. Sin embargo, es más habitual el análisis del inicio que de las resoluciones de las crisis. Cuando se abusa del término «crisis», los diagnósticos se vuelven demasiado «fáciles» y se vacían de sentido los análisis.

Para que el término tenga el peso que merece, debe ser utilizado de modo restringido, como lo es en la ciencia económica o la ciencia política. A la vez, además de indicadores objetivos, necesitamos también una noción intersubjetiva. Ante estos problemas conceptuales (polisemia, objetivismo, normativismo, teleología), hay algo que emerge muy claro de esas tres crisis que vivió Argentina. Fueron crisis económicas y políticas, pero no solo eso. En los tres casos fueron crisis culturales porque hubo una ruptura de los sentidos comunes, una crisis de sentido. Sabemos que las sociedades no podrían

funcionar sin una «conciencia práctica»⁷, sin un sentido común⁸, que es aquello que articula el resto de los sentidos⁹. Son momentos históricos en los cuales se imponen nuevos juegos de lenguaje y otros parecen diluirse¹⁰. Momentos críticos en los que se trastocan las relaciones entre lo hegemónico, lo emergente y lo residual¹¹.

Cuando el automatismo de la vida cotidiana se interrumpe en alguna dimensión crucial, se abre una crisis cultural. Entre esas dimensiones cruciales pueden estar la vida urbana, la vida económica, la vida política y los sentimientos comunitarios de pertenencia. En este último aspecto, una de las modalidades de la crisis cultural es la crisis identitaria de una sociedad, los sentimientos que tiene sobre sí misma. Señalar una crisis es poner el acento en un cambio de *marco*. Aquello que sucede en un nuevo marco adquiere un nuevo sentido. Evidentemente, se trata de un fenómeno objetivo en el sentido de que es independiente de la voluntad, al tiempo que es de carácter subjetivo porque afecta las percepciones y significaciones sociales. Por eso, una característica crucial de la crisis cultural es su carácter intersubjetivo.

Una crisis económica, social o política no es necesariamente una crisis cultural, pero puede imbricarse con esta última. Puede haber otros factores que abran una crisis de sentido. Por ejemplo, un atentado considerado terrorista, la veloz depreciación de la moneda, un paisaje social novedoso marcado por el desempleo o incluso eventos naturales extremos como un terremoto o un tsunami. Una crisis cultural generalmente es disruptiva, no actúa por acumulación en el tiempo, como en el caso de las recesiones leves. Se abre con un acontecimiento, una irrupción inesperada.

La noción de «crisis crónica» alude a una sedimentación de la crisis, a la previsibilidad, que es lo contrario de lo que pretendemos significar con crisis cultural. En todo caso, puede haber situaciones económicas o sociales críticas sin que haya crisis simbólica. Es decir, si el hambre, la exclusión, la desnutrición o la muerte devienen en un tiempo-espacio una rutina, puede suceder que se instituya una «cultura de la crisis», que no es lo mismo que una «crisis en la cultura». Porque la crisis cultural es la ruptura de la sedimentación, mientras que la cultura de la crisis es la normalización de la anomalía.

7. Anthony Giddens: *La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración*, Amorrortu, Buenos Aires, 1995.

8. Antonio Gramsci: *Cuadernos de la cárcel*, Juan Pablos, Ciudad de México, 1986.

9. José Nun: *El sentido común y la política*, FCE, Buenos Aires, 2015.

10. Ludwig Wittgenstein: *Investigaciones filosóficas*, Crítica, Barcelona, 2012.

11. Raymond Williams: *Marxismo y literatura*, Península, Barcelona, 1980.

Si la palabra «crisis» es cotidiana en el lenguaje social, eso implica que atraviesa los modos de significación social y, por lo tanto, deja de ser de orden disruptivo. Cuando está presente en algunas sociedades durante lapsos relativamente prolongados, termina constituyendo un marco de interpretación y de comunicación. Ahora, ese marco de crisis estable o recurrente puede, a su vez, ser interrumpido por un acontecimiento inesperado. Así, un acontecimiento abre una coyuntura crítica, inaugura un marco temporal de lógica excepcional, en el que algunas de las lógicas sedimentadas de la configuración quedan suspendidas y otras emergen. Emergen a veces algo alocadamente, de manera desordenada, pero esa coyuntura tiende a estructurarse, tiende a establecer alcances y límites, tiende a instituir una temporalidad económica, política, social y cultural específica.

Las tres crisis argentinas y las respuestas populares ante ellas enseñan algo relevante para la situación actual. Durante las crisis crece una multiplicidad de acciones de la sociedad que apuntan a diferentes salidas y soluciones. Al mismo tiempo, existe una heterogeneidad de actores sociales, se despliega una disputa política por su resolución. En el corto plazo, una crisis puede resolverse en dirección a un fortalecimiento de la democracia, de los derechos humanos, como en el caso de 1983. Pero también, ante respuestas populares sin potencialidad política como en 1989, puede ser resuelta desde arriba con la instauración de un programa neoliberal que establece una hegemonía que se prolonga por muchos años. O puede implicar, como en 2003, la apertura de un ciclo posneoliberal que solo puede ganar legitimidad mediante políticas económicas y sociales que disminuyan drásticamente los procesos de exclusión social anterior.

En otras palabras, las características inherentes de una crisis no determinan de modo mecánico su modo de resolución. Las formas que adquieran las respuestas populares y su capacidad o limitación para desplegar una alternativa política serán cruciales en los caminos que terminen prevaleciendo socialmente. En el largo plazo, las respuestas populares a las crisis producen experiencias y sedimentos relevantes en la cultura política. En ese sentido, la relación de fuerzas de este momento histórico en Argentina puede leerse también vinculada a esas y otras historias que, de modos diferentes, están presentes en las protestas actuales, en las potencialidades y las limitaciones de su resolución, en un contexto democrático. □

Impensar las crisis socioambientales

*Producción cooperativa
de un hábitat inclusivo*

**CLAUDIA TOMADONI /
CARLOS ROMERO GREZZI /
SEBASTIÁN CHIRINO**

La producción de viviendas ha desempeñado un importante rol en relación con la actividad económica, el empleo y el desarrollo del espacio urbano en Argentina. La crisis de 2001 intensificó el problema del déficit habitacional y a partir de 2003 se afrontó la problemática con soluciones públicas que, no obstante, no lograron superar la perspectiva economicista. La emergencia de alternativas asociativas abre nuevas oportunidades y la posibilidad de reformular las nociones de crisis y hábitat. El Polo Cooperativo de Innovación Inclusiva (PCII) en la ciudad de Rawson, ubicada en la provincia argentina de San Juan, aporta una experiencia empírica basada en la movilización social.

■ Introducción

La construcción de nuevas viviendas debe ser considerada no solo a partir de su rol como sostén de la actividad económica y de los niveles de empleo, sino también como factor de producción de espacio y hábitat urbanos. En

Claudia Tomadoni: es doctora en Geografía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y por la Universidad Bauhaus de Weimar. Se desempeña como coordinadora científica del Centro Internacional de Estudios Transdisciplinarios Argentina / Cono Sur (Arcosur) de la Universidad Friedrich Schiller de Jena.

Carlos Romero Grezzi: es docente investigador en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSI). Es doctorando en Estudios Urbanos y Regionales (Universidad Nacional de Córdoba / Universidad Bauhaus de Weimar). Se desempeña como director del proyecto Innovación Cooperativa e integra la coordinación del PCII.

Sebastián Chirino: es politólogo y maestrando en Política y Gestión Local en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Es director del Centro de Estudios para el Desarrollo Inclusivo e integrante de la coordinación del PCII.

Palabras claves: crisis, hábitat, innovación inclusiva, organización cooperativa, políticas habitacionales, San Juan, Argentina.

Argentina, en el afán de atender los aspectos cuantitativos de este tipo de producción, se le ha dado prioridad a la vivienda –es decir, al habitáculo– por sobre el hábitat. Con ello, la definición de las políticas de vivienda ha tendido a perder de vista las posibilidades que otorga el hábitat como espacio socio-cultural y como promotor de autorreproducción social.

**La crisis política,
 social y económica
 de 2001 en Argentina
 intensificó el problema del
 déficit habitacional ■**

La crisis política, social y económica de 2001 en Argentina intensificó el problema del déficit habitacional en amplios sectores de la sociedad. Una de las soluciones más recurrentes en ese campo a partir de 2003 fue la construcción de nuevos barrios periurbanos en diversas ciudades de todo el país para relocalizar lo que se denomina villas de emergencia. En este proceso, la perspectiva economicista aplicada a la producción pública de espacio urbano generó tres procesos concatenados: crecimiento de las periferias urbanas, segregación social y espacial de sectores de menores recursos y problemas asociados a la escasa oferta laboral disponible para la población relocalizada.

La subsistencia en el nuevo hábitat empujó a sus habitantes a la búsqueda de estrategias de protección social y condiciones para el empleo en zonas de alta vulnerabilidad. El proceso fluctuó entre la organización comunitaria a través de la formación de cooperativas y los impulsos otorgados a estas iniciativas por parte de la gestión local. Pero las precarias condiciones laborales de las nuevas cooperativas, el débil nivel de organización y la alta dependencia del Estado municipal para su subsistencia dificultaron un desarrollo sustentable de las iniciativas.

En este marco, cabe analizar el caso del Polo Cooperativo de Innovación Inclusiva (PCII) en el área metropolitana de la ciudad de San Juan. Esta experiencia de autogestión de empleo se destaca por la participación paulatina de una amplia constelación de actores, como universidades, entidades estatales, ONG y empresas privadas que colaboraron para buscar respuestas a esos problemas y, al mismo tiempo, estimularon el surgimiento de relaciones sinérgicas entre la comunidad y las actividades productivas.

Nuestra hipótesis de trabajo es que el PCII se presenta como un proceso territorial de carácter mixto, en el que se revela un territorio emergente con ingreso de nuevos actores y se fortalece la idea de hábitat a partir de la

construcción de lugares desde donde se buscan respuestas populares a la(s) crisis. Esta propuesta de producción y trabajo cooperativo revitaliza la noción del espacio urbano como una totalidad relacional y en permanente transformación socioambiental, a la vez que se plantea como una oportunidad para revisar los criterios con que se tiende a definir las políticas públicas de vivienda y hábitat.

■ Conceptualizar la noción de crisis: tensión, acumulación y movimiento

Las crisis pueden ser definidas como procesos en los cuales entran en tensión situaciones que no encuentran soluciones y que, de acuerdo con la intensidad de la tensión, pueden no solo dañar, sino también quebrar prácticas sociales, económicas y políticas establecidas, e incluso generar nuevas prácticas.

Esto permite entender que la sucesión de crisis no resueltas tienen un carácter acumulativo, lo cual dificulta su superación y choca contra los entramados de poder. Las crisis no son aisladas o de generación espontánea: tienen una génesis y se sustentan en una estructura que condiciona su resolución. Por ello, optamos por utilizar «la crisis» para referir a un momento agudo y «la(s) crisis» para referir al proceso por el cual deja de ser una, para convertirse en una multiplicidad acumulada (usamos los paréntesis para remarcar esta denotación)¹.

La(s) crisis suponen simultáneamente peligros y oportunidades, así como temporalidades y territorialidades² en pugna, y esto es así porque son procesos vinculados a conflictos de poder entre actores que luchan por hacer propio un territorio para su reproducción ampliada, ya sea social, económica, simbólica o política. Por un lado, la(s) crisis son un peligro porque todo lo construido socialmente (pasado) puede desmoronarse; lo que está en construcción (presente) puede demorarse; y todo lo que está por construirse (futuro) puede aplazarse. La historia es movimiento entre estas tres

1. Elsa Laurelli y Claudia Tomadoni trabajan el uso y sentido de los paréntesis para denotar el valor contrario de un término, la intensificación o la negación de su significado. Aquí se utilizan para remarcar la posibilidad de uso simultáneo en singular y plural aludiendo a que en la multiplicidad hay una continuidad del proceso. La crisis no es una sino múltiple. E. Laurelli y C. Tomadoni: «Posdisciplina una aventura metodológica en tiempos de nuevos paradigmas. Una mirada sobre el espacio público» en *Gestión y Ambiente* vol. 17 N° 1, 11/2014.

2. C. Tomadoni: «A propósito de las nociones de espacio y territorio» en *Gestión y Ambiente* vol. 10 N° 1, 5/2007.

temporoterritorialidades³ que producen los actores sociales en su juego de apropiación del territorio⁴ y construcción del hábitat⁵. La primera muestra lo concretado; la segunda, lo que está en vías de concreción, una representación de la esperanza, del estar en movimiento; y la tercera refiere a lo deseado, a lo que se aspira. Cuando estas temporoterritorialidades entran en tensión,

**La(s) crisis son una
oportunidad porque
abren puertas para pensar,
buscar y encontrar
soluciones no ideadas ■**

ponen en jaque deseos y aspiraciones sociales y ello ralentiza el devenir de una sociedad, allí se visualizan en toda su extensión la(s) crisis.

Por otro lado, la(s) crisis son una oportunidad porque abren puertas para pensar, buscar y encontrar soluciones no ideadas.

Una oportunidad puede ser una invitación a *impensar*, que no es lo mismo que *repensar*. Al respecto, Immanuel Wallerstein⁶ señala que repensar es algo que normalmente se hace, mientras que impensar es desarraigar suposiciones engañosas y constrictivas. Impensar implica mirar desde lugares de rebeldía y transgresión, con el fin de recargar o rechazar conceptos y metodologías dados, y esto sirve, en el caso de las prácticas políticas y sociales, para regenerar estrategias en la producción social del espacio; momento en el cual las territorialidades construidas por los actores adquieren nuevas dinámicas⁷.

Según el movimiento elegido, si se repiensa surgirán territorialidades en direcciones ya transitadas para corregir circunstancias que llevaron a la crisis o para optimizar recursos mal utilizados. Son soluciones ortodoxas. En cambio, el impensar puede derivar en soluciones heterodoxas que transitan por nuevos caminos, en la búsqueda de superaciones creativas a partir de herramientas aún no utilizadas. Estas territorialidades pueden implicar un «borrón y cuenta nueva» y abrir paso a prácticas de resiliencia por parte de algunos actores que buscan la innovación.

3. El concepto de temporoterritorialidades alude a la dimensión simultánea y dialéctica de tiempo-espacio-sociedad inherente a la existencia del territorio. Ese concepto está siendo trabajado por Tomadoni en el marco de la investigación «Territorio como constructo de identidades, memorias, relaciones y saberes», desarrollado en el Centro de Estudios Transdisciplinarios / Arcosur de la Universidad Friedrich Schiller. V. concepto de dialéctica en Edward Soja: «El tercer espacio. Ampliando el horizonte de la imaginación geográfica» en *Geographikós* N° 8, 2° semestre de 1997.

4. *Ibíd.*

5. C. Romero Grezzi: «Aportes conceptuales sobre la producción de hábitat: las redes de asociaciones socioespaciales como estrategia proyectual» en Iván Martínez (ed.): *Otros proyectos posibles*, FAUD-UNSI, San Juan, 2017.

6. I. Wallerstein: *Impensar las ciencias sociales*, Siglo XXI, Ciudad de México, 1998.

7. *Ibíd.*

¿Quiénes plantean este borrón y cuenta nueva y cómo se encaran estos desafíos? La(s) crisis no son ciento por ciento un peligro o una oportunidad. Reflexionar cómo y por qué se llegó a ese estado no solo ayuda a corregir esa idea, sino que permite comprender que, aun en las situaciones más complejas, hay ganadores en una crisis, pues lo que para unos es crisis para otros no lo es. Y esto es así porque lo que está en disputa es la hegemonía y es en esos juegos de poder donde mejor se visualiza el peso específico de cada actor en la construcción de un territorio. La(s) crisis son situaciones variopintas en las que participa una amplia constelación de actores que juegan sus cartas de acuerdo con sus intereses y posiciones en el campo⁸, como así también motivados por razones y emociones⁹, todo lo cual caracteriza el territorio donde interactúan como un campo de fuerzas de velocidades y aceleraciones desiguales.

En el caso de la(s) crisis habitacionales, los juegos de poder aluden a conflictos por la apropiación de espacios para el hábitat. Y el resultado puede resultar en procesos territoriales diversos. Una posibilidad es la construcción de un hábitat fragmentado a partir de una apropiación desigual del territorio, en la cual aquellos actores con mayor peso específico (poder) imponen sus propias lógicas y condicionan los procesos de producción de vivienda pública, lo que limita las sinergias entre actores y menosprecia las capacidades de innovación de los actores dotados de saberes relacionados con el hábitat y el territorio. Otra resultante puede ser la construcción de un hábitat integrado a partir de una apropiación inclusiva del territorio, con actores dotados de autonomía relativa y emancipados que tienen una participación activa dentro de la constelación de actores involucrados en la construcción de un hábitat de calidad. Finalmente, estos juegos pueden derivar en la construcción de un hábitat mixto, donde la(s) crisis están siendo procesadas y surge la motivación como motor para impensar las políticas públicas y las propias prácticas de los actores involucrados.

Una muestra de este tercer tipo de conjugación es el que analizamos con el Polo Cooperativo de Integración Inclusiva (PCII); para comprenderlo en su real dimensión, es necesario contextualizar este proyecto desde su surgimiento.

8. Pierre Bourdieu: «Habitus, illusio y racionalidad» en P. Bourdieu y Loïc Wacquant: *Respuestas por una antropología reflexiva*, Grijalbo, Ciudad de México, 1995.

9. Milton Santos: *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción*, Ariel, Barcelona, 2000.

■ Territorio, matriz estadocéntrica y crisis habitacionales

Para revisar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales en Argentina y considerar sus impactos territoriales, es necesario comprender el carácter multifacético de la(s) crisis habitacionales. Si bien nuestro recorte pone el foco en los efectos de las políticas habitacionales, es necesario revisar cómo desde el análisis de las percepciones e intervenciones del Estado en la realidad pueden observarse causas y efectos en las temporoterritorialidades resultantes y también encontrarse indicios para impensar soluciones a partir de la consideración de limitaciones y potenciales.

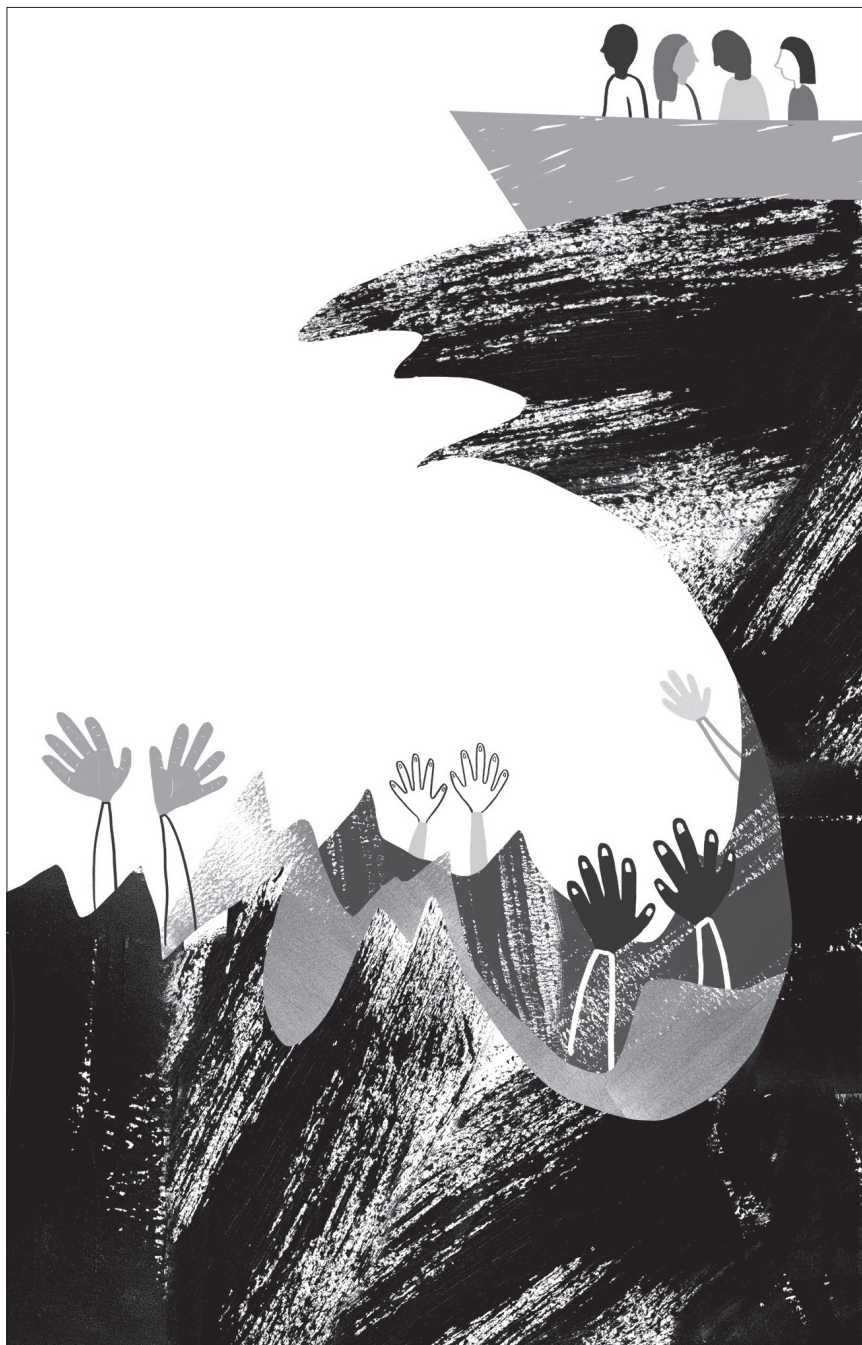
Una forma de comprender la capacidad de hacer del Estado es indagar cómo se consideran los problemas sociales prestando atención a sus acciones u omisiones en materia de políticas públicas¹⁰, para analizar la complejidad de la relación Estado-sociedad como determinante estructural. Tales cuestiones adquieren relevancia si se consideran las restricciones que fueron imponiendo las sucesivas crisis económicas que obligaron a los gobiernos latinoamericanos a redimensionar los aparatos estatales y a atender innumerables demandas sociales insatisfechas.

La crisis estructural es la crisis del sistema de acumulación, promotora del debilitamiento del Estado y el deterioro de las condiciones de vida. En América Latina asistimos a modificaciones sustantivas en los modos de planificar y ejecutar las políticas públicas desde la «crisis del Estado de Bienestar». Esta crisis se intensificó con la aplicación del Consenso de Washington¹¹, que produjo un escenario de apertura económica, privatización de servicios públicos y descentralización de servicios sociales hacia las provincias y los municipios¹². Se promovió un ajuste estructural que operó tanto en el nivel macroeconómico como en la vida de las personas y agudizó una multiplicidad de crisis: de vivienda, de salud, de educación, etc. El crecimiento de la pobreza y la indigencia producto de las políticas neoliberales de los años 90 se tradujo en fragilidad y escasez de los medios de existencia y llevó a los sectores

10. Oscar Oszlak: «Formación histórica del Estado en América Latina. Elementos teórico-metodológicos para su estudio» en Carlos Acuña (ed.): *Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas. Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual*, Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de la Nación / Cepal, Buenos Aires, 2011.

11. Juan Carlos Torre: *El ingreso de las reformas estructurales en la agenda pública*, Cepal, Santiago de Chile, 1997.

12. María Schmuck y María Pía Vallarino: «Estado del desarrollo territorial de la Argentina» en Oscar Madoery y Pablo Costamagna (comps.): *Crisis económica mundial y desarrollo territorial. Reflexiones y políticas*, UNSAM Edita, San Martín, 2012.



populares a encontrar en «lo cercano» un medio para mejorar su acceso a bienes. Así, los asentamientos precarios para la residencia o la realización de piquetes como modo de movilización y protesta caracterizaron el territorio en la crisis de 2001.

A partir de 2003, en clara respuesta al conflicto y al malestar social, se produce un cambio en la forma de concebir el rol del Estado ■

A partir de 2003, en clara respuesta al conflicto y al malestar social, se produce un cambio en la forma de concebir el rol del Estado. Tal era la gravedad de los índices de indigencia, pobreza y desempleo, que desde las políticas públicas se trató de poner el acento en aquellas inherentes a

la propia supervivencia. Se otorgó prioridad a las políticas sociales de asistencia, cercanas a la idea de «protección» –con las limitaciones propias de estos abordajes–, aunque el objetivo era construir un proyecto de vida tendiente a la autonomía¹³.

El acceso a la vivienda continuó respondiendo a una matriz estadocéntrica. Esta lógica se amplifica en el reparto hacia los niveles provincial y municipal, en los cuales al avasallante proceso de «descentralización» de competencias sin correlato en recursos se le sumó la distribución arbitraria, o según «pertenencia partidaria» de los gobernadores, de los cupos de vivienda. Esta práctica dejó al descubierto la falta de discusión sobre los impactos en el territorio de esta forma de producir ciudad a través de la vivienda. Al revisar las capacidades de los gobiernos provinciales para afrontar y/o intervenir con alternativas de acción, se observa un proceso territorial, simultáneo y contradictorio, que mitiga o profundiza los efectos de la(s) crisis en lo local.

¿Qué lógica sustentó las políticas públicas de vivienda tras la crisis de 2001? ¿Qué actores participaron en su diseño, implementación y evaluación? ¿Cuál fue el grado de impacto de la localización de los nuevos barrios? ¿Se previeron los impactos? ¿Qué incidencia tuvieron los procesos comunitarios en la construcción de la estrategia de abordaje? Estos interrogantes muestran las limitaciones de los «instrumentos» de producción de hábitat; y, a la vez, las potencialidades para promocionar un hábitat inclusivo, capaz de hacer de la inversión pública un impulsor de entornos de innovación a partir de una articulación de múltiples actores.

13. Richard Sennett: *La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo*, Anagrama, Barcelona, 2005.

■ Actividad económica, generación de empleo y producción de espacio urbano

Producción de viviendas en Argentina. Desde 2003, la producción de viviendas encontró su fundamento principal en la búsqueda de reactivación económica para hacer frente a la recesión y el desempleo¹⁴. Si bien durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se construyó similar cantidad de viviendas que durante la década de 1990 (v. gráfico 1), con las políticas habitacionales y de infraestructura de este periodo se permitió una recuperación de la industria, el empleo y el consumo.

Hasta 2001, las viviendas se construían principalmente a través del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) que administraban las provincias mediante los Institutos Provinciales de Vivienda (IPV). En 2004, el gobierno nacional dispuso un cambio en la asignación y administración de recursos provenientes del Tesoro Nacional, con la puesta en funcionamiento del Plan Federal de Viviendas como complemento del FONAVI.

Los IPV quedaron subordinados a la política nacional y asumieron el rol de ejecutores financieros, proveedores de suelo, realizadores del proyecto urbano y encargados de la entrega de viviendas¹⁵. El nuevo sistema agilizó los plazos de ejecución, pero afectó la credibilidad respecto de los criterios políticos para distribuir los recursos hacia las provincias¹⁶. No obstante, los resultados crecientes de estos cambios en la política financiera de planificación urbana se pueden apreciar en el gráfico 1.

Producción de vivienda en la ciudad de San Juan. San Juan¹⁷, por su localización en el sistema urbano nacional, por sus características socioculturales, por sus particularidades ambientales y también por sus múltiples carencias estratificadas en el espacio a lo largo de las décadas, se asemeja en gran medida a una multiplicidad de ciudades del interior argentino, así como a muchas ciudades del cordón andino del Cono Sur.

14. Delia Palero y Mercedes Lentini: «Política habitacional argentina al comienzo del nuevo siglo: perspectivas emergentes y cuentas pendientes» en Miguel Barreto y M. Lentini (comps.): *Hacia una política integral del hábitat. Aportes para un observatorio de política habitacional en Argentina*, Café de las Ciudades, Buenos Aires, 2015.

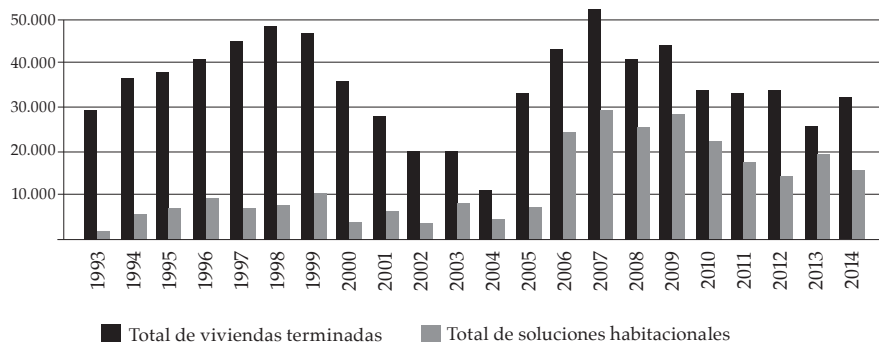
15. Raúl Fernández Wagner: «El sistema de la vivienda pública en la Argentina. Revisión desde la perspectiva de los regímenes de vivienda» en M. Barreto y M. Lentini (comps.): ob. cit.

16. *Ibíd.*

17. Ciudad ubicada en la provincia del mismo nombre, en el oeste argentino.

Gráfico 1

**Viviendas terminadas y soluciones habitacionales
(FONAVI + programas federales), 1993-2014**



Fuente: elaboración de los autores sobre la base de datos de la Dirección de Control de Gestión FONAVI, Auditoría 2014.

Nota: a diferencia de las viviendas terminadas, las soluciones habitacionales incluyen reparaciones, mejoramientos y ampliación de viviendas existentes para superar una condición deficitaria.

Pero a diferencia de muchas de sus «ciudades pares», se ha destacado en los últimos 14 años por haber experimentado un rápido crecimiento económico, basado principalmente en la minería y sus servicios asociados. Este crecimiento, a la vez que ha puesto a disponibilidad una gran cantidad de recursos en sus arcas públicas, ha desnudado las debilidades de ciertas políticas para orientar sus estrategias efectivamente hacia objetivos de desarrollo. Al mismo tiempo, si se consideran las transferencias de recursos para vivienda, San Juan fue la octava provincia más beneficiada por las nuevas políticas nacionales. Esta conjunción tuvo alcances significativos en materia habitacional, ciertamente sobresalientes en términos históricos provinciales¹⁸.

En 2004 se declaró el estado de emergencia habitacional en la provincia y se lanzó el Programa «Vivienda Digna-Techo Seguro», para sectores sociales excluidos. Las relocalizaciones de asentamientos precarios se realizaron

18. Entre 2004 y 2014 se construyeron en la provincia 19.229 viviendas: 5.633 con fondos del IRV y del FONAVI y 12.997 a través de Programas Federales. Según la *Revista del Consejo Nacional de la Vivienda*, 2014, el proceso fue comparativamente de gran magnitud, pues en ese periodo el IRV alcanzó un 40% del total de las obras realizadas desde su creación en 1952. Todas estas viviendas fueron construidas en barrios nuevos dentro del área metropolitana de San Juan y reforzaron una expansión urbana dispersa y la producción de áreas residenciales en espacios agroproductivos. Ver Andrea Sarracina: «Producción de vivienda de interés social. Impactos en el territorio» en *Estudios Socioterritoriales* N° 18, 2015.

fundamentalmente en tres de los seis municipios que integran el área metropolitana de San Juan, lo que motorizó cambios en su composición demográfica y socioeconómica. En el municipio de Rawson, uno de los más afectados por estas políticas, la expansión urbana se produjo avanzando sobre tierras agrícolas hacia el oeste (siempre escasas en el oasis del Tulum), mediante la construcción de múltiples barrios.

La localización de esta población generó conflictos, tanto en el interior de los nuevos barrios como entre estos y su entorno rural-urbano. Se consolidaron redes de riesgo vinculadas al narcotráfico y a prácticas delictivas, que derivaron en violencia dentro de los barrios y en sus alrededores. Esto provocó el abandono de tierras por parte de agroproductores y el cierre de instalaciones recreativas. La fragmentación espacial y la separación del resto de la ciudad afectaron las posibilidades locales de desarrollo social y económico y dificultaron el acceso al empleo y a los servicios públicos. La deficiente calidad del espacio público condicionó la interacción social, la apropiación comunitaria y la emergencia de procesos organizativos.

Esta situación –similar a la acontecida en los últimos años en las periferias urbanas de diversas ciudades de Argentina– demuestra que, a pesar de los esfuerzos realizados y los logros obtenidos en términos cuantitativos y cualitativos con las políticas habitacionales, en el escenario posterior a la crisis de 2001 no hubo grandes cambios en la concepción pública acerca del valor, significado y potencial que encierran la producción de viviendas, la construcción de nuevos barrios y la complejidad urbana. Es decir que, lejos de solucionarse la(s) crisis habitacionales, continuaron acumulándose factores para su reproducción.

■ Acerca del PCII

Redes de riesgo y redes de contención. Los nuevos barrios en los que se relocalizó a una gran cantidad de personas, a pesar de ofrecer mejores condiciones edilicias, se presentaban como espacios fragmentados de sus entornos urbanos, con enormes dificultades de acceso al mercado laboral, a servicios públicos y a un sistema de transporte público pensado en función de los nuevos entramados periurbanos. Una de las primeras reacciones populares frente a esta situación desfavorable fue la autogestión de trabajo, a través de la proliferación en los entornos urbanos de puestos de comercialización de marcada informalidad, de prácticas de recolección de residuos para el reciclaje y de organización de cooperativas de trabajo y producción.

El PCII surge como una de estas propuestas de organización cooperativa en los barrios periurbanos construidos desde 2007 en el municipio de Rawson. No se trata de una propuesta cuyos componentes se formularon espontáneamente, sino de una construcción derivada de un largo proceso que involucró a gran cantidad de actores.

Tras algunos años de convivencia de los distintos grupos trasladados al sector, el panorama social se advertía desalentador y en crisis, con un crecimiento significativo de las *redes de riesgo*¹⁹. En 2012, una nueva gestión municipal encabezada por el intendente Juan Carlos Gioja promovió una modalidad innovadora de interacción, junto con 11 referentes sociales del lugar, uno en representación de cada barrio y con la particularidad de representar liderazgos sostenidos desde antes de la relocalización. Esto requirió una multiplicidad de acciones de diferentes áreas municipales y fue el puntapié para construir *redes de contención*. Se avanzó en la construcción de ámbitos de intercambio y búsqueda de acuerdos entre los barrios, proceso en el cual el rol técnico de profesionales del área social del municipio facilitó talleres de participación, organización de jornadas recreativas y operativos integrales de asistencia en salud, registro de identidad, previsión social y asesoramiento nutricional.

El diagnóstico surgido de estas acciones dejó al descubierto el carácter múltiple de la crisis y reveló que las adicciones eran el principal problema y agente de descomposición del entramado social. Con el fin de abordar el problema, se creó un Centro de Prevención Local de Adicciones (CEPLA), para cuyo funcionamiento el municipio expropió el abandonado predio sindical de la Federación de Obreros Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) y se vinculó con actores del gobierno provincial y nacional.

**Se delineó una estrategia
 laboral para los jóvenes
 desocupados, sus padres y
 otras personas en vías de
 recuperación de adicciones ■**

Nuevos actores, sinergias y un proyecto. Desde el CEPLA se delineó una estrategia laboral para los jóvenes desocupados, sus padres y otras personas en vías de recuperación de

adicciones. El Centro de Estudios para el Desarrollo Inclusivo (CEDI), una ONG vinculada al proceso comunitario mediante tres profesionales (dos politólogos y una trabajadora social), contribuyó a crear la cooperativa Cruzando

19. Denis Merklen: *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina 1983-2003)*, Gorla, Buenos Aires, 2005.

Límites, cuyo objetivo era instalar una fábrica de bloques y adoquines de hormigón. En los primeros pasos de la producción se evidenciaron fortalezas como el compromiso de los jóvenes con la comunidad y la buena organización de la producción. Como debilidades principales se reconocieron la baja calidad del producto, la poca eficiencia en los procesos productivos, un *stock* deficitario asociado a un aumento de costos y un reducido mercado acotado al barrio.

La idea de un proyecto productivo de carácter integral se gestó luego de captar el interés en comprar adoquines de hormigón por parte de una empresa inmobiliaria local, que requería el producto para una de sus urbanizaciones. Pero el grupo empresario, si bien podía adquirir el producto a bajo precio, reclamaba mejoras cualitativas que requerían asesoramiento especializado. En el marco de la búsqueda de soluciones técnicas de mediano y largo plazo para afrontar los desafíos comerciales y productivos, se establecieron relaciones con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) y la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

El CEDI y los equipos de investigación, como estrategia para afrontar la(s) crisis, comenzaron a liderar un proceso de transformación e impulsaron el proyecto del PCII. Sobre la base de esquemas iniciales, se discutieron los lineamientos del PCII en unas jornadas organizadas en el ámbito municipal junto con múltiples actores. En estas jornadas se puso énfasis en el desarrollo territorial y en el esfuerzo organizativo e institucional²⁰, para lo cual se acordaron estrategias consensuadas de acción. En el proyecto del PCII se buscó otorgar a los procesos de innovación un matiz multidimensional, en el que los espacios de producción y de uso comunitario establecieran relaciones sinérgicas, mediados por espacios de capacitación y una agenda de actividades conjunta. A partir de entonces, se avanzó en el diseño y la creación de un órgano de gestión de la producción y la comercialización y en la definición de un perfil productivo especializado en fabricación de componentes de urbanización y provisión de servicios asociados, en el cual se destaca el rol jugado por la universidad. Un resultado inmediato fue la publicación de un anteproyecto consensuado, en el que quedaron definidos arquitectónicamente los espacios del PCII. Luego, el proyecto se presentó a

20. O. Madoery: «Otro desarrollo», *el cambio desde las ciudades y las regiones*, UNSAM Edita, San Martín, 2008.

la comunidad, en el mismo predio que ocuparía el PCII, con una amplia difusión en la prensa local²¹. Allí se formalizó el compromiso de trabajo entre todos los actores participantes y se dio inicio a las obras de construcción en el predio.

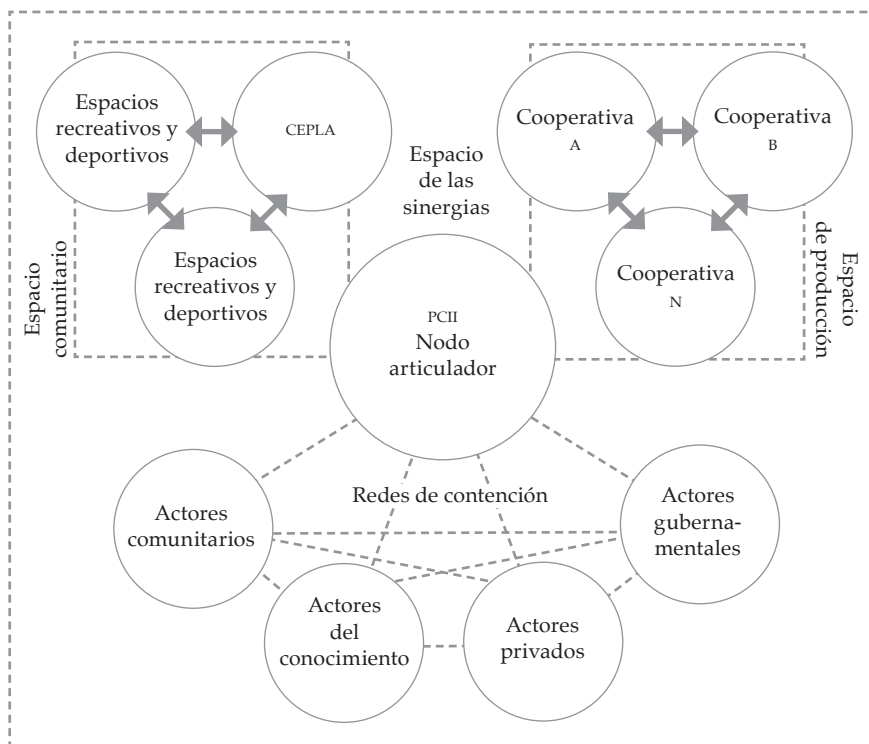
Simultáneamente, se iniciaron dos proyectos de extensión universitaria. Uno de la FAUD, denominado «Innovación Cooperativa», para diseñar y construir –junto con los integrantes de Cruzando Límites– un prototipo de baldosa destinado a personas no videntes, de aplicación en el espacio público. El proyecto incluye actividades de capacitación a cooperativistas e impresión de prototipos en 3D. El segundo, de la FACSO, nutre de fondos y equipos con expertos para el desarrollo de un modelo organizativo del PCII. También se consiguieron líneas de apoyo con fondos del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la provincia de San Juan y del municipio de Rawson para la compra de maquinaria e infraestructura destinada a las cooperativas. Las sinergias comenzaron a hacerse visibles y emergieron las primeras formas-contenidos de un hallazgo que podría configurar un incipiente territorio socioproductivo²², que la prensa ya denomina como «pueblo cooperativo», y que analíticamente creemos va configurando un posible modelo territorial (gráfico 2), aún en su faz incipiente.

Primeras evaluaciones. La evaluación del proceso es constante. Una primera reflexión refiere a la necesidad de ampliar la red de complementariedades y de fortalecer la capacidad de articulación entre los actores en función de las demandas de la implementación del PCII. A pesar de la celeridad, la conformación del PCII no está exenta de escollos. Algunos se van superando, otros se están procesando como cuestión inherente al propio desarrollo. Un impedimento fundamental es la escasez de recursos y las dificultades para acceder a financiamiento. Algo similar ocurre en el ámbito universitario, cuyos fondos solo alcanzan para cubrir necesidades mínimas. Otro tipo de dificultades se presentan en el intento de articular tareas, visiones y tiempos con las cooperativas. Su delicada situación económica y sus problemas organizativos internos las dejan supeditadas a los vaivenes de la conformación del PCII.

21. V. ediciones digitales del *Diario de Cuyo* del 3/8/2016 y del 14/4/2017.

22. C. Tomadoni: «Territorios socio-productivos y buen vivir: propuestas para un ordenamiento territorial inclusivo», informe del Seminario Internacional sobre Ordenamiento e Integración Territorial, Programa de Modernización 2013-2015, Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Buenos Aires, 2015.

Gráfico 2

El PCII como modelo de territorio socioproductivo

Fuente: elaboración de los autores.

En cuanto al municipio, más allá de los encuentros y desencuentros propios de los intereses que se dirimen con otros niveles del Estado, se deben mencionar los temores al compromiso político que debe asumirse ante una propuesta que depende de múltiples actores, que adquiere una gran complejidad administrativa y que requiere de fondos públicos en un nuevo contexto de ajuste neoliberal como el presente. Por su parte, en la comunidad barrial compuesta por actores heterogéneos, es dificultoso lograr una visión común sobre la importancia de un modelo socioproductivo alternativo y visualizar sus potencialidades para satisfacer las demandas comunitarias. El problema de fondo es la falta de discusión en la comunidad sobre cómo concebir las políticas públicas más allá de las soluciones inmediatas de corto alcance. Falta construir un capital de sustentabilidad para el desarrollo de mediano y largo plazo del territorio socioproductivo, que a la vez permita impensar la crisis socioambiental.

■ Aproximaciones finales

Con las políticas habitacionales se contribuye a salir de la situación más grave de crisis. Sin embargo, bajo los criterios utilizados hasta la actualidad para definir tales políticas, se ha tendido a consolidar un estado permanente de crisis en el hábitat periurbano de aquellos actores que se pretendía favorecer. Al criticar estas políticas habitacionales como propulsoras de oportunidades de desarrollo para quienes habitan la vivienda y el barrio sin tener en cuenta sus estrategias cotidianas de supervivencia, cuestionamos la arraigada idea de que la formalidad habitacional, la calidad edilicia y el cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad son criterios fundamentales para proponer soluciones al déficit habitacional y a la(s) crisis socioeconómica(s).

Resulta prioritario impensar las concepciones subyacentes a estas políticas y contribuir a idear soluciones alternativas comunitariamente a fin de responder a las principales demandas que surgen de los vecinos del hábitat periurbano. Esas soluciones se exigen a través de recurrentes formas de manifestación que revelan el estado de crisis de amplios sectores de la población. La distancia física y social que separaba a estos actores de los espacios de producción y de otros espacios que complementan el residir en ese habitáculo llamado vivienda fueron factores determinantes para la creciente pauperización de la población que habita en y desde un estado de crisis. Todo esto produjo un espacio urbano que, lejos de incluir, fragmentó y segregó.

El proyecto de PCII se fue definiendo en el tiempo, en paralelo a acciones en el territorio y junto con el ingreso de organizaciones públicas y privadas. El proyecto adquirió cuerpo a partir de una abierta intención de sostener una cierta indefinición, con la pretensión de incluir variables difícilmente previsibles en una primera instancia. Esta práctica de apertura permitió captar la complejidad del entramado de conflictos y los intersticios de oportunidades de acción y superación desde el propio territorio. Sin embargo, es necesario profundizar los vínculos entre espacios de producción, apropiación comunitaria y desarrollo de capitales (económicos, políticos, de conocimiento) asociados a la participación de múltiples instituciones y sus actores para potenciar el territorio socioproductivo en construcción.

El PCII está mostrando la posibilidad de favorecer procesos de desarrollo comunitario mediante iniciativas de innovación social que integren el acceso

al trabajo, la salud, la educación, el descanso y el ocio, la seguridad social, la infraestructura y el saneamiento ambiental, como complementos de la disponibilidad de una vivienda de calidad. Esta forma de impensar la innovación con criterios de solidaridad, cooperación y competitividad muestra que el PCII puede dinamizar la economía local, viabilizar oportunidades para actores marginados y facilitar la inserción y sustentabilidad del entramado cooperativo. El potencial de este naciente territorio socioproductivo es inmenso y el desafío es incrementar el capital de los actores beneficiarios del proyecto para que puedan liderar el proceso de transformación socioambiental que demanda la situación de la cual emergieron. ☐

Perfiles Latinoamericanos

Enero-Junio de 2018

Ciudad de México

Nº 51

ARTÍCULOS: La democracia interna de los partidos latinoamericanos, **Aldo Adrián Martínez-Hernández y Francisco Olucha Sánchez**. «Ordenar la provincia». Sobre el carisma de Néstor Kirchner en Santa Cruz (1991-1996), **Pamela Sosa**. Heterogeneidad en las microempresas informales mexicanas: evidencia empírica y algunas implicaciones de política, **René Rivera Huerta**. Conviviendo con la escasez. Cultura y adaptabilidad pesquera en el lago de Chapala, **Carmen Pedrosa Gutiérrez y Jaime Chavolla**. Gestión de la diversidad en escuelas chilenas de frontera, **Raúl Antonio Bustos González y Alfonso Díaz Aguad**. Informales de uniforme: trabajadoras de salones de belleza en Santiago, Chile, **Rosario Palacios**. Infraestructuras de paz y estatalidad en Colombia, **Mauricio Uribe López**. Estado, poder y dominio. Una lectura a propósito de sus mecanismos, **Paola García Reyes, Jennifer Vargas y Sonia Uribe Kaffure**. Posición socioeconómica, discriminación y color de piel en México, **Luis Ortiz Hernández, César Iván Ayala Guzmán y Diana Pérez Salgado**. Justicia ambiental y políticas de reconocimiento en Buenos Aires, **María Gabriela Merlinsky**. Endogeneidad de los rendimientos educativos en México, **Edna María Villarreal Peralta**. Desplazamiento forzado y adaptación al contexto de destino: el caso de Barranquilla, **Ignacio Ramos Vidal**. El efecto de las instituciones en el crecimiento económico de América Latina, **Delfino Vargas Chanes y José Carlos González Núñez**. ENSAYOS: Crisis económica y crisis de la teoría económica. Notas para el debate, **Alicia Puyana**. Los sentidos de la rendición de cuentas en el discurso educativo, **Noelia Fernández González y Héctor Monarca**.

Perfiles Latinoamericanos es una publicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México. Coordinación de Fomento Editorial, Carretera al Ajusco 377, Colonia Héroes de Padierna, C.P. 14200, México, DF. Tel.: (5255) 3000 0244 / 3000 0251. Correo electrónico: <perfiles@flacso.edu.mx>. Página web: <www.flacso.edu.mx>.

Populismo republicano: más allá de «Estado *versus* pueblo»

**VALERIA CORONEL /
LUCIANA CADAHIA**

Para comprender más profundamente las experiencias populistas que se desplegaron en América Latina, es necesario construir un marco teórico, en clave populista y republicana, que abandone el legado por el cual se piensa al pueblo como «lo otro» del Estado y que permita pensar una recíproca interpelación. Para ello resulta de utilidad adentrarse en algunos debates clásicos entre populismo y socialismo y en otros más recientes entre populismo y autonomismo, con la finalidad de revisar el rol del Estado y las instituciones al pensar la emancipación y la autodeterminación popular.

1. Las tensiones entre el socialismo y el populismo en América Latina han moldeado los principales debates políticos latinoamericanos de izquierda en la década de 1980¹. Tras la crisis del paradigma comunista de los años 60

Valeria Coronel: es doctora en Historia por la New York University (NYU). Coordina el Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS, por sus siglas en inglés) para la región andina. Es profesora e investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Ecuador. Su investigación aborda la transición del Estado oligárquico al Estado nacional social en la región andina y formas de movilización e integración del campesinado indígena en partidos políticos en los siglos XIX y XX. Correo electrónico: <avc211@gmail.com>.

Luciana Cadahia: es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Ecuador. Entre sus líneas de investigación se destaca la teoría política contemporánea vinculada a las transformaciones del rol del Estado, la democracia y las experiencias emancipadoras de carácter populista. Correo electrónico: <mlcadahia@flacso.edu.ec>.

Palabras claves: democracia, Estado, populismo, republicanismo, socialismo, América Latina.

1. Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero: «Lo nacional popular y los populismos realmente existentes» en *Nueva Sociedad* N° 54, 5-6/1981, disponible en <www.nuso.org>.

y 70², la izquierda latinoamericana se vio en la necesidad de replantear en profundidad el modo de comprender la transformación social y el sentido de la emancipación popular. En muchos casos, este replanteamiento se tradujo en el intento de recoger lo mejor del legado de la izquierda en clave gramsciana y en la voluntad de incorporarlo dentro de un proyecto hegemónico de carácter democrático. Podría decirse que es en el interior del debate sobre la hegemonía y la democracia donde nace esta disputa entre el socialismo y el populismo. Ambas corrientes coinciden en concebir la hegemonía como aquella forma de organización capaz de construir una voluntad colectiva alternativa al bloque dominante. Es decir, una propuesta organizada en el seno del mundo plebeyo para transformar la naturaleza de la forma nación. Si el bloque dominante se configuraba bajo la forma de Estado-nación, la hegemonía plebeya debería constituirse bajo la figura de lo nacional-popular. Y la construcción de lo nacional-popular se consolidaría mediante una articulación entre el pueblo y los intelectuales –en sentido amplio–, vínculo que permitiría diferenciar las sedimentaciones conservadoras de las posibilidades transformadoras propias de toda experiencia popular. Pero para que esta transformación tuviera lugar, era necesario delimitar el verdadero origen de las relaciones de subordinación. Podríamos decir que precisamente en relación con este problema –cómo definir el origen de las formas de dominación y los tipos de antagonismos a los que estas dan lugar– se produjeron las principales tensiones entre el populismo y el socialismo latinoamericano de corte gramsciano³.

Ahora bien, es importante resaltar que estas tensiones entre el socialismo y el populismo tienen un antecedente en los debates latinoamericanos: las discusiones entre José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. Por la misma época en que Antonio Gramsci configuraba un marxismo heterodoxo para la Italia meridional, estos intelectuales peruanos expresaban sus reparos a la idea de aplicar sin más el programa comunista en lugares tan abigarrados como América Latina e intentaban pensar formas de articulación plebeyas e interclasistas heterodoxas. La tensión aparece por el rechazo que experimenta Mariátegui ante la propuesta de Haya de la Torre de convertir el movimiento popular a la forma partido y lograr, así, la configuración de una forma estatal. Es esta tensión, entonces, la que vuelve a

2. V. Coronel: *La última guerra del Siglo de las Luces. Revolución Liberal y formación del Estado nacional en el Ecuador (1880-1926)*, Flacso, Quito, en prensa.

3. E. De Ipola y J.C. Portantiero: ob. cit. y Ernesto Laclau: *Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo*, Siglo XXI, Madrid, 1978.

instalarse de manera desplazada en los debates de los años 80⁴. Mientras el socialismo identificaba el Estado como la forma originaria de la dominación capitalista, el populismo hacía de la forma estatal un espacio para la irrupción plebeya y un instrumento de conquistas populares. Alrededor de la cuestión del Estado girará, entonces, uno de los mayores desencuentros entre estas dos corrientes de pensamiento latinoamericano. Si para muchos

**Alrededor de la cuestión
del Estado girará
uno de los mayores
desencuentros entre
estas corrientes
de pensamiento ■**

socialistas el Estado funciona como un arquetipo de dominación, resulta evidente –como intentaron demostrar Portantiero y De Ípola– caracterizar el populismo como un movimiento de traición a lo popular.

Es como si la crisis de los Estados oligárquicos hubiera abierto una ventana de oportunidad que el populismo obturó al volver a poner en el centro de la escena al Estado y las instituciones. Si bien es aquí donde aparecen todas las dicotomías entre una y otra corriente –dado que mientras la hegemonía socialista se asume como una propuesta verdaderamente popular, pluralista y democrática, la populista aparece como un cesarismo que «traiciona» lo popular, organicista y antidemocrático–, lo cierto es que la pertinencia de esta caracterización depende de cómo se lea el tipo de oportunidad que abrió la crisis, es decir, si el populismo operó como una recomposición o como una transformación de la naturaleza del Estado.

Tanto el socialismo como el populismo acuerdan en asumir la crisis de la oligarquía como la oportunidad para activar y organizar a los sectores populares bajo la forma de una voluntad colectiva y para que el pueblo recupere el sentido y la percepción de la nación que había sido capturada bajo la forma Estado-nación. No obstante, desde el punto de vista socialista, el populismo habría propiciado esta recuperación de lo nacional para luego expropiarlo, es decir, contribuiría a liberar lo nacional para luego apropiarse de su sentido y ponerlo, otra vez, bajo la custodia de un Estado antipluralista. Por tanto, desde esta interpretación se piensa la irrupción del populismo como una recomposición del Estado (que estatiza lo popular) y así se deja por fuera la posibilidad de leer tal irrupción como una transformación (aparición de una nueva forma de poder) de la naturaleza de lo

4. Excedería los propósitos de este trabajo establecer una genealogía que permita comprender cómo se transfirieron estos debates entre Mariátegui y Haya de la Torre, propios de la primera mitad del siglo xx, a las discusiones de los años 80, por lo que nos limitamos a resaltar la coincidencia temática.

político ante la crisis de las oligarquías, mutación que también alcanza al retorno del Estado.

Quizá haga falta prestar más atención a las formas de este retorno y a los tipos de desplazamiento institucional que produce cada juego de repetición populista a lo largo de la historia latinoamericana⁵. La lectura sobre la «traición del populismo al pueblo» solamente tiene sentido si partimos de una premisa: que el pueblo y el Estado son dos producciones sociales antagónicas y autocontenidas. Si el Estado es asumido como un tipo de poder monolítico y cerrado sobre sí mismo, una forma universal inmutable y destinada por naturaleza a la opresión, entonces sí tendría sentido pensar al pueblo como su contraparte. Pero si, en cambio, lo consideramos como una producción social porosa, como el lugar donde los distintos actores políticos pugnan por darle forma para determinar su orientación institucional y los tipos de acumulación y distribución, entonces resulta más complicado asumir sin más esta dicotomía. ¿No hay acaso en este movimiento de crisis y recomposición estatal la reiteración de un acto fundante de derecho ejercido mediante una profanación popular?⁶

En ese sentido, resulta más interesante invertir la cuestión y preguntarse por el tipo de movimiento teológico que autoriza a pensar algo así como lo nacional «liberado» de la «enajenación» estatal y recuperado por el «pueblo». Es como si el socialismo viniera a subsanar la herida de la comunidad causada por la irrupción del Estado, como si de manera inconfesada perviviese una especie de nostalgia sustancialista. Cabría decir que es esta forma de liberación lo que viene a poner en cuestión el populismo, puesto que no habría algo así como una «sustancia nacional» secuestrada por el «Estado» para fines privados. Tampoco habría un pueblo dado como realidad previa, a la espera de su liberación. Si algo permite pensar el populismo es que el Estado no tiene por qué ser, en sentido estricto, una forma de *enajenación*, sino que puede convertirse en un modo de *mediación* de lo popular. La confusión estaría en creer que toda forma de mediación es un modo de enajenación que oprime una materialidad dada. Y aquí vemos cómo el problema de fondo no es otro que la ilusión de inmediatez. Es decir, asumir que existe algo no mediado que es sustraído al pueblo, y que solo en el retorno a lo espontáneo estaría la

5. Gerardo Aboy Carlés: «Las dos caras de Jano: acerca de la compleja relación entre populismo e instituciones políticas» en *Pensamiento Plural* N° 7, 7-12/2010 y L. Cadahia: «Hacia una nueva crítica del dispositivo» en *Utopía y Praxis Latinoamericana* vol. 19 N° 66, 7-9/2014.

6. James Sanders: *Contentious Republicans: Popular Politics, Race, and Class in Nineteenth-Century Colombia*, Duke University Press, Durham, 2004.

clave de la emancipación. Si el Estado oligárquico era la expresión elitista de una determinada forma estatal, eso no significa que toda forma estatal se reduzca a esto⁷. O dicho de otra manera, era la oligarquía la que convertía al Estado en la propiedad de unos pocos. Por tanto, por qué no pensar que quizá sea el acto de profanación popular el que convierte las instituciones en un espacio de litigio para *los cualquiera*. Y es aquí donde hallamos la gran originalidad del populismo: arriesgarse a construir una forma estatal en sintonía con la irrupción de las masas populares en la política⁸.

II. Como nos recuerda Gramsci, las experiencias populares se encuentran atravesadas por fuerzas reactivas y emancipadoras⁹. Y es en el interior de esta difícil dialéctica reactiva y emancipadora donde se juegan la apuesta populista y su forma de construir los antagonismos que traducen la conflictividad

**Como nos recuerda
Gramsci, las experiencias
populares se encuentran
atravesadas por fuerzas
reactivas y emancipadoras ■**

social de lo político. Las fuerzas reactivas puján por configurar un «nosotros» a partir de la creencia de una falta que podría ser restituida, una identidad perdida por recuperar, lo cual implica delimitar una frontera entre los de abajo y una relación de exterioridad con un otro. Esta frontera entre los de aba-

jo es construida mediante un ejercicio claramente inmunitario, puesto que ese otro –el inmigrante, el indígena, el homosexual, etc.– que queda figurado como exterioridad amenazante de lo social es identificado como la anomalía que habría quebrado desde dentro la identidad y armonía de un pueblo. La identificación entre las insatisfacciones populares y un elemento perturbador que es preciso eliminar no es sino la reactivación de elementos fascistas que no han dejado de estar presentes en las sensibilidades populares, un sí mismo que, aunque plebeyo, es refractario a cualquier experiencia que no suponga un repliegue de sí.

La dimensión reactiva que late de manera peligrosa en el interior del populismo no solo apunta a las elites como las responsables de haber permitido esta descomposición, sino que a su vez promete la recuperación de esta pérdida. Este anhelo de una totalidad perdida que venga a remediar esa falta no es otra cosa que un cierre en una identidad que se presupone como algo previamente

7. V. Coronel: «Justicia laboral y formación del Estado como contraparte ante el capital transnacional en Ecuador 1927-1938» en *Illes I Imperis* N° 15, 2013.

8. Gino Germani: *Autoritarismo, fascismo y populismo nacional*, Temas, Buenos Aires, 2003.

9. A. Gramsci: *Cuadernos de la cárcel* tomo 6, Era, Ciudad de México, 2000.

garantizado y vulnerado. Las fuerzas emancipadoras del populismo, por el contrario, erosionan este tipo de frontera antagónica y consiguen desactivar la identificación inmunitaria mediante otro tipo de lazo plebeyo: la igualdad entre los de abajo. A su vez, el antagonismo solamente apunta a los de arriba de un modo no inmunitario, es decir, no ya como aquellos que corrompen la identidad previamente establecida de un pueblo, sino como los responsables que obturan las posibilidades aún no transitadas de este. Y es esta forma emancipadora del populismo lo que conecta con la democracia, puesto que su forma de establecer esta frontera está dada por una profunda voluntad democratizadora¹⁰.

Esto nos lleva, entonces, a la cuestión de si el populismo es compatible o no con la democracia. La afirmación de que es contrario a la democracia solamente tiene lugar cuando aceptamos una noción restringida de esta, una noción que hace de la democracia un procedimiento formal, consensual y alejado de cualquier tipo de conflictividad popular. Una de las grandes dificultades de nuestro tiempo es el predominio de esta concepción y el olvido del sentido original de la palabra democracia: poder del pueblo. La figura de un pueblo activo no solo ha desaparecido de cierto registro democrático contemporáneo, sino que además se postula muchas veces como una amenaza para la democracia. A diferencia de lo que suelen afirmar los defensores de este tipo de democracia, podríamos decir que el populismo es una de las pocas experiencias políticas que mantiene viva la figura de un pueblo empoderado. Por eso, en lugar de decir que el populismo es antidemocrático, habría que ver si reactiva la dimensión constitutiva de la democracia. Más aún, el intento de neutralizar el vínculo entre populismo y democracia obtura todo un campo reflexivo sobre el rol del Estado en nuestro presente.

III. Si tratamos de conectar el problema del Estado con la democracia, habría que indagar sobre el tipo de institucionalidad que propicia el populismo. ¿Acaso es solamente una forma de poder que se rige sin más por la figura dominación-subordinación? ¿No es posible hablar de una institucionalidad populista que no coincida ni con el Estado oligárquico ni con el Estado liberal-conservador europeo? El pensamiento político latinoamericano se encuentra aún hoy atrapado en la respuesta a esta pregunta. Por eso resulta tan importante poner en relación el populismo con la tradición republicana, tal

10. L. Cadahia: «Populismo y democracia: una alternativa emancipadora» en *Cuba Posible*, 23/5/2017.

como sugieren Carlos Vilas¹¹ y Eduardo Rinesi¹², al momento de delimitar las formas realmente existentes de institucionalidad a las que han dado lugar los populismos de esta última década. María Julia Bertomeu hace una distinción muy importante entre dos tradiciones republicanas, una oligárquica o

**Bertomeu hace una distinción
muy importante entre dos
tradiciones republicanas, una
oligárquica o elitista y otra
democrática o plebeya ■**

elitista y otra democrática o plebeya, que puede ayudar a reflexionar mejor sobre este posible vínculo¹³. Cuando hablamos del republicanismo oligárquico nos referimos a la forma de gobierno que hace del derecho un mecanismo de conservación de privilegios.

Es decir, una manera de restringir el campo de oportunidades de los de abajo y de ampliar el sistema de privilegios de los de arriba. Las instituciones, por tanto, operan como una forma de dominación y perpetuación de las desigualdades sociales. El republicanismo plebeyo, por el contrario, lejos de invisibilizar la dimensión conflictual de las instituciones, apela a ella como mecanismo de ampliación de derechos. Aquí, las instituciones son concebidas en su dimensión igualitaria como el espacio propicio para la expansión de derechos y la desarticulación de la frontera material entre los de arriba y los de abajo.

Si prestamos atención a las formas de institucionalidad y a los usos del derecho posibilitados en las experiencias populistas contemporáneas, ¿no es posible encontrar casos en los que pareciera materializarse un republicanismo plebeyo? Esto implicaría revisar algunas de las premisas actuales de la teoría populista que, al haber identificado el populismo con una lógica de lo político de carácter rupturista, presenta algunas dificultades para pensar el vínculo entre este y las instituciones¹⁴. La cuestión es si acaso la lógica rupturista del populismo no puede hacerse extensiva a una determinada forma de institucionalidad que combine dinámicas instituyentes de los gobiernos populares con decisionismo y movilización popular¹⁵. Para ello es preciso abandonar el prejuicio por el cual se considera que las experiencias políticas populistas

11. C. Vilas: «¿Populismos reciclados o neoliberalismo a secas? El mito del neopopulismo latinoamericano» en *Estudios Sociales* N° 26, 2004.

12. C. Vilas y E. Rinesi: «Populismo y república. Algunos apuntes sobre un debate actual» en E. Rinesi, Gabriel Vommaro y Matías Muraca (comps.): *Si este no es el pueblo. Hegemonía, populismo y democracia en Argentina*, IEC, Buenos Aires, 2010.

13. M.J. Bertomeu: «Republicanismo y propiedad» en *Sin Permiso*, 5/7/2005.

14. E. Laclau: *La razón populista*, FCE, Buenos Aires, 2009.

15. L. Cadahia, V. Coronel y Franklin Ramírez (eds.): *A contracorriente: materiales para una teoría renovada del populismo*, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, en prensa.

habrían descuidado el papel de las instituciones, dado más peso a la figura de los líderes y desmantelado la división de poderes propia de las repúblicas. Lo que cabría preguntarse aquí es si esta imposibilidad de pensar una articulación entre populismo e instituciones no se debe a una concepción de las instituciones todavía heredera de la matriz liberal y procedimental¹⁶. Posiblemente sea una lectura «cosificada» de las instituciones lo que nos impide abordarlas desde otras perspectivas. La dialéctica entre poder instituyente y poder instituido, algo que atravesó las experiencias populistas de los países andinos de esta última década, abriría las puertas para desarrollar una matriz de institucionalidad diferente de la clásica liberal y podría generar un marco de análisis para pensar el juego entre lo instituido y lo instituyente en las instituciones populistas. En lugar de concebir los afectos y liderazgos políticos –dos elementos claves de la lógica populista– como obstáculos para la institucionalidad, habría que preguntarse cómo intervienen en su construcción. O también cómo los conflictos colectivos van gestando, a través de una concepción plebeya del derecho, formas de institucionalidad que no pueden ser concebidas desde la matriz liberal del individuo posesivo. Y si de una concepción popular del derecho se trata, se comprende mejor cómo la tradición republicana puede ser clave para hacer inteligible la dimensión institucional del populismo.

IV. Es sabido que tanto la tradición liberal¹⁷ como la socialista¹⁸ han tratado de tender puentes con los estudios del republicanismo. Sin ánimo de simplificar los debates, podría decirse que el principal desencuentro entre los estudios sobre el republicanismo se vincula con la bifurcación entre un republicanismo de corte liberal y otro de carácter popular. El primero trata de aunar las premisas del liberalismo clásico –el individualismo metodológico, la división de poderes y la libertad negativa– con una reflexión sobre las instituciones republicanas y sobre cómo estas podrían garantizar esos principios. Este tipo de vínculo procura centrarse en la dimensión consensual de las instituciones y abandona un rasgo que será clave para la otra vía: el conflicto y las formas de organización de la soberanía popular. Desde esta perspectiva, el conflicto es experimentado como una falla o debilidad de las instituciones y la democracia, y su existencia supone un signo de deterioro. El populismo, al considerarse no solo como una experiencia que construye poder a partir

16. L. Cadahia: «Espectrologías del populismo en Ecuador: materiales para una lectura renovada de la Revolución Ciudadana» en *La Revolución Ciudadana en escala de grises*, IAEN, Quito, 2016.

17. Philip Pettit: *Republicanism*, Paidós, Barcelona, 1999.

18. Antoni Domènech: *El eclipse de la fraternidad, una revisión republicana de la tradición socialista*, Crítica, Madrid, 2004.

del conflicto –bajo la figura de lo nacional-popular–, sino también como una forma de conflicto inerradicable¹⁹, es visto por la corriente liberal como la antítesis de cualquier proyecto republicano²⁰. Pero si nos centramos en aquellas investigaciones que identifican el republicanismo con el poder popular, es posible establecer un diálogo fructífero con el populismo. Como sugieren Eduardo Rinesi y Matías Muraca, podríamos ver tanto en el populismo como en el republicanismo una concepción del conflicto diferente de la matriz consensualista y liberal²¹. Si la lectura liberal concibe las instituciones como un espacio de regulación del conflicto –con la esperanza de una futura neutralización–, la matriz populista-republicana, en cambio, interpreta el conflicto como constitutivo de las instituciones. Es decir, el rol de las instituciones no consistiría tanto en neutralizar el conflicto como en expresarlo y regularlo de un modo específico. Dicho de otra manera, las instituciones mismas pueden ser concebidas, en términos gramscianos, como un campo de fuerzas, donde el problema de la hegemonía adquiere toda su importancia analítica para pensar la república en su dimensión conflictual. Así, también aparece una dimensión consensual, pero inseparable del conflicto. Esta vía conflictual para pensar las instituciones sienta las bases para que pueda empezar a tejerse un vínculo analítico entre los estudios del populismo, el republicanismo y las instituciones. Esta articulación entre la dimensión práctica y la dimensión teórica nos podría ayudar a explorar cómo han funcionado las instituciones en las experiencias progresistas latinoamericanas. Es decir, qué formas de institucionalidad y gobernabilidad han posibilitado las experiencias populistas de la última década y cuáles han sido sus fortalezas y debilidades, sus logros y contradicciones. A la vez, nos permitiría preguntarnos acerca de las posibilidades (o no) de coexistencia entre figuras de liderazgo y fortalecimiento institucional, articulación (o no) de movimientos sociales e instituciones del Estado.

IV. A modo de conclusión, que se pretende provisional, podríamos afirmar que esta matriz plebeya, de corte republicano-populista, debería ser asumida dentro de los debates actuales entre autonomismo y populismo, entendidos como una reactualización diferida de las viejas tensiones entre el populismo y el socialismo. Podríamos decir que el lugar asignado a los movimientos sociales por parte del autonomismo es equivalente al que el socialismo atribuía a la voluntad colectiva nacional-popular. Según esta nueva perspectiva,

19. Chantal Mouffe: «El reto populista» en *La Circular* N° 5, 10/11/2016.

20. Roberto Gargarella y Christian Courtis: *El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes*, Cepal / ASDI, 11/2009.

21. E. Rinesi, G. Vommaro y M. Muraca (comps.): ob. cit.

consolidada sobre todo en la «larga noche neoliberal» de los años 90, los movimientos sociales serían la expresión plebeya liberada del Estado, los sindicatos y los partidos políticos²².

Esta irrupción plebeya llevaría en sí una demanda de autonomía que abriría las puertas para la autodeterminación y la emancipación. Si los populismos de la primera mitad del siglo xx fueron concebidos como una traición a la voluntad colectiva popular, los de inicio del siglo xxi se asumirían, desde la perspectiva autonomista, como una traición a los movimientos sociales. O dicho de otra manera, la transformación plebeya de los movimientos sociales se encontraría reificada por la forma populista; la demanda de autonomía, subordinada por la interpelación del Estado, y la búsqueda de emancipación, reducida a un cesarismo o revolución pasiva de carácter decisionista, verticalista y carismática. Trazadas estas coordenadas, el Estado quedaría identificado con la opresión, el verticalismo y la desdemocratización, y los movimientos sociales, con la emancipación, la horizontalidad y la democracia. La pregunta que puede hacerse aquí es por qué la ampliación de derechos que propicia el populismo no puede ser leída como una forma de autonomía, en los términos de capacidad de autodeterminación de un pueblo a partir de sí mismo mediante el uso del derecho. Una forma de autonomía que contribuiría, aunque sea formulada desde arriba –algo que se vuelve paradójico cuando es un líder indígena, un profesor universitario o un líder social quien accede al gobierno– a la emancipación (posibilidad de autorrealización de nuestras capacidades), la horizontalidad (todos somos iguales en derechos) y la democratización (ampliación del poder popular). Que una medida sea tomada desde arriba ¿supone necesariamente subalternizar lo plebeyo? ¿Por qué, entonces, determinadas conquistas sociales, muchas veces logradas mediante la articulación entre Estado y movimientos sociales –como lo fueron la ley de medios o el matrimonio igualitario en Argentina, la nacionalización del agua en Bolivia o la regulación de las empleadas domésticas en Ecuador– no pueden ser comprendidas desde el autonomismo como pasos hacia la autodeterminación y la emancipación de ciertas formas de opresión popular²³?

**Que una medida sea
tomada desde arriba
¿supone necesariamente
subalternizar lo plebeyo? ■**

22. Massimo Modonesi y Maristella Svampa: «Post-progresismo y horizontes emancipatorios en América Latina» en *La Izquierda Diario*, 10/8/2016.

23. Soledad Stoessel: «Los claroscuros del populismo. El caso de la Revolución Ciudadana en Ecuador» en *Pasajes* N° 46, 2014.

¿No son estas las exigencias de los movimientos sociales cuando reclaman educación universitaria gratuita o regulación de la tierra para evitar los desplazamientos forzados? ¿No son acaso las interpelaciones de los movimientos sociales una forma de exigir más institucionalidad y presencia del Estado en lugares a los que históricamente este no ha llegado?

Si la actual crisis del neoliberalismo –entendida como un nuevo pacto pos-democrático– se expresa como una distorsión del sentido de la democracia y aleja cada vez más a los sectores populares del acceso a los derechos y las instituciones, quizá resulte sumamente provechoso detenernos a pensar cómo los usos populares del derecho, dentro de una matriz populista-republicana, ayudan a imaginar una alternativa a este escenario. Es claro que muchas veces los populismos no han estado a la altura de esta sinergia entre las demandas populares y la ampliación de derechos, pero hacer del vínculo entre las demandas y el Estado la quintaesencia de la opresión no nos habrá hecho avanzar un ápice en las reflexiones sobre las formas *realmente existentes* de emancipación social y, menos aún, en las posibilidades que esta articulación abre para seguir radicalizando la democracia en nuestra región. ☐

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Septiembre de 2017

Quito

Nº 59

DOSSIER: Los trabajos de campo, lo experimental y el quehacer etnográfico. Presentación del dossier, **X. Andrade, Ana María Forero y Fiamma Montezemolo**. Resituando el diario/bitácora/sketch en la producción de conocimiento y sentido antropológico, **Catalina Cortés Severino**. *Cultura autóctona*: curaduría como proceso etnográfico en la escena del arte cubano actual, **Celia Irina González**. Representación claroscuro: una exploración audiovisual y teórica de la representación del pasado en el cine documental, **Gerrit Stollbrock Trujillo**. La dimensión acústica de la protesta social: apuntes desde una etnografía sonora, **José Luis Martín y Santiago Fernández Trejo**. Ciberactivismo y olas de agitación comunicativa. Consideraciones etnográficas, **Nicolás Aguilar-Forero**. DIÁLOGO: Lévi-Strauss, el individualismo jíbaro y el *Musée du quai Branly*. Un diálogo con **Anne-Christine Taylor, Giovanna Bacchiddu y Marcelo González Gálvez**. ENSAYO VISUAL: Rótulos, etnografía y curadurías en el Museo Histórico de la Policía Nacional, Bogotá, **Daniel Kraus, X. Andrade, Ana María Forero y Mauricio Salinas**. TEMAS: Transitar por América Latina: redes, trabajo y sexualidad, **Lidia Raquel García Díaz**. Conocimiento ecológico local y conservación biológica: la ciencia postnormal como campo de interculturalidad, **Jorje Ignacio Zalles**. RESEÑAS.

Íconos es una publicación cuatrimestral de Flacso-Ecuador, La Pradera E7-174 y Av. Almagro, Quito, Ecuador. Tel.: (593 2) 3238888. Correo electrónico: <revistaiconos@flacso.org.ec>. Página web: <www.revistaiconos.ec>.

Costa Rica y los pactos sociales multclasistas

La Reforma al Código Procesal Laboral (2015-2017)

**RONNY J. VIALES HURTADO /
DAVID DÍAZ ARIAS**

La reforma al Código Procesal Laboral en Costa Rica entre 2015 y 2017 permite adentrarse en la forma en que se afrontan las crisis y se construyen los pactos en ese país. La tesis fundamental de este artículo es que esa reforma responde a un histórico estilo político costarricense que privilegia los pactos intra- e interclasistas y, con eso, la ampliación de las instituciones democráticas. Se trata de un estilo político que permite resolver y prevenir crisis sociopolíticas y evitar la radicalización.

■ Introducción

¿Se puede construir una cultura política que anticipe y evite las crisis? La forma en que las clases dirigentes de Costa Rica han intentado, históricamente, modelar una cultura de ese tipo constituye un importante ejemplo al respecto. A esa temática se acerca este artículo al explorar la producción de la reforma al Código Procesal Laboral en Costa Rica entre 2015 y 2017. La tesis fundamental expuesta aquí es que esa reforma responde a un histórico estilo político costarricense que privilegia los pactos intra- e interclasistas y,

Ronny J. Viales Hurtado: es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeña como catedrático e investigador de la Escuela de Historia del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y del Posgrado Centroamericano en Historia de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es director del Programa de Posgrado en Historia. Correo electrónico: <ronny.viales@ucr.ac.cr>.

David Díaz Arias: es doctor en Historia por la Universidad de Indiana Bloomington. Se desempeña como catedrático e investigador de la Escuela de Historia, del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y del Posgrado Centroamericano en Historia de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Correo electrónico: <david.diaz@ucr.ac.cr>.

Palabras claves: Código de Trabajo, crisis social, reforma laboral, resolución de conflictos, Costa Rica.

con ello, la ampliación de las instituciones democráticas. El objetivo fundamental de esos pactos reside en evitar la perdurabilidad de disputas políticas que podrían volverse problemáticas si son asumidas por las clases populares para su resolución. Así, usualmente las elites políticas resuelven sus diferencias internamente, a través de pactos políticos, mientras que las instituciones democráticas funcionan en la integración social de la mayoría de los sectores sociales. Solo en pocas ocasiones se ha roto esa tradición, y esos momentos sirven para evidenciar su continuidad. En el caso de Costa Rica, ese posicionamiento responde también a un intento de anticiparse a las crisis sociales y de enfrentar posiciones políticas radicales de izquierda y de derecha produciendo reformas políticas y sociales que permitan la integración social frente a la exclusión¹.

El concepto de crisis que utilizamos en este trabajo refiere tanto al marco contextual como al de la acción de los actores. Así, aunque en Costa Rica las reformas neoliberales nunca se pudieron desarrollar en profundidad y apenas se produjeron algunas reformas institucionales y la reducción del Estado, así como contratos de concesión², sí produjeron tensiones sociales que se tradujeron en varias movilizaciones de sindicatos y trabajadores para oponerse a esas transformaciones. Asimismo, como se verá más adelante, esas reformas favorecieron connotados casos de corrupción política que pusieron en crisis el sistema bipartidista y alentaron un desencanto con la clase política. Este se manifestó en el creciente abstencionismo electoral, que en la segunda ronda de las elecciones de 2014 superó el 40% del padrón electoral.

A ese contexto de crisis social y crisis político-electoral le ha sucedido un periodo de cierta estabilidad entre 2014 y 2017, en gran medida gracias a la cercanía del gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) con los principales líderes sociales y a que, al contrario de las de sus antecesores, su administración se ha distanciado de las políticas neoliberales. De esa manera, el nuevo contexto sirvió para negociar la reforma que se analiza en este artículo, pero siempre en un espacio de tensión que podría desencadenar una crisis social. La negociación, así, se plantea en el caso costarricense como un antecedente que pretende evitar las crisis y llegar a pactos inter- y multiclasis.

1. Ver Iván Molina Jiménez: *Anticomunismo reformista. Competencia electoral y cuestión social en Costa Rica (1931-1948)*, Editorial Costa Rica, San José, 2009; y Juliana Martínez Franzoni y Diego Sánchez Ancochea: «The Road to Universal Social Protection: How Costa Rica Informs Theory», documento de trabajo N° 383, Kellogg Institute for International Studies, 3/2012.

2. Mary A. Clark: *Gradual Economic Reform in Latin America: The Costa Rican Experience*, State University of New York Press, Nueva York, 2001.



Esa estrategia, si bien logra evitar profundas confrontaciones sociales, también sirve para excluir a grupos críticos que cuestionan ese pactismo o bien que se apartan de esa práctica.

■ El contexto de la reforma

Luego de las guerras civiles que afloraron en la región centroamericana en la década de 1980, y como parte de los procesos de paz que se iniciaron con el Plan Esquipulas 2 en 1987 y que culminaron en 1996 con la firma de la paz en Guatemala, la tesis fundamental de muchos científicos sociales era que Centroamérica, como otras sociedades de América Latina, transitaba hacia la democratización³. En ese marco, se tenía esperanza en el desarrollo de la democracia y la sujeción del poder militar al civil, aunque ya se indicaba un

Desde 1880, Costa Rica desarrolló una tendencia a la inclusión política, combinada con una creciente participación electoral ■

posible problema de «ciudadanía de baja intensidad», es decir, de una tendencia de los ciudadanos a creer que la democracia, básicamente, consiste en realizar elecciones cada cuatro años⁴. Costa Rica, no obstante, no ha sido incluida en ese marco interpretativo, debido a que su sistema político-electoral y su institucionalidad democrática están vigentes desde finales del siglo XIX⁵. Los estu-

dios históricos de Iván Molina y Fabrice Lehoucq⁶ han mostrado cómo, desde 1880, Costa Rica desarrolló una tendencia a la inclusión política, combinada con una creciente participación electoral por parte de campesinos, trabajadores urbanos y otros grupos de ciudadanos.

Esa cultura política también alentó un tipo de resolución de conflictos que evitó, la mayoría de las veces, que las desavenencias políticas quebraran la estructura institucional. Los pactos políticos de ese tipo pueden rastrear-se también hasta el siglo XIX y solo en ocasiones muy específicas se llevó el

3. Edelberto Torres-Rivas: *El sistema político y la transición a la democracia en Centroamérica*, Secretaría General, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, San José, 1990; Rachel Sieder: *Central America: Fragile Transition*, St. Martin's Press, Nueva York, 1996; Mitchell A. Seligson y John A. Booth: *Elections and Democracy in Central America, Revisited*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1995.

4. E. Torres-Rivas: «Centroamérica: democracias de baja intensidad» en *Estudios Latinoamericanos* vol. 3 N° 5, 7-12/1988.

5. I. Molina Jiménez: *Demopsectocracia: la democracia pre-reformada en Costa Rica (1885-1948)*, Editorial de la Universidad Nacional, Heredia, 2005.

6. V. ibíd.; F. Lehoucq e I. Molina Jiménez: *Stuffing the Ballot Boxes: Fraud, Electoral Reform, and Democratization in Costa Rica*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

castigo político hasta posiciones extremas: por ejemplo, en 1860, con el fusilamiento del ex-presidente Juan Rafael Mora. Incluso algunos investigadores han planteado que la Guerra Civil de 1948 pudo haberse evitado de no haber sido desarrollada por el grupo más radical que no tenía posibilidades de tomar el poder por vías electorales y que, justo por eso, se negó a reconocer el pacto dentro de la elite política⁷. Luego de la contienda, los acuerdos políticos siguieron poniéndose en ejecución múltiples veces, especialmente cuando se construyó un juego electoral bipartidista después de 1983. Ese juego electoral habilitó la reforma del Estado costarricense, que produciría una serie de transformaciones económicas que harían mella en el tipo de cultura política e institucional construida en el pasado⁸.

Si bien los cambios económicos que se habían estado modelando en el país desde la implementación del primer Programa de Ajuste Estructural (PAE) en 1985 intentaron una transformación del aparato estatal, no fue sino hasta la firma del PAE III, en 1995, cuando se interpuso en la mesa de decisiones políticas, con más fuerza, el asunto de la reforma del Estado⁹. No es que el paquete no estuviera ya pensado desde principios de la década de 1990, ni que en la agenda política no apareciera el camino hacia un nuevo tipo de Estado menos interventor desde los cambios producidos en la década de 1980, sino que la oposición del Partido Liberación Nacional (PLN) durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) atrasó el avance hacia esas medidas. Lo que estaba en juego era el modelo de Estado que se edificó después de 1949 y que una buena parte del PLN pensaba como su herencia política¹⁰. Después de que el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998) se mostrara incapaz, en sus primeros años, de resolver el problema del déficit público, tuvo que recurrir a un pacto con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que llevó al desplazamiento de las metas políticas propuestas por Figueres en campaña y a la continuación de las políticas de liberalización económica y reducción del aparato público que habían comenzado al

7. F.E. Lehoucq: «The Origins of Democracy in Costa Rica in Comparative Perspective», tesis de doctorado, Universidad de Duke, 1992, p. 285.

8. Wilburg Jiménez Castro: *La reforma administrativa, la reforma del Estado y la privatización de instituciones, empresas y programas públicos*, EUNED, San José, 2000.

9. Antonio Luis Hidalgo Capitán: *Costa Rica en evolución*, Editorial de la Universidad de Costa Rica / Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, San José-Huelva, 2003, pp. 174-234.

10. Ver D. Díaz Arias: *Crisis social y memorias en lucha. Guerra civil en Costa Rica, 1940-1948*, Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, 2015; Daniel Masís Iverson: «Poder político y sociedad» en Juan Rafael Quesada Camacho (coord.): *Costa Rica Contemporánea. Raíces del estado de la nación*, Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, 1999, especialmente pp. 73-74.

finalizar la década de 1980¹¹. Esas reformas y otras tensiones provocadas por la grave crisis económica de 1980-1982 alentaron diversas movilizaciones sindicales y campesinas en la década de 1980, que no siempre fueron resueltas a través de negociaciones y diálogo, sino luego de diversos enfrentamientos¹². Desde 2000, cuando se implementó una reforma política que permitió la apertura del monopolio de las telecomunicaciones que había establecido el Estado desde 1949, grupos muy heterogéneos, entre los que se destacaron el sindicato de trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sindicatos de maestros y profesores, profesores y estudiantes universitarios y de secundaria y movimientos de vecinos, se unieron en un movimiento nacional contra la reforma que produjo la movilización social más importante de la Costa Rica contemporánea. Los opositores protestaron durante semanas y paralizaron el país hasta que el presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, tuvo que vetar la ley de apertura que ya había sido aprobada en la Asamblea Legislativa¹³.

Uno de los efectos más esperados de la apertura de los mercados financieros era el crecimiento de la tasa de ahorro interno, pero en 2003 esta alcanzaba apenas a 15%¹⁴. En ese marco, se produjo una tremenda crisis de credibilidad política en el país. A esto se sumó que en 2004 se inició una coyuntura crítica debido a denuncias de corrupción de alto nivel por los denominados «casos» de la Caja Costarricense de Seguro Social-Fischel y del Instituto Costarricense de Electricidad-Alcatel. Esta situación activó los mecanismos democráticos establecidos por la Constitución Política de 1949 y sus reformas, que garantizaron el Estado de derecho y posibilitaron la apertura de procesos judiciales contra los imputados, a pesar de que entre estos se incluían ex-presidentes de la República¹⁵. Los efectos políticos más importantes de ese proceso fueron la crisis del bipartidismo y la multiplicación de fracciones partidarias en la Asamblea Legislativa¹⁶.

11. A.L. Hidalgo Capitán: ob. cit.

12. Sindy Mora Solano: «Costa Rica en la década de 1980: estrategias de negociación política en tiempos de crisis. ¿Qué pasó después de la protesta?» en *Intercambio* vol. 4 N° 5, 2007.

13. Patricia Alvarenga Venutolo: *De vecinos a ciudadanos. Movimientos sociales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica*, Editorial de la Universidad de Costa Rica / Editorial de la Universidad Nacional, San José-Heredia, 2005; Mauricio Menjívar Ochoa: «Acciones colectivas en Costa Rica al final del siglo xx: entre la continuidad y el orden» en *Revista de Ciencias Sociales* vol. IV N° 106, 2004; S. Mora Solano: «Acciones colectivas en la sociedad costarricense 1998-2004» en *Diálogos. Revista Electrónica de Historia* vol. 8 N° 1, 2-9/2007.

14. A.L. Hidalgo Capitán: ob. cit.

15. Fernando Artavia Araya: «Licitando lo ilícito: reflexiones en torno a los casos CCSS-FISCHEL e ICE-Alcatel» en *Revista de Ciencias Sociales* N° 123-124, 1-6/2009, pp. 27-34.

16. Fernando Sánchez: *Partidos políticos, elecciones y lealtades partidarias en Costa Rica: erosión y cambio*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007.

Una tónica parecida se observa entre 2004 y 2006, cuando se planteó la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA, por sus siglas en inglés). Las protestas contra el CAFTA se alimentaron de los mismos grupos heterogéneos que habían participado de la oposición a la apertura de las telecomunicaciones y que evidenciaban la forma en que diferentes grupos se identificaban con el Estado y las instituciones desarrolladas antes de la reforma neoliberal: empleados públicos, ecologistas, feministas, pequeños empresarios, profesores, estudiantes, amas de casa y otros.

Esos grupos promovieron la creación de comités patrióticos como una gran novedad en la historia de los movimientos sociales del país¹⁷. Esos comités se reunían todas las semanas y promovían discusiones sobre el CAFTA. En vista de que en muchas ocasiones el bloqueo de las vías públicas se convirtió en la única forma de obligar a los representantes políticos a negociar, en 2002 se incluyó un artículo en el Código Penal para sancionar esa práctica. En 2004, un diputado del Partido Acción Ciudadana, que se oponía al CAFTA, cuestionó ese artículo y pidió sin éxito su eliminación¹⁸.

Ese clima político se amplió en 2007, cuando la institucionalidad democrática costarricense volvió a echar mano de la negociación para adelantarse a la crisis y convocó a un referéndum consultivo, por primera vez en su historia, para decidir sobre la firma del CAFTA, en un contexto de multipartidismo y de una fuerte campaña en la que participaron todos los sectores de la sociedad avalando dos posiciones: el «Sí» y el «No», en medio de una fuerte polarización. En ese referéndum, que tuvo una participación de casi 60% de los votantes, se impuso el «Sí», con 51,22%, sobre el «No», que convocó a 48,12% de los electores¹⁹. Lo más importante, empero, es que aunque la sociedad costarricense estaba profundamente dividida por la discusión sobre el CAFTA —como revelan esos porcentajes—, una vez que se anunciaron y se aceptaron los resultados del referéndum la oposición al tratado se desmovilizó. Así, las nuevas confrontaciones con el gobierno fueron básicamente gremiales y no

Las protestas contra el CAFTA se alimentaron de los mismos grupos heterogéneos que habían participado de la oposición a la apertura de las telecomunicaciones ■

17. Jeremy Rayner: «Vecinos, ciudadanos y patriotas: los Comités Patrióticos y el espacio-temporalidad de oposición al neoliberalismo en Costa Rica» en *Revista de Ciencias Sociales* vol. 121, 2008.

18. S. Mora Solano: «Acciones colectivas en la sociedad costarricense 1998-2004», cit.

19. Florisabel Rodríguez: *Costa Rica: ¿Quién decide?: elecciones, campañas y sociedad, 1994-2010*, Flacso, San José, 2013.

de unidad nacional como habían sido los movimientos contra el Combo ICE (2000) y contra el CAFTA²⁰.

De esa forma entró Costa Rica en el siglo XXI: con una discusión sin terminar sobre la reforma del Estado, con un sistema de partidos políticos más diverso (luego del fin del bipartidismo), con un profundo impacto de los escándalos

**En esta Costa Rica
coexisten legados del
reformismo desarrollista
con planteamientos del
reformismo neoliberal ■**

de corrupción política y con los efectos de la aprobación del CAFTA. En esta Costa Rica coexisten legados del reformismo desarrollista con planteamientos del reformismo neoliberal, en cuya base se ubican, al menos, dos proyectos sociopolíticos asumidos por diversos sectores sociales. La reforma del mercado laboral ha sido un punto de

disputa, con el riesgo de provocar una crisis social, en un contexto actual de desigualdad creciente, con un coeficiente de Gini de 0,52 y un índice de pobreza de 20% de la población²¹.

En ese marco, en el que la prensa más conservadora y los partidos políticos de centroderecha han cuestionado los «excesos» de los empleados públicos, se han planteado reformas laborales. Así, diez años después del referéndum, el escenario de la discusión nacional se amplió, con la constante crítica al empleo público, que representa actualmente 15% de la fuerza laboral ocupada, por parte de los sectores dominantes que denuncian los «privilegios laborales». El 27 de octubre de 2014, refiriéndose a una lucha sindical en los puertos del Caribe costarricense, el editorial del periódico *La Nación*, afín a los intereses de las elites, planteó que Costa Rica sufría de la «irresponsabilidad y avaricia de un grupo relativamente pequeño, cuyos intereses particulares se anteponen al interés público»²². El editorial añadía que el sindicato en conflicto gozaba de «abusivos beneficios laborales» y recomendaba lo siguiente: «Finalmente, esta huelga debe servir para recordar la inconveniencia de modificar el Código de Trabajo para permitir la huelga en los servicios públicos, como pretenden el Gobierno y algunos diputados. Sería un error garrafal»²³. Estos criterios, independientemente de la evidencia sobre las aseveraciones,

20. Para el análisis de algunas luchas contra la segunda administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), v. S. Mora Solano: *La política de la calle: organización y autonomía en la Costa Rica contemporánea*, EUCR, San José, 2016.

21. Ver R. Viales Hurtado: «Economy» en *Europa World Online*, Routledge, Londres, 2017.

22. «Editorial» en *La Nación*, 27/10/2014, p. 37A.

23. *Ibíd.*

hacen pensar en una especie de «rebelión de las elites»²⁴, en la que nuevos actores pretenden ganar una batalla semántica por la definición del «bien común» con un carácter altamente excluyente, con lo que pretenden romper con la teoría y la práctica del imaginario «igualitarista» que ha dado sustento a la democracia laboral costarricense. La justicia laboral aparece así como un campo de disputa, y la reforma al Código Procesal Laboral, como un mecanismo que puede contribuir a confrontar las desigualdades sociales, en un contexto de confluencia de crisis, de acuerdo con el planteo de Gudmund Hernes²⁵.

■ La(s) cuestión(es) social(es) en Costa Rica

Según Charles Tilly, el mercado laboral ha generado disparidades para convivir y, en última instancia, su conformación y su orientación son los elementos que determinan las posibilidades de inserción de las personas calificadas²⁶. Por lo tanto, el mercado laboral es una institución reguladora que puede generar empleo de calidad, a partir de la legislación sobre las relaciones laborales, los sistemas de protección contra el desempleo o la posibilidad del acuerdo directo entre trabajador y empleado, como señaló Jürgen Weller²⁷. En Costa Rica, el proceso de creación de derechos laborales ha tenido un extenso recorrido. Según Robert Castel²⁸, los trabajadores van conquistando nuevas seguridades, que permiten una mejor integración, dado que la «condición proletaria» implica la cuasi exclusión del cuerpo social, por lo que podríamos concebir la «cuestión social» como la toma de conciencia sobre el riesgo de disociación de la sociedad en su conjunto. La principal reforma social desarrollada en Costa Rica tuvo lugar entre 1940 y 1943, durante el gobierno de Calderón Guardia. Durante ese periodo, se creó una legislación social que dio lugar, entre otras cosas, a la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, la edificación de casas baratas, políticas de calzado para estudiantes escolares, fomento del sindicalismo, el decreto sobre Garantías Sociales y el Código de Trabajo. Esa reforma fue posible gracias a un pacto político entre el Partido Republicano Nacional, la Iglesia católica, el Partido Comunista y el movimiento social urbano, particularmente los sindicatos de

24. Christopher Lasch: *The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy*, W.W. Norton, Nueva York-Londres, 1995.

25. Unesco, Consejo Mundial de Ciencias Sociales: *Informe sobre las ciencias sociales en el mundo. Las brechas del conocimiento*, Unesco / Foro Consultivo, Ciudad de México, 2010, p. vi.

26. C. Tilly: *La desigualdad persistente*, Manantial, Buenos Aires, 2000.

27. J. Weller: «Retos y respuestas. Las políticas laborales y del mercado de trabajo en Costa Rica, Panamá y Uruguay», Serie Macroeconomía y Desarrollo N° 90, Cepal, Santiago de Chile, 2009, p. 8.

28. R. Castel: *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Paidós, Buenos Aires, 1997.

trabajadores²⁹. En 1947 se creó el «solidarismo», un movimiento que planteó la relación entre capital y trabajo en aras de incrementar la productividad y de mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, pero también como una opción al sindicalismo³⁰.

El análisis de la Reforma al Código Procesal Laboral (2015) en Costa Rica permite poner de relieve la participación de diversos actores sociales, organizados fundamentalmente en tres sectores: el empresarial/industrial/corporativo, el sindical y las instituciones del Estado/gobierno, para generar un proceso de concertación que, aun en un contexto de reformas neoliberales, permitió la ampliación de los derechos laborales y la actualización del Código de Trabajo de 1943, con la creación de nuevos mecanismos institucionales que entraron en vigencia en julio de 2017 y que pretenden reducir las posibilidades de crisis futuras en los derechos laborales³¹.

■ El proceso de concertación, sus actores y sus mecanismos

La reforma del Código Procesal Laboral en Costa Rica se llevó a cabo por medio de canales institucionales-democráticos; específicamente, por medio de un

**La reforma del Código
Procesal Laboral en
Costa Rica se llevó a
cabo por medio de canales
institucionales-democráticos ■**

Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral (Expediente 15.990) que el 17 de agosto de 2010 recibió un dictamen afirmativo, de carácter unánime, por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Este dictamen se logró tras un

proceso de deliberación y de concertación llevado a cabo entre 2005 y 2010, en el que intervinieron diferentes sectores sociales y actores diversos, en el contexto ya caracterizado. Por parte del sector empresarial, industrial y corporativo participaron la Cámara de Comercio, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado y la Cámara de Industrias. Del sector sindical, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, la

29. I. Molina Jiménez: *Anticomunismo reformista. Competencia electoral y cuestión social en Costa Rica (1931-1948)*, Editorial Costa Rica, San José, 2009.

30. Willy Soto Acosta: «Para entender al movimiento solidarista costarricense» en *Anuario de Estudios Centroamericanos* vol. 13 N° 1, 1987.

31. R. Viales Hurtado, David Chavarría Camacho y Roberto Araya Chinchilla: «El proceso de reforma al Código Procesal Laboral: legislación laboral, actores sociales y lenguajes de valoración. Tres elementos clave de la política socio-laboral en Costa Rica, 1998-2016» en *Memorias* N° 30, 2016.

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses, la Comisión Nacional de Comités Permanentes de Trabajadores y la Asociación Costarricense del Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. Por el sector estatal y de gobierno intervinieron los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa y representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de la Universidad de Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República. También hubo representación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esos actores concentraron la discusión de forma tal de no llevarla a otros espacios de la sociedad civil y eso hizo que, efectivamente, todos los grupos participantes se caracterizaran por ser actores institucionalizados. Estos adhieren a distintas posiciones ideológicas que van desde la de grupos empresariales conservadores hasta la de sindicalistas de centroizquierda.

Jon Elster³² dejó claro que detrás de la deliberación existe un proceso de negociación basado en la fuerza, al que se le puede dar seguimiento por medio de las propuestas presentadas y de los argumentos utilizados para defenderlas o para atacarlas, que se fundamentan en la razón, en los intereses y en las pasiones, los supuestos y las motivaciones, tanto individuales como colectivos e institucionales. Sin embargo, es importante refrendar que el momento de la deliberación puede borrar las desigualdades de poder, para favorecer el surgimiento de planteamientos que favorezcan posiciones que beneficien al conjunto de los actores³³.

Un punto de discordia en el inicio de la deliberación, esbozado por el sector empresarial, industrial y corporativo, fue la cuestión de la huelga general y su legalidad. Esta –en concordancia con lo planteado por el actor externo generador de opinión «publicada», *La Nación*– se visualizó como un peligro para la democracia, sobre todo por la suspicacia generada por la fijación de un porcentaje de convocatoria y participación para declarar un movimiento como legítimo³⁴. El acuerdo se logró con la fijación de un porcentaje de participación (35%) para que una huelga se considere legal. La concertación fue posible gracias a la mediación de la OIT, a partir de sus convenios, y a dos

32. J. Elster: «Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process» en *Duke Law Journal* vol. 45 N° 2, 1995.

33. Judith Innes y David Boomer: «Collaborative Policymaking: Governance through Dialogue» en Maarten Hajer y Hendrik Wagenaar (eds.): *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

34. V. «Reforma procesal laboral: lo bueno, lo malo y lo feo» en *La Nación*, 17/8/2014.

argumentos claves, compartidos por todos los sectores: la consolidación de la justicia laboral por medio de la superación de las debilidades del Código de Trabajo de 1943 y la posibilidad de agilizar su puesta en práctica por medio de dos mecanismos fundamentales. También jugaron un papel importante la posibilidad de realizar juicios orales, la superación de cualquier criterio de tipo discriminatorio y el establecimiento de formas de conciliación entre trabajadores y patrones previas a la huelga³⁵.

A pesar de estos acuerdos alcanzados en 2011, la presidenta Laura Chinchilla Miranda (PLN) vetó la reforma en octubre de 2012, con el argumento de que la propuesta permitiría la huelga en los servicios esenciales sin la posibilidad de contratar trabajadores sustitutos. Este veto fue levantado por el presidente Luis Guillermo Solís (Partido Acción Ciudadana) en diciembre de 2014, junto con el compromiso de prohibir la huelga en servicios esenciales. En agosto de 2015, la Sala Constitucional (Sala IV) anuló esta acción, al declarar inconstitucional el veto de Chinchilla, por lo que el proyecto retornó a la Asamblea Legislativa, donde fue aprobado en diciembre de 2015 con el apoyo de las 9 fracciones legislativas, en una votación de 44 diputados a favor y 1 en contra (la Asamblea se compone de 57 diputados), sin modificaciones sustantivas en lo relativo a la huelga en los servicios básicos.

■ El proceso continúa: la huelga del Poder Judicial de julio de 2017

Como ya señalamos, el contexto en que se discutió y aprobó la reforma procesal laboral era complicado y, por lo dicho, de crisis: dudas políticas, división por el modelo de desarrollo al que aspira el país, crecimiento del abstencionismo electoral y críticas a la clase política. Debido a la confluencia de esa crisis y a los demás proyectos de ley en análisis, se generó una coyuntura de discusión pública sobre los «abusos» en el Poder Judicial y un debate de propuestas, estudios y proyectos de ley orientados a la reforma del régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial en un contexto de crisis fiscal. En ese campo de disputa, todavía falta mucho camino por recorrer, pero el conflicto puso a prueba los alcances y los mecanismos de la Reforma Procesal Laboral: el

El conflicto en el Poder Judicial puso a prueba los alcances y los mecanismos de la Reforma Procesal Laboral ■

sión por el modelo de desarrollo al que aspira el país, crecimiento del abstencionismo electoral y críticas a la clase política. Debido a la confluencia de esa crisis y a los demás proyectos de ley en análisis, se generó una coyuntura de discusión pública sobre los «abusos» en el Poder Judicial y un debate de propuestas, estudios y proyectos de ley orientados a la reforma del régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial en un contexto de crisis fiscal. En ese campo de disputa, todavía falta mucho camino por recorrer, pero el conflicto puso a prueba los alcances y los mecanismos de la Reforma Procesal Laboral: el

35. Para una detallada revisión de la reforma, v. Mauricio Castro: *Estudio sobre la Reforma Procesal Laboral. Ley 9343*, ORR, San José, 2016.

Poder Judicial, que había sido un activo participante en el proceso de reforma, entró en huelga, con lo que suspendió servicios básicos de justicia³⁶. La huelga se mantuvo durante 13 días, y entre los servicios que se dejaron de prestar estuvo la realización de autopsias en la Morgue Judicial, por lo que la Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que fue acogido y que culminó con una medida cautelar para que aquella reanudara sus funciones sin afectar a los familiares de los fallecidos. El 27 de julio, dos días después de entrar en vigencia la reforma, la Corte Plena decidió activar el protocolo para declarar la huelga ilegal. Según la reforma laboral, esa potestad está depositada en los Juzgados de Trabajo, pero todos esos juzgados también estaban en huelga. La solicitud debe ser tramitada por medio de la Procuraduría General de la República. El acuerdo para solicitar la ilegalidad de la huelga tuvo el respaldo de 14 de los 22 magistrados; solo se abstuvieron los de la Sala Constitucional³⁷.

Esta situación generó un profundo debate en el que algunos actores llegaron a plantear que se estaba rompiendo el orden constitucional. 27 días después de la solicitud, la huelga fue declarada ilegal por el Juzgado de Trabajo de Pococí, en la provincia de Limón, el único que estaba en funciones en ese momento y que tiene la particularidad de ser unipersonal. En ese entonces estaba a cargo de la jueza Yocelin Quesada Porras, quien consideró «que la administración de la justicia por parte del Poder Judicial constituye un servicio esencial que no puede sumarse a movimientos de huelga»³⁸. El Frente Gremial de organizaciones del Poder Judicial, que reúne a 25 asociaciones laborales, cuestionó el fallo y señaló que la declaratoria de nulidad «es prematura y está viciada de nulidad por vicios de procedimiento durante la notificación de las partes. [La notificación] se emitió pese a que aún está vigente el plazo de contestación que la ley otorga a todas las agrupaciones del Frente que participaron en el movimiento laboral». Según los sindicalistas, 2 de sus 25 gremios no habían sido notificados durante el proceso, y por eso este era nulo³⁹.

■ Conclusión

El estilo de democratización en Costa Rica es de larga data. En la coyuntura crítica actual, con un alto riesgo de crisis fiscal, es importante tener presente

36. «Empleados del Poder Judicial suspenden huelga de 13 días» en *El País*, 31/7/2017.

37. Gustavo Fallas: «Corte busca algún juzgado laboral abierto para declarar ilegal la huelga» en *La Nación*, 27/7/2017.

38. Luis Manuel Madrigal: «Jueza declara 'ilegal' la huelga del Poder Judicial» en *El Mundo*, 24/8/2017.

39. Gustavo Fallas: «Juzgado de trabajo declara ilegal huelga en el Poder Judicial» en *La Nación*, 24/8/2017.

la confluencia de crisis. En el caso particular de este artículo, se visibilizó la crisis de la relación entre justicia y mercado laboral. La segunda mitad del siglo xx permitió la ampliación de los derechos laborales, con limitaciones que fueron subsanadas mediante la reforma del Código Procesal Laboral, que también creó nuevas limitaciones para su aplicación.

Lo importante es que la situación de «país dividido» fue superada, al menos en esta materia, por la deliberación y la concertación democráticas, que han constituido mecanismos sociohistóricos para consolidar el estilo de cohesión social contemporáneo en Costa Rica. Este proceso involucró a actores diversos, individuales, colectivos e institucionales, cuya interacción giró en torno de los derechos laborales. A pesar de la existencia de criterios encontrados y del papel que jugó un sector ajeno a la negociación –el de la opinión «publicada» en contra de la reforma–, esto condujo al fundamento de una posible oportunidad para buscar un nuevo pacto social multclasista en el país, que podría ampliar todavía más la institucionalidad democrática de la segunda mitad del siglo xx, para proyectar estos mecanismos de concertación hacia la solución de otras crisis, inclusive en otras latitudes.

La reforma del Código Procesal Laboral forma parte del largo proceso de construcción de la legislación sobre el trabajo en Costa Rica. En ese sentido, esa reforma constituye el cambio más importante desde la implementación del Código de Trabajo en 1943. La reforma vino a replantear las relaciones laborales y eso ocurrió en el contexto de una Costa Rica que se debatía entre dos modelos: uno que privilegiaba el Estado amplio y de protección social que había prevalecido antes de la década de 1980, y otro que desarrolló importantes reformas del Estado y sus instituciones desde 1982, pero que no logró imponer completamente la llamada reforma neoliberal.

El contexto también era particular porque era heredero de las movilizaciones sociales que se habían desarrollado desde 2000 contra parte de esa reforma neoliberal. Así, la reforma del Código era muy importante porque significaba un momento en el que podía vencer la visión neoliberal sobre el trabajo o se podían imponer los objetivos del movimiento laboral. La reforma que triunfó fue la segunda. Y eso ocurrió así justamente porque en 2014 el Partido Acción Ciudadana había ganado, por primera vez y ampliamente, las elecciones nacionales, y la reforma formaba parte de su pensamiento reformista. Así, la reforma fue, otra vez, el resultado de una historia nacional que pone énfasis en las continuidades más que en las rupturas y que insiste en los pactos que privilegian la ampliación democrática del país.

Retomando la pregunta con la que abre este artículo, planteamos que la sociedad costarricense ha desarrollado un estilo de política de resolución de conflictos que privilegia la negociación cerrada e institucionalizada e intenta sostener las reformas en un nivel que no rebase esos marcos institucionales. Históricamente, las principales crisis políticas de la Costa Rica del siglo xx fueron aquellas en las que las negociaciones se apartaron de la institucionalidad y la tradición y se resolvieron en las calles: la lucha contra la dictadura de los hermanos Tinoco (1917-1919), la Guerra Civil de 1948 y la lucha contra el Combo ICE en 2000, por ejemplo. Los intentos de adelantarse a las crisis han sido importantes, porque han creado legislación laboral que ha permitido una democratización sostenida de la sociedad costarricense.

El intento fundamental detrás de esa legislación es evitar los radicalismos hacia la izquierda y hacia la derecha, sosteniendo una cultura política que, aunque conservadora, tiene una conciencia de la importancia del Estado y ha logrado defender sus principales logros históricos. No obstante, la coyuntura neoliberal que se inició en la década de 1980 y se trató de profundizar en las décadas de 1990 y de 2000 creó nuevas tensiones y llevó al país a espacios de confrontación que, aunque se superaron a partir de la institucionalidad, han generado cuestionamientos de los derechos históricos de los trabajadores. En un marco contextual que privilegia el individualismo, esos derechos son conceptuados por la prensa y los políticos conservadores como «privilegios» excesivos que deben ser suprimidos. La Reforma Procesal Laboral, como parte de esa historia de adelantamiento a las crisis, podría funcionar como un antídoto a ese pensamiento, pero la huelga en el Poder Judicial ha dejado claro que el asunto es más complejo. Lo interesante de los próximos años es que pondrán en evidencia el papel de la reforma y sus límites. ☐

«No somos hijos de la democracia, sino nietos de la dictadura»

El movimiento estudiantil chileno en 2011 y después

NICOLE SCHWABE

Las protestas estudiantiles de 2011 en Chile pusieron en cuestión, mediante su crítica a un sistema educativo basado en el lucro, uno de los pilares de la herencia de la dictadura. También pusieron de manifiesto un recambio generacional que se desbordó a la política y fue el semillero de una nueva izquierda. Una de sus expresiones es el Frente Amplio, una coalición de partidos que rejuvenecieron la política chilena y que tuvo en las últimas elecciones un notable desempeño electoral. Esta nueva fuerza está encabezada por ex-dirigentes estudiantiles y plantea construir un país más justo y solidario en el cual el Estado de derecho sea una fortaleza.

Seis años después del hito de las movilizaciones estudiantiles en Chile, «el 2011» se ha vuelto una marca emblemática en la historia chilena reciente. Pero ¿qué queda hoy, además del bonito recuerdo? En una entrevista de 2012, Ernesto Laclau llega a las siguientes conclusiones sobre la coyuntura política chilena: «El movimiento estudiantil y la demanda por educación pueden pasar a ser un punto nodal en el que empiezan a concentrarse otras demandas sociales que no tienen una forma de representación visible en el aparato institucional del país»¹.

Nicole Schwabe: fue coordinadora del programa sobre Cambio Climático de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur en Santiago de Chile y actualmente trabaja en el proyecto del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) «Las Américas como Espacio de Entrelazamientos» del Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld. Correo electrónico: <nicole.schwabe@uni-bielefeld.de>.

Palabras claves: alternativa política, contrahegemonía, educación, movimiento estudiantil, Frente Amplio, Chile.

1. Hernán Cuevas y Juan Pablo Paredes: «Democracia, hegemonía y nuevos proyectos en América Latina. Una entrevista con Ernesto Laclau» en *Polis* N° 11, 2012, p. 3.

Este artículo intenta entender una lógica política que nace a partir de una fisura en el orden social y se concentra en el conflicto entre un bloque en el poder y una parte de la sociedad civil que dirige su atención a la vinculación de demandas sociales de carácter diverso². Se apunta a observar de qué manera se logra superar la discusión sobre la educación como demanda particular para instalar un debate sobre los fundamentos del proyecto político hegemónico.

Este artículo se basa en una investigación realizada en 2015³. En ella, se analiza el discurso del movimiento estudiantil chileno utilizando como marco algunas ideas de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau⁴. Se entrevistó a dirigentes y ex-dirigentes estudiantiles, además de consultar documentos estratégicos de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH)⁵. En las entrevistas, los movilizados recapitularon el pasado del movimiento, sus desafíos y las proyecciones para el futuro. A través de la autorreflexividad del movimiento social es posible capturar tanto la crisis que visibiliza como las propuestas que ofrece para afrontarla.

Los entrevistados representan diferentes tendencias dentro del movimiento estudiantil. El análisis se concentra en los sectores organizados del movimiento que no tienen relaciones directas con los partidos tradicionales, pero que tienen una presencia destacada en las federaciones de estudiantes. Justamente de estos colectivos estudiantiles emergieron los nuevos movimientos y partidos políticos que resultaron fundamentales para la formación del Frente Amplio (Revolución Democrática, Movimiento Autonomista, Izquierda Autónoma, Nueva Democracia e Izquierda Libertaria). En este marco, se propone retomar los resultados de ese trabajo de campo como un aporte para la discusión sobre la coyuntura política actual y para reevaluar sobre la base de los acontecimientos recientes la pregunta por los logros y las limitaciones del movimiento estudiantil en la construcción de un proyecto político alternativo.

2. Mirko Petersen: «Dangerous Excess? Rethinking Populism in the Americas» en *Forum for Inter-American Research* vol. 7 N° 3, 11/2014, p. 131.

3. Una parte de los resultados fueron publicados en N. Schwabe: «El movimiento estudiantil chileno: ¿hacia dónde va la rebeldía de los nietos de la dictadura?» en Christian Pfeiffer, Enrique Fernández Darraz y Björn Kluger (eds.): *Bildung in Chile: Beiträge zu einer binationalen Kooperation*, Rostocker Informationen zu Politik und Verwaltung, Universität Rostock, Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften, Rostock, 2017.

4. E. Laclau y C. Mouffe: *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*, Siglo XXI, Madrid, 1987; E. Laclau: *La razón populista*, FCE, Buenos Aires, 2005.

5. V. CONFECH: «Principios fundamentales para una Nueva Educación Pública», disponible en <www.quechiledecida.cl>, 2015.

■ El conflicto por la educación: una herencia de la dictadura

Con la demanda central de una educación pública, gratuita y de calidad, el movimiento estudiantil tomó una posición antagónica frente al sistema de educación existente, o expresándolo en las palabras del propio movimiento, frente a la «educación de Pinochet». En efecto, el grito «¡Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinochet!»⁶ es uno de los lemas más frecuentes de las movilizaciones estudiantiles. Es una forma de conmemorar y de hacer visible la transformación profunda del ámbito educativo después del golpe militar de 1973. Así los jóvenes destaparon, más de 20 años después del comienzo de la transición, la crisis del sistema educativo.

Lo que se propone en estas líneas es leer el movimiento estudiantil como respuesta retrasada a las reformas estructurales realizadas en el contexto autoritario de la dictadura, posibilitadas por la represión de la oposición, la negación del debate público y un proceso de despolitización de la población como elementos fundamentales para implementar y consolidar un proyecto neoliberal en Chile. Laclau describe estos procesos como dos experiencias traumáticas e interrelacionadas: «Nuestros países han heredado dos experiencias traumáticas e interrelacionadas: las dictaduras militares y la virtual destrucción de las economías del continente por el neoliberalismo (...). Digo que están interrelacionadas porque, sin dictaduras militares, habrían sido imposibles políticas tales como las reformas de los *Chicago boys* en Chile»⁷.

La dictadura –que en 1973 aplastó violentamente la llamada vía chilena al socialismo– reconoció la educación pública como la cuna del pensamiento crítico y dirigió la represión contra ella. Numerosos profesores y estudiantes fueron víctimas de la violencia del Estado⁸. Autoridades surgidas de elecciones fueron reemplazadas por militares y las estructuras democráticas internas de las universidades, destruidas. Mientras que en esta primera fase, que Tomás

6. V., entre muchos otros ejemplos, Christian Palma: «Chile: 'Y va a caer y va a caer... la educación de Pinochet'» en *La pupila insomne*, 2/7/2011.

7. E. Laclau: «La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana» en *Nueva Sociedad* N° 205, 9-10/2006, pp. 58-59, disponible en <www.nuso.org>.

8. Fernando Codoceo: *Demokratische Transition in Chile. Kontinuität oder Neubeginn?*, wvb, Berlín, 2007, p. 72.

Moulian caracteriza como «terrorista»⁹, no existía una estrategia congruente sobre los objetivos de la invasión del sistema educativo. Fue a partir de los años 80 cuando se realizó una reestructuración profunda, que formó parte de un paquete completo de privatización del país¹⁰. En el documento *Principios fundamentales para una Nueva Educación Pública*, la CONFECH resume su crítica de este proceso: «Sin duda, desde la dictadura militar, la educación pública ha vivido un proceso de precarización y abandono por parte del Estado, sobreviviendo, tensionada constantemente por la arremetida del mercado en educación, los intereses privados y el predominio tecnocrático»¹¹.

¿Cómo se ha desarrollado lo que los estudiantes llaman proceso de precarización y abandono de la educación pública? A través de la Constitución de 1980 –legitimada con un plebiscito manipulado–, la dictadura instaló un fundamento político-institucional que tiene vigencia hasta hoy en día: el principio de la subsidiariedad de la educación. Y siguiendo esta lógica, la responsabilidad del Estado en el ámbito educativo fue reemplazada por el principio de la «libertad de la enseñanza»¹². Es decir, en lugar de desarrollar y controlar los establecimientos educativos, el Estado redujo su función a la entrega de fondos y a dar apoyo donde la iniciativa privada no era suficiente. De esta manera se aplican lógicas del mercado en el ámbito educativo¹³.

La CEFECH denuncia que el abandono estatal de la educación favorece el crecimiento de la desigualdad social en Chile, donde las familias se endeudan para pagar un buen colegio y las carreras universitarias de sus hijos, siguiendo una lógica parecida a la habitual en Estados Unidos. Además, desde el movimiento estudiantil se señala que el abandono se verifica tanto en la calidad de la educación como en las condiciones laborales de los educadores¹⁴. El Estado garantizó el derecho de los «consumidores» de elegir libremente el establecimiento educativo y el derecho de actores privados de abrir establecimientos educativos subsidiados por el Estado, lo cual está incluido en la Constitución¹⁵. Con la Ley General de Universidades (DFL-1) (1981) se facilitó,

9. T. Moulian: *Chile actual. Anatomía de un mito*, Lom, Santiago de Chile, 1997.

10. Rodrigo Fernández, Andrés Alencon, Ignacio Cassorla, Camilo Araneda y José Miguel Sanhueza: *El poder económico y social de la Educación Superior en Chile*, CEFECH, Santiago de Chile, 2014, p. 17.

11. CEFECH: «Principios fundamentales para una Nueva Educación Pública», 2015.

12. Mario Waissbluth: *Se acabó el recreo. La desigualdad en la educación*, Random House Mondadori, Santiago de Chile, 2010, pp. 99-101.

13. R. Fernández, A. Alencon, I. Cassorla, C. Araneda y J.M. Sanhueza: ob. cit., p. 19.

14. CEFECH: ob. cit.

15. F. Codoceo: ob. cit., p. 76.

además, el proceso de fundación de establecimientos educativos por parte de actores privados¹⁶.

Además, el presupuesto para la educación se redujo en 27% entre 1982 y 1990¹⁷. Con la Ley de Financiamiento de las instituciones de educación superior (DFL-4), se disminuyó el financiamiento directo a la mitad y se reemplazó por un financiamiento condicionado que obligó a las universidades a entrar en una competencia por los fondos públicos. De esta manera, la calidad de la educación se dejó en manos del mercado y se confió en una autorregulación del sistema¹⁸. Mediante la reintroducción de una matrícula para estudios universitarios –tanto en establecimientos públicos como privados–, los costos de la educación fueron trasladados a las familias.

En los niveles primario y secundario los recortes del financiamiento, sobre todo en los establecimientos públicos, llevaron a un incremento de la segregación en el ámbito educativo, mientras que las instituciones privadas suplieron la falta de financiamiento con cuotas escolares. Mediante la idea meritocrática de que la educación permitía el ascenso social, se legitimaron las desigualdades sociales existentes¹⁹. Desde el punto de vista cuantitativo, se

**La crítica al lucro
constituye un elemento
central del discurso del
movimiento estudiantil ■**

puede observar un crecimiento de la cobertura educacional en los años 80 y 90, pero este crecimiento operó a través del ingreso de una cantidad de actores privados que encontraron un nicho rentable. Y al final, los estudiantes y sus familias se endeudan para acceder a una «incierta» vida mejor. Hoy, la

crítica al lucro que fue permitido y legitimado por el Estado constituye un elemento central del discurso del movimiento estudiantil.

Si bien en el discurso de este movimiento la dictadura se identifica como un elemento central, la crítica profunda se genera hacia los gobiernos de la llamada Transición, que permitieron la consolidación de un modelo desigual que ellos quieren transformar²⁰. El abandono de la educación pública por parte del Estado puede ser resumido bajo el concepto de «comodificación» de la

16. R. Fernández, A. Alencon, I. Cassorla, C. Araneda y J.M. Sanhueza: ob. cit., p. 19.

17. M. Waissbluth: ob. cit., p. 103.

18. R. Fernández, A. Alencon, I. Cassorla, C. Araneda y J.M. Sanhueza: ob. cit., pp. 19 y 21.

19. Francisco Figueroa y Gabriel Boric: «La fuerza democrática de la lucha estudiantil» en *Anales de la Universidad de Chile* N° 7, 11/2014, pp. 40-41.

20. Lucía Miranda: *Protestar es de buena educación. Orgánica, demandas e ideologías del movimiento estudiantil chileno*, Flacso-Chile, Santiago de Chile, 2016.

educación: un proceso en el cual la educación como institución social pasa a estructurarse en términos de producción, distribución y consumo de mercancías²¹. El movimiento estudiantil ha sido un catalizador para la emergencia de debates sobre este fundamento político naturalizado y permite destacar los conflictos abiertos en la actual sociedad chilena. Mediante el lema «Aún vivimos en dictadura», el movimiento apunta a una dicotomización del espacio social, al identificar a los partidos tradicionales como adversarios culpables de continuar con el legado de la dictadura y a sí mismos como fuerza de cambio.

■ La (re)construcción del movimiento estudiantil

Parte de la fortaleza del movimiento estudiantil en 2011 residió en la unidad de estudiantes secundarios y universitarios y en el enorme apoyo proyectado desde la sociedad civil. A pesar de ser el movimiento social más grande desde el regreso a la democracia, no representa la primera movilización estudiantil. Por el contrario, las manifestaciones de 2011 son la cúspide de un proceso de (re)construcción del movimiento estudiantil desde principios de los años 2000 que está marcado por un cambio generacional. Se trata de jóvenes que nacieron en la época de la transición a la democracia y que creen que la democracia chilena tiene considerables déficits, lo cual se refleja en su autodefinición: «No somos hijos de la democracia, sino nietos de la dictadura». Los jóvenes se sienten unidos por un malestar compartido y gran parte de la sociedad se suma a las protestas porque se identifica con sus críticas.

El movimiento estudiantil ha sido históricamente un actor político clave en Chile. Incluso se podrían discutir las continuidades entre el movimiento estudiantil del siglo xx y las actuales movilizaciones estudiantiles. El historiador Luis Thielemann subraya, por ejemplo, las continuidades entre el movimiento estudiantil actual y las movilizaciones en contra de la dictadura²².

El golpe militar de 1973 no solo puso fin al gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), sino que destruyó estructuras de organización colectiva a lo largo del país. A pesar de sufrir fuertes represiones en los espacios universitarios, los estudiantes aparecen como un actor clave en las jornadas de protesta en

21. Roberto Lehrer: «Estrategias de mercantilización de la educación y tiempos desiguales de los tratados de libre comercio: el caso de Brasil» en *Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina*, Clacso / Homosapiens, Buenos Aires, 2009.

22. L. Thielemann: «Para una periodificación del Movimiento Estudiantil de la transición», *Sistematización de Talleres Para la Acción Estudiantil*, HBS Cono Sur / CEFEC, Santiago de Chile, 2013, p. 35.

contra de la dictadura en los años 80. Esta etapa (1987-1997)²³ marca la reconstrucción de un nuevo movimiento estudiantil, que se mantiene en una posición crítica frente a la transición pactada y que a partir de principios de los años 2000 articula una crítica antineoliberal²⁴.

En las entrevistas realizadas con diferentes dirigentes estudiantiles se manifiesta que los jóvenes que participaron en las movilizaciones de 2011 se sienten parte de una tradición vinculada a movilizaciones estudiantiles anteriores. La cercanía se explica a través de un adversario en común: la dictadura militar y su herencia en el sistema educativo. El movimiento se caracteriza por un rechazo de la transición pactada que se materializó en la continuidad del modelo neoliberal instalado por el pinochetismo. Los jóvenes postulan que la democracia no ha logrado revertir los cambios estructurales emprendidos por la dictadura y que, si bien en efecto se enfrentan con un gobierno democráticamente elegido, el sistema político está marcado por una herencia autoritaria. De esta crítica resulta un profundo rechazo a los actores políticos de la Transición.

Valentina Saveedra, presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile en 2015, llega a la siguiente conclusión sobre el gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia (de centroizquierda) que gobernó el país desde 1990 hasta 2010, cuando Sebastián Piñera triunfó por primera vez: «Durante 20 años se pudo gobernar, mantener la gobernabilidad, bajo la promesa de la movilidad social, la alegría, la democracia. Y en la década del 2010 en adelante uno empieza a comprender que esas promesas no se están cumpliendo, que no hay democracia, no hay derecho, y claramente no hay alegría social»²⁵.

Durante los años 90 las movilizaciones estudiantiles demandaron una democratización interna de los establecimientos educativos y criticaban tanto los enclaves de la dictadura como la falta de financiamiento público para la educación. En la primera década del siglo *xxi*, los estudiantes comenzaron a levantar la voz para formular una crítica radical de la privatización. En el contexto del llamado «mochilazo» (movilizaciones de estudiantes secundarios en 2001), se observa un cambio en la estructura organizativa del movimiento. Disminuye la influencia de los partidos tradicionales en las federaciones estudiantiles

23. Para un análisis más profundo de esa etapa, v. Jorge Rojas Hernández: «La sociedad chilena posdictatorial. Entre la modernización y el imaginario democrático» en *Nueva Sociedad* N° 165, 1-2/2000, disponible en <www.nuso.org>.

24. L. Thielemann: ob. cit., pp. 36-38.

25. Entrevista de la autora, 2015.

y aumentan las instancias de participación directa²⁶. En este tiempo se funda, por ejemplo, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), una organización de estudiantes secundarios con principios de democracia directa. La ACES asume –junto con la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES)– un importante rol en las movilizaciones.

Para la historiadora Leonora Reyes Jedlicki, las protestas de 2001 y la reflexión posterior sobre su propio actuar son un proceso de aprendizaje que se expresaría más tarde en la «revolución pingüina» de 2006²⁷. Las protestas de ese año comenzaron con una crítica a la situación en los colegios –falta de infraestructura, mala calidad de la educación secundaria–, pero exigieron además la desmunicipalización de la educación y terminaron demandando la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada en tiempos de la dictadura²⁸.

Después de dos meses de movilizaciones con un apoyo masivo de la sociedad civil, el gobierno de la presidenta Michele Bachelet se comprometió a llevar a cabo una reforma de la Ley de Enseñanza. Los resultados de esta promesa resultaron decepcionantes para las organizaciones estudiantiles, que los critican por ser «meramente cosméticos»²⁹. Estos antecedentes son importantes porque una gran parte de los que se movilaron en 2011 participaron como estudiantes secundarios en la «revolución pingüina». Los puntos de contacto pueden verse también en las demandas de las distintas fases de movilización³⁰.

**Una gran parte de los
que se movilaron en 2011
participaron como
estudiantes secundarios en
la «revolución pingüina» ■**

No cabe duda de que las decepciones que vivieron los jóvenes con el gobierno de la Concertación fueron leídas como una imposibilidad de crear un nuevo proyecto político en ese marco. Para 2013, la Concertación suma a otros partidos políticos y cambia su nombre a Nueva Mayoría; sin embargo, sigue siendo un blanco de los movilizadores. A pesar de que la Nueva Mayoría volvió al poder en 2013 con una campaña que recogió las demandas del movimiento

26. F. Figueroa y G. Boric: ob. cit., p. 40.

27. L. Reyes Jedlicki: *La escuela en nuestras manos*, Quimantú, Santiago de Chile, 2014, pp. 21-22.

28. *Ibid.*, p. 41.

29. Pia Koch: «¡Y va a caer! Gegen das neoliberale (Bildungs-)System. Chiles Studierendenbewegung 2011-2012», serie Aktion & Reflexion N° 9, Paulo Freire Zentrum, Viena, 2013, p. 34.

30. L. Miranda: ob. cit., p. 41.

estudiantil, en el marco de una deslegitimación del gobierno de Piñera y de la presencia de figuras como Camila Vallejo, la coalición no logró incorporar a la nueva generación que se politizó en las movilizaciones estudiantiles. Más bien se verificó un profundo rechazo a la apropiación de las demandas que levantó el movimiento estudiantil, una estrategia frecuente de los bloques en el poder para debilitar los movimientos sociales y frenar un cambio político.

■ Respuestas frente a la crisis

A pesar de que nunca se ha llegado nuevamente a la masividad del movimiento de 2011, el sector estudiantil sigue movilizado y en muchas universidades y colegios se ha logrado ampliar las instancias de la democracia estudiantil. Pero además de este logro de (re)constituir el movimiento estudiantil como un actor político clave, es importante ampliar la mirada y analizar las repercusiones que han tenido las movilizaciones en la sociedad chilena.

En primer lugar, podemos constatar que los estudiantes han instalado un debate a gran escala sobre el lucro y la desigualdad en la educación. De esta manera, pudieron visibilizar un conflicto estructural. Con la demanda de entenderla como derecho social, se ha planteado que la educación no es un bien individual, sino una responsabilidad colectiva dentro de una sociedad, independientemente del estado jurídico de los establecimientos³¹. Así, se creó una

**Se ha planteado
que la educación no es
un bien individual, sino
una responsabilidad
colectiva dentro
de una sociedad ■**

conciencia sobre un malestar generalizado. El endeudamiento, el descontento sobre la calidad y las lógicas mercantiles del sistema educativo ya no son problemas individuales.

En el balance que hacen los entrevistados en 2015 sobre su propio movimiento se explica el masivo apoyo hacia las demandas del movimiento estudiantil en la sociedad por el potencial que tiene la demanda por la educación de «representar» diferentes problemas de la sociedad civil. Francisco Figueroa, dirigente del movimiento, habla de «la capacidad que tuvo el movimiento estudiantil de poner el dedo en la llaga, para decir que el problema es la mercantilización de lo que deberían ser derechos»³².

31. Fernando Atria y Claudia Sanhueza: «Propuesta de gratuidad para la educación superior chilena», Clave de Políticas Públicas N° 17, Instituto de Políticas Públicas, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 11/2013.

32. Entrevista con Francisco Figueroa, 2015.

En resumen, el debate sobre el lucro y la desigualdad social en la educación funcionó como motor de un malestar compartido, politizó a una generación y repolitizó un país que ha sido víctima de una despolitización creciente desde el retorno de la democracia. El movimiento estudiantil es a la vez indicador y catalizador de un descontento generalizado entre la población, que no se limita a los problemas del sistema educativo. No es una reacción inmediata a un cambio político, sino una rebeldía de una nueva generación que visibiliza la crisis democrática en la cual se encuentra su país. La crisis de legitimidad de los partidos tradicionales que vemos reflejada en la baja participación electoral, en combinación con la acumulación de demandas sociales incumplidas, formó una estructura de oportunidades políticas que potenciaron la capacidad movilizadora del movimiento estudiantil. Por otro lado, quedan en evidencia los límites de este para la articulación de un proyecto político alternativo. A pesar de identificar una fisura en el orden hegemónico, Francisco Figueroa subraya la importancia de vincularse con otros actores de la sociedad civil para avanzar hacia un Chile distinto:

Yo creo que hoy día estamos en un momento que es súper clave. Lo que logró el movimiento estudiantil del 2011 efectivamente fue una fractura en la hegemonía del momento. Pero no fue más que una fractura, digamos, o sea no fue capaz ni de invertir los términos ni poder construir una hegemonía distinta que finalmente pudiese imponerse. Y eso ciertamente no se hace porque los estudiantes solos no lo hacen nunca. Eso es obvio.³³

La «fractura en la hegemonía» en 2011 potenció otros movimientos sociales, como se puede ver en la capacidad movilizadora del movimiento feminista, que irrumpe con fuerza en espacios universitarios y escuelas secundarias, así como también en la visibilización de la violencia machista en relación con la campaña internacional «Ni una menos». Otro ejemplo es la demanda «NO + AFP» por un sistema público y solidario de jubilaciones, que logra sacar más de dos millones de personas a la calle a finales de 2016. Pero las múltiples movilizaciones sociales llegan a un techo y se enfrentan con un sistema político que se niega a un verdadero diálogo con la sociedad civil.

En este contexto, la mayoría de los estudiantes de la «revolución pingüina» o de 2011 egresan de las universidades. Con ellos crecieron sus organizaciones y partidos y se siguen movilizando, pero ya no desde el sector estudiantil, sino desde otros espacios de la sociedad civil, y forman parte de las distintas

33. Entrevista de la autora, 2015.

movilizaciones sociales nombradas. En los nuevos movimientos políticos a los cuales pertenecen los entrevistados se ha procesado un debate sobre la necesidad de construir una fuerza política que permita un cambio social y que no se limite a demandas particulares. Como producto de las reflexiones sobre las limitaciones del movimiento social y los desafíos futuros, nació el Frente Amplio (FA), considerado una herramienta político-electoral para tratar de articular las crecientes demandas sociales. Un elemento central del discurso de la nueva coalición es el concepto globalizante de «derechos sociales», que unifica las distintas demandas y actúa como un paraguas de significación. La reintroducción de esta idea en el debate público es considerada como uno de los grandes logros del movimiento estudiantil³⁴.

Además de los llamados movimientos y partidos «emergentes» que nacieron del sector estudiantil, se incorporaron al FA otros partidos y organizaciones que no tienen una conexión directa con el movimiento estudiantil. La nueva coalición intenta –según su propio programa– «hacer converger, en su diversidad, todos los esfuerzos y las voluntades que permitan cambiar democráticamente las estructuras desiguales de poder en Chile»³⁵. Las primeras conversaciones se llevaron a cabo a principios de 2016 y lentamente se unieron más actores, entre ellos el sociólogo Alberto Mayol y la periodista Beatriz Sánchez, que se pusieron a disposición de ser candidatos para las primarias presidenciales legales de julio de 2017, en las que se impuso Sánchez. Desde principios de 2017 se ha asistido a un crecimiento acelerado de la nueva coalición.

La inscripción para las primarias legales supervisadas por el Servicio Electoral ha sido uno de los grandes pasos para establecerse como actor en el escenario político electoral, dado que implicó un esfuerzo transversal importante por reunir 35.000 firmas para la inscripción legal del partido Revolución Democrática, que actúa como su instrumento para las elecciones.

Pero el salto de los movimientos sociales a la política institucional no es fácil, y menos lo es la construcción de una tendencia política tan heterogénea. El marco de la política parlamentaria obliga a adaptar las propias estructuras a las reglas institucionales, lo cual ha generado diversas tensiones internas. El movimiento estudiantil siempre se ha perfilado como adversario de la clase

34. L. Miranda: ob. cit., p. 56.

35. FA: «Te invitamos a construir Frente Amplio», disponible en <www.frente-amplio.cl/te-invitamos-construir-frente-amplio>, 2017.

gobernante y la política representativa³⁶. Llevar la idea de una «renovación de la política» a prácticas concretas, en el marco del sistema político, es uno de los desafíos del FA, y no el menor.

A pesar de estas dificultades, los resultados del FA en las elecciones presidenciales del 19 de noviembre de 2017 superaron los pronósticos más optimistas. La candidata presidencial Beatriz Sánchez obtuvo 20,27% de los votos. Adicionalmente, el FA logró una bancada de 20 diputados que ingresarán en marzo de 2018 al Congreso Nacional, un senador y 19 consejeros regionales. Con este resultado, la nueva coalición quedó pocos votos detrás del candidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, quien pasó a la segunda vuelta con 22,7% para competir con el ex-presidente Piñera. Este finalmente se impuso el 17 de diciembre con casi 55% y 9 puntos de diferencia sobre Guillier.

«El tablero político cambió, ahora van a tener que conversar con nosotros»³⁷, resume el vocero del FA, Lucas Cifuentes, en referencia a la falta de mayorías en el nuevo Congreso. No obstante, la consolidación del FA nos indica un alto grado de madurez de un proyecto político alternativo surgido como respuesta desde la sociedad civil e implica una redefinición del escenario político posdictatorial. Queda por ver hacia dónde se mueve el escenario político chileno con los impulsos de cambio de los emergentes movimientos sociales y con una tercera coalición en el Parlamento que tiene el objetivo de realizar reformas estructurales para construir un Chile más justo y solidario. Pero al mismo tiempo, con la vuelta de la derecha al poder. ▣

36. L. Miranda: ob. cit., p. 43.

37. «Vocero del Frente Amplio: El tablero político cambió, ahora van a tener que conversar con nosotros» en *El Desconcierto*, 19/11/2017.

La crisis urbana brasileña y sus soluciones «desde abajo»

Brasil enfrenta un significativo déficit habitacional. En la actualidad, millones de personas viven en condiciones inadecuadas y enfrentan dificultades por falta de acceso a una vivienda. Sin embargo, muchos de quienes sufren estos problemas buscan y encuentran respuestas gestionadas «desde abajo» frente a las políticas excluyentes, mediante la ocupación de edificios abandonados en zonas céntricas. El ejemplo de una vivienda ocupada en Río de Janeiro sirve para analizar qué motivación tienen sus ocupantes para participar activamente en protestas sociales, y también para observar los efectos más amplios de su lucha en las políticas urbanas, así como en el desarrollo personal.

BEA WITTGER

*No quiero transformar el mundo, porque no tengo ese poder.
Pero puedo transformar lo que está a mi alrededor, cerca de mí.*

Habitante de una vivienda ocupada en Río de Janeiro, 2011

■ Introducción a la crisis urbana

De acuerdo con un informe reciente sobre desarrollo urbano, una proyección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que para 2030 aproximadamente 60% de la población mundial vivirá en ciudades¹. En América

Bea Wittger: doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de Colonia. Su área de investigación abarca género, interseccionalidad, ciudadanía, movimientos sociales e historia urbana, con un énfasis especial en Brasil. Fue directora general de la Red de Investigación para América Latina: Etnicidad, Ciudadanía y Pertenencia entre 2014 y 2017. Correo electrónico: <bea.wittger@uni-koeln.de>.

Palabras claves: exclusión, favelas, movimientos sociales, neoliberalismo, vivienda, Brasil.

Nota: traducción del inglés de María Alejandra Cucchi.

1. ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División Población: «The World's Cities in 2016: Data Booklet», ST/ESA/SER.A/392, 2016, p. ii.

Latina, 80% de la población ya habita en áreas urbanas, lo que convierte esta región en la más urbanizada del planeta. Pero el rápido crecimiento de las ciudades latinoamericanas desde comienzos del siglo xx ha ido aparejado con la ausencia de una política adecuada de urbanización y planeamiento². Desde muy temprano, en las ciudades brasileñas esta carencia de soluciones adecuadas tuvo expresión visible en el surgimiento y la expansión de las favelas³ y de otras formas de asentamiento informal. La población de bajos recursos se ha visto especialmente afectada por la falta de acceso a viviendas asequibles y por el acceso desigual a bienes y servicios públicos. Según ONU-Hábitat, más de 50 millones de personas viven hoy en Brasil en condiciones inadecuadas y el país enfrenta un déficit habitacional de entre seis y ocho millones de viviendas, en su mayoría concentrado en familias cuyos ingresos son inferiores a 1.000 dólares mensuales⁴.

La crisis urbana en Brasil es real y la situación política en 2017 no parece mostrar signos de mejora. Tras el impeachment de Dilma Rousseff en 2016, asumió la Presidencia el vicepresidente ultraconservador Michel Temer. Además de la cuestionable legalidad de su acceso al poder, su gobierno representa un giro significativo hacia la derecha. De su mano, la política neoliberal encontró el camino de regreso a los primeros puestos de la agenda política y esto influye en la política y el desarrollo urbano. En consecuencia, al ritmo de la dinámica global de la política urbana neoliberal, la históricamente arraigada exclusión y el desplazamiento de la población de bajos ingresos de las áreas centrales y prósperas de la ciudad continúan y se refuerzan. Los primeros anuncios sobre política habitacional indican que, a pesar de la escasez de viviendas, se esperan drásticos recortes en el Proyecto Nacional de Viviendas «Minha Casa Minha Vida» [Mi casa, mi vida]⁵.

2. ONU-Hábitat: *Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana*, ONU-Hábitat, Nairobi, 2012, pp. xi y 19.

3. Siguiendo a Licia Valladares, entiendo el término «favela» como un tipo de estructura urbana heterogénea y transformable, y no como una «identidad social permanente», como con frecuencia se utiliza en las ciencias sociales. Ver L. Valladares: «Social Science Perspective of Favelas in Rio de Janeiro: A Historical Perspective» en *Lanic Etext Collection*, 2006, pp. 1-31, disponible en <<http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/valladares.pdf>>. Hay una vasta bibliografía sobre las favelas y sus habitantes. Para una síntesis v., por ejemplo, Janice E. Perlman: *The Myth of Marginality: Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro*, University of California Press, Berkeley, 1976.

4. Habitat for Humanity: «Brazil. Country Profile», <www.habitat.org/sites/default/files/Brazil_CP_June2017.pdf>, 2017.

5. Para más información sobre el programa, v. Eduardo Marques y Leandro Rodrigues: «O programa Minha Casa Minha Vida na metrópole paulista. Atendimento habitacional e padrões de segregação» en *Estudos Urbanos Regionais* vol. 15 N° 2, 2013 o Nabil G. Bonduki: «Do Projeto Moradia ao programa Minha Casa Minha Vida» en *Teoria e Debate* N° 82, 2009.

Frente a este proceso, varias organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales y demás actores de la sociedad civil se han movilizado y han expresado su preocupación. En un reciente manifiesto conjunto, advirtieron sobre las consecuencias de esa política urbana y se refirieron a situaciones similares del pasado para destacar la continuidad histórica de la política y las prácticas urbanas excluyentes en Brasil:

a partir de 2016, un conjunto de otras reformas –recorte de gastos en salud y educación, tercerización, [reforma] laboral, previsión social, MP 759– da a entender que la tragedia urbana brasileña se va a profundizar (...) podemos esperar un escenario análogo al de los años 1980: pauperización, violencia, crecimiento de las favelas, dispersión familiar, aumento del número de personas en situación de calle, aumento de la violencia contra las mujeres, niños que mendigan en los semáforos, etc.⁶

Sin embargo, a pesar de estos desafíos urbanos, desde hace ya mucho tiempo las personas afectadas han buscado y encontrado sus propias soluciones y respuestas a la política de exclusión dominante. El heterogéneo espacio urbano en constante crecimiento siempre ha sido el contexto y el marco dentro del cual se desarrolla la vida ciudadana. La negociación y la construcción cotidiana de la ciudadanía abren nuevas posibilidades y espacios para impulsar a di-

**La gente involucrada
en estos movimientos
reclama su derecho
a la ciudad mediante
múltiples formas
de activismo ■**

versos actores a la participación, la protesta y el cambio. Entre otras formas de participación igualmente importantes, los movimientos sociales urbanos se han organizado para luchar contra la exclusión y el acceso diferenciado a los beneficios urbanos de ciertos sectores de la población. La gente involucrada en estos movimientos reclama públicamente su derecho a la ciudad mediante múltiples formas de acti-

vismo y señala las pobres condiciones de vida de muchos pobladores urbanos que sufren cotidianamente la falta de acceso igualitario a viviendas asequibles y decentes, así como a bienes y servicios públicos.

Para enfatizar su capacidad de actuar y de desafiar las políticas urbanas desde abajo, este artículo se enfocará –a partir del ejemplo de Río de Janeiro– en los movimientos por la vivienda y su lucha para obtener un lugar

6. #brcidades: «Por uma frente ampla em defesa da construção social de um projeto para as cidades do Brasil», 2017, p. 4, disponible en <www.brcidades.org/assineomanifesto>. V. tb. «Com governo Temer, moradia volta ser ‘coisa pra quem tem dinheiro’» en *Rede Brasil Atual*, 30/12/2016, <www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2016/12/com-governo-temer-moradia-volta-ser-ativo-financeiro-887.html>.

habitable digno mediante la ocupación de edificios en torre en el centro de la ciudad. Mediante el ejemplo de una ocupación y sobre la base de historias orales, analizaremos las motivaciones personales de los ocupantes para involucrarse activamente en la protesta social y observaremos los efectos más amplios de su lucha en la política urbana, como así también en su desarrollo personal.

■ Las raíces de la crisis urbana: una historia de exclusión

Es importante remarcar que el acceso diferenciado a los beneficios de la ciudad y la exclusión de ciertos sectores de la población no son fenómenos nuevos, sino prácticas que se han desarrollado por décadas. Por ende, para comprender mejor la crisis urbana actual y sus desafíos, es necesario adoptar una perspectiva longitudinal sobre la dinámica urbana, desde el surgimiento de las metrópolis latinoamericanas hace más de un siglo.

Debido al crecimiento económico que siguió a la independencia de Brasil a fines del siglo XIX, cada vez más trabajadores se trasladaron a ciudades en expansión tales como Río de Janeiro, con la esperanza de encontrar mejores empleos y condiciones de vida⁷. Junto con el crecimiento y el cambio urbano progresivo, la segregación social de la ciudad –que se había iniciado en los tiempos coloniales– se profundizó aún más. Como los lugares de trabajo –por ejemplo, las fábricas– estaban en su mayoría ubicados en el centro de la ciudad, los trabajadores que tenían limitaciones económicas para acceder al transporte se establecieron allí y habitaban en viviendas colectivas superpobladas llamadas *cortiços*, mientras que las clases acomodadas se establecieron sobre todo a lo largo de la costa, en el sur de la ciudad⁸. Pero los *cortiços* ubicados en el centro de la ciudad de Río de Janeiro se convirtieron en una fuente de preocupación cada vez mayor para las elites, a punto tal que fueron erradicados y sus habitantes fueron desplazados por el gobierno con el pretexto de combatir las calamitosas condiciones sanitarias⁹.

7. Como consecuencia de la industrialización y la expansión de la economía basada en el café, Río de Janeiro y San Pablo tuvieron que enfrentar los niveles más altos de migración interna de esa época. Fausto Brito: «The Displacement of the Brazilian Population to the Metropolitan Areas» en *Estudos Avançados* vol. 20 N° 57, 2006, p. 222.

8. Alvaro Ferreira: *A cidade no século XXI. Segregação e banalização do espaço*, Consequência, Río de Janeiro, 2011, p. 44; Mauricio de Almeida Abreu: *Evolução urbana do Rio de Janeiro*, Instituto Pereira Passos, Río de Janeiro, 2010, pp. 35-59.

9. *Ibíd.*, p. 50; Helia Nacif Xavier y Fernanda Magalhães: «Urban Slums Report: The Case of Rio de Janeiro, Brazil» en *Case Studies for the Global Report on Human Settlements*, 2003, p. 10.

Estas prácticas se reforzaron con las primeras reformas urbanas públicas que tuvieron lugar durante la administración del intendente Francisco Pereira Passos (1902-1906). Las renovaciones urbanas que inició condujeron a un incremento en el valor de las tierras y los alquileres, lo que obligó a miles de personas de bajos ingresos a abandonar el centro de la ciudad. De este modo, mientras la mayoría se mudaba a los suburbios del norte y la periferia, otros se reubicaban en los morros y daban origen a una nueva forma de asentamiento popular: las favelas¹⁰. En contraposición a las de los sectores prósperos, las viviendas de las favelas eran en general construidas por sus propios ocupantes en asentamientos en constante crecimiento, sin ningún tipo de apoyo gubernamental y, por lo tanto, carentes de servicios y bienes públicos básicos¹¹.

En los años siguientes, la población urbana siguió creciendo hasta alcanzar su máximo en las décadas de 1950 y 1970¹². La gente que llegaba a la ciudad sin los medios económicos necesarios enfrentaba grandes dificultades para lograr el acceso a una vivienda, y la única opción que le quedaba era a menudo establecerse en las favelas o en otros asentamientos ilegales de la ciudad¹³. Los intentos del gobierno de resolver los problemas habitacionales a lo largo de los años fueron en buena medida simbólicos, ya que no tuvieron ningún efecto significativo en la escasez de viviendas, al tiempo que el incremento constante de los precios de las propiedades y la creciente especulación inmobiliaria exacerbaban aún más la crisis habitacional¹⁴. Solo a partir de 1979 la política urbana comenzó a cambiar, y a través de los años, se desarrollaron programas como el Favela-Bairro¹⁵, de 1994, que entre otras cosas apuntaban a la urbanización y a la integración socioespacial de las favelas, antes que al desalojo de la población de bajos ingresos¹⁶.

10. M. de Almeida Abreu: ob. cit.; Zeca Brandão: «Urban Planning in Rio de Janeiro: A Critical Review of the Urban Design Practice in the Twentieth Century» en *City & Time* vol. 2 N° 2, 2006, p. 37 y ss.

11. Márcia Pereira Leite: «Pobreza y exclusión en las favelas de Río de Janeiro» en Alicia Ziccardi: *Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI*, Siglo del Hombre / Clacso, Bogotá, 2008, p. 215; Nabil G. Bonduki: «Origens da habitação social no Brasil» en *Análise Social* vol. XXIX N° 3, 1994, p. 729.

12. George Martine y Gordon McGranahan: «The Legacy of Inequality and Negligence in Brazil's Unfinished Urban Transition: Lessons for other Developing Regions» en *International Journal of Urban Sustainable Development* vol. 5 N° 1, 2013, p. 10.

13. Fernanda G. Correia: «Breve histórico da questão habitacional na cidade do Rio de Janeiro», s/f, <www.achegas.net/numero/31/fernanda_correa_31.pdf>, p. 32.

14. M. de Almeida Abreu: ob. cit., pp. 95 y 116.

15. Para más información y discusión sobre el proyecto Favela-Bairro, v. Fernando Cavallieri: «Favela-Bairro. Integração de áreas informais no Rio de Janeiro» en Pedro Abramo (ed.): *A cidade da informalidade. O desafio das cidades latino-americanas*, Livraria Sette Letras / FAPERJ, Río de Janeiro, 2003.

16. H. Nacif Xavier y F. Magalhães: ob. cit., p. 13 y ss.; M. de Almeida Abreu: ob. cit., p. 134 y ss.



Sin embargo, a pesar de los programas de vivienda y los cambios tras el retorno de la democracia en la década de 1980, las políticas neoliberales y la crisis económica condujeron a la caída de los salarios, el incremento de la desocupación, el crecimiento del sector informal y la falta de desarrollo en infraestructura y construcción en todos los espacios urbanos, lo que a su vez alentó la suba de los precios de los alquileres y la especulación inmobiliaria privada. En consecuencia, el déficit habitacional histórico se intensificó aún más y la cantidad de favelas y asentamientos informales volvió a crecer¹⁷. Algo que resulta alarmante, y que debería quedar muy claro, es que, de acuerdo con los últimos datos disponibles, la cantidad de propiedades desocupadas en Brasil se equipara con el actual déficit de vivienda¹⁸.

■ Las respuestas a la crisis: los movimientos por la vivienda urbana y sus luchas

Así como el acceso diferenciado y la exclusión de ciertos sectores de la población de los beneficios de la ciudad no son un fenómeno nuevo, tampoco lo es la resistencia. Ya desde el comienzo de la urbanización a fines del siglo XIX ha habido resistencia frente al carácter excluyente de la política urbana, tanto en Brasil como en otros países¹⁹. Actualmente, esta resistencia toma principalmente la forma de movimientos sociales urbanos que buscan hacer cumplir sus derechos y mejorar la situación de la población de bajos recursos. Desde la década de 1950 y, en particular, la de 1970, se desarrollaron en las favelas y en toda la ciudad en el nivel local movimientos de base –como asociaciones cívicas y organizaciones vecinales– para organizarse en torno de los servicios y bienes básicos y para presionar por la legalización y en contra de la expulsión²⁰. En la década de 1980, mediante la progresiva vinculación entre estas organizaciones, surgieron grandes movimientos urbanos organizados a escala nacional²¹. Después

17. M. Pereira Leite: ob. cit., p. 215; Charmain Levy: «Brazilian Urban Popular Movement: The 1997 Mobilization of the Inner-City Slum Movement in São Paulo» en *Studies in Political Economy* N° 85, 2010, p. 36.

18. Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações: «Déficit habitacional municipal no Brasil», Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações, Belo Horizonte, 2013, p. 73.

19. Por ejemplo, las huelgas y los movimientos de inquilinos de comienzos del siglo XX en Argentina y México.

20. Kathryn Hochstetler: «Democratizing Pressures from Below? Social Movements in New Brazilian Democracy», trabajo presentado en el XX Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), 17-19 de abril de 1997, Guadalajara, disponible en <<http://lasa.international.pitt.edu/LASA97/hochstetler.pdf>>, p. 2 y s.; Regina B. Santos: *Movimentos sociais urbanos*, Editora UNESP, San Pablo, 2004, p. 126.

21. Maria d. G.M. Gohn: *Movimentos sociais e lutas pela moradia*, Loyola, San Pablo, 1991, p. 12 y ss.; C. Levy: «The Housing Movement in the City of São Paulo: Crisis and Revival» en C. Levy, Michelle Duquette y Maurilio de Lima Galdino: *Collective Action and Radicalism in Brazil: Women: Urban Housing and Rural Movements*, University of Toronto Press, Toronto, 2005, p. 101 y ss., 108.

de la transición a la democracia, al igual que otros actores de la sociedad civil, estos movimientos se involucraron con entusiasmo en el debate por la nueva Constitución e intentaron integrar sus reclamos de reforma urbana. Una de sus victorias más importantes fue la incorporación legal de una sección sobre política urbana, compuesta por los artículos 182 y 183, que entre otras cosas ancló por primera vez en la Constitución la función social de la ciudad²². Pero, a pesar de estos logros, su lucha continuó, y cuando en la década de 1990 las condiciones de vida se deterioraron aún más como resultado de las reformas neoliberales, estos movimientos se expandieron y radicalizaron su forma de protesta. Además de la ya utilizada estrategia de ocupar áreas urbanas desocupadas y reclamarlas como propias, de manifestarse y de tomar acciones legales, comenzaron a ocupar edificios vacíos como una manera concreta de reclamar por la función social de la vivienda²³. Su protesta y su organización tuvieron efectos más amplios, y en 2000 el derecho a la vivienda fue por fin incluido en el artículo 6 de la Constitución de 1988. Además, en 2001 se aprobó la ley 10257 –el Estatuto de la Ciudad–, que reglamenta los artículos constitucionales 182 y 183 sobre política urbana²⁴. Esto fue un paso importante para los movimientos por la vivienda ya que, entre otras cosas, el Estatuto de la Ciudad debería contrarrestar la especulación inmobiliaria y la existencia de edificios desocupados a través de la expropiación de construcciones que han permanecido en desuso luego de cinco años o mediante impuestos progresivos sobre la propiedad²⁵.

Estos movimientos se involucraron con entusiasmo en el debate por la nueva Constitución e intentaron integrar sus reclamos de reforma urbana ■

Podemos entonces decir que, desde los comienzos del desarrollo urbano, las luchas ciudadanas desde las bases confrontaron la política de exclusión dominante y lograron la inclusión formal del derecho a la vivienda. Sin embargo, desafortunadamente hasta el presente, rara vez se ha respetado este derecho en forma sistemática y los gobiernos son todavía incapaces de hacerlo

22. Leonardo Avritzer: «O Estatuto da Cidade e a democratização das políticas urbanas no Brasil» en *Revista Crítica de Ciências Sociais* N° 91, 2010, pp. 205-209; Regina F. Cordeiro Fonseca Ferreira: «Constituição cidadã e o direito à cidade. 20 anos de luta e muitos desafios» en *Proposta* N° 117, 2008, p. 36 y ss.

23. Adauto L. Cardoso: «Vazios urbanos e função social da propriedade» en *Proposta* N° 116, 2008, p. 8; R.B. Santos: ob. cit.

24. Presidencia de la República, ley N° 10257, 2001.

25. Se trata del impuesto a la propiedad urbana y la tierra (*imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana*, IPTU).

cumplir y aplicarlo en la práctica²⁶. En consecuencia, los movimientos por la vivienda continúan su lucha para lograr una reforma urbana mediante la ocupación de edificios en torre vacíos en áreas centrales de la ciudad. Un caso es el de la Ocupación Manoel Congo, en el centro de Río de Janeiro²⁷.

■ Tomar parte en el cambio urbano: la participación y sus efectos

La ocupación de un edificio es un proceso a largo plazo que requiere una meticulosa organización preliminar y planificación. Además de elegir con cuidado un edificio desocupado –preferiblemente público–, el movimiento responsable organiza reuniones regulares preparatorias con los participantes para que haya más probabilidades de éxito. En el caso de la Ocupación Manoel Congo, estos preparativos habían sido iniciados por el Movimiento Nacional de Lucha por la Morada (MNLN) un año antes de la ocupación del edificio elegido, el 28 de octubre de 2007. El MNLN, fundado en 1990, está hoy activo en 15 estados de Brasil²⁸. Su principal objetivo es impulsar la reforma urbana en todos los niveles políticos y legales y, en especial, establecer una política de vivienda de interés social, tal como se garantiza en la Constitución. También entiende que estos temas se relacionan con otras necesidades, como el cuidado de la salud y la educación, que por lo tanto incorpora en sus reclamos²⁹.

Nuestra idea es luchar por la reforma urbana. (...) La ocupación es una forma de denunciar los vacíos urbanos que existen en Río de Janeiro. Es para denunciar la especulación inmobiliaria. Es por políticas públicas. Porque la reforma urbana no está desvinculada de las políticas públicas, que son la salud, la educación, el transporte, la alimentación saludable, etc. Todo eso está involucrado. Solo que nosotros entendemos que esa lucha es la lucha por una ciudad en la que se pueda convivir.³⁰

Así, se invitó a gente que necesitaba vivienda a debatir sobre la organización necesaria y los desafíos futuros en el contexto de la ocupación, al mismo tiempo que se la informaba sobre los antecedentes políticos de una ocupación y la estructura interna del movimiento. En esa etapa también se discutieron

26. R.B. Santos: ob. cit.

27. Para más bibliografía sobre las ocupaciones en Río de Janeiro, en particular sobre aspectos de ciudadanía y género, v. B. Wittger: *Squatting in Rio de Janeiro: Constructing Citizenship and Gender from Below*, Transcript, Bielefeld, 2017.

28. Pará, Acre, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, San Pablo, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, Bahía, Tocantins, Río de Janeiro, Paraná, Paraíba y Río Grande do Sul. MNLN-RS: MNLN Rio Grande do Sul, 2007, <<http://mnlm-rs.blogspot.de/>>.

29. Ibid.

30. Coordinador nacional de MNLN, 2011.

y organizaron las normas y las tareas obligatorias, que entraron en funcionamiento tan pronto como la gente ingresó en el edificio. Mientras que las reglas incluían la prohibición de las peleas y del consumo de drogas dentro de la vivienda ocupada, las tareas se organizaban bajo la forma de comisiones, por ejemplo a cargo de la limpieza y el mantenimiento del edificio y el control de la entrada principal (*portería*). Los habitantes también estaban obligados a participar en las reuniones regulares de la ocupación, en las que tomaban decisiones como parte de un colectivo (*coletivo*). El incumplimiento de las tareas y las reglas era rigurosamente penalizado y podía incluso llevar a los coordinadores del movimiento a decidir la expulsión de la vivienda ocupada. Con el tiempo, algunas de estas tareas y la frecuencia de su cumplimiento fueron cambiando y a veces incluso se interrumpieron. No obstante, la organización interna y la influencia del movimiento responsable en la Ocupación Manoel Congo –en contraste con otras ocupaciones– han permanecido muy fuertes hasta el presente.

Las reglas incluían la prohibición de las peleas y del consumo de drogas dentro de la vivienda ocupada ■

Los que participaban en la ocupación, y por ende en la construcción y el ejercicio de la ciudadanía desde las bases, eran en su mayoría personas que habían vivido antes en áreas de bajos recursos, como los suburbios de la Bajada Fluminense³¹ y las favelas de la ciudad. En su caso, vivir en estas áreas no solo significaba estar obligados a lidiar cotidianamente con una infraestructura insuficiente, sino también enfrentar la desagradable presencia del narcotráfico, la *milícia* (grupos paramilitares) y la policía, además del riesgo de verse involucrados en altos niveles de violencia o afectados por ella. Muchos de los participantes no tenían un lugar propio para vivir y tenían que hacerlo con sus familiares, una situación que con frecuencia derivaba en problemas y conflictos. Otros habían tenido que vivir en las calles del centro de la ciudad. Así, la mayoría de los ocupantes había estado en una situación económica difícil y cubrían los gastos de su vida diaria con mucho esfuerzo. En particular, percibían la necesidad de pagar un alquiler como una pesada carga. Muchos de los entrevistados también enfrentaban problemas para encontrar empleo y la mayoría de ellos había trabajado (y aún lo hacía) en el sector informal. Por estas razones, instalarse en una vivienda ocupada mejoraba la calidad de sus vidas en forma significativa, como lo describía una habitante del Manoel Congo en 2011:

31. La Bajada Fluminense incluye las municipalidades de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados y Mesquita.

Estoy contenta de estar aquí, y de saber que esa lucha fue mía y de todos los que viven aquí, las 42 familias. Cada uno luchó para tener su espacio, estoy feliz por estar en el centro de la ciudad. Tenemos ómnibus hacia todas partes. Tenemos subterráneo, clubes, cines, teatro, servicio fácil, porque uno va y vuelve a pie. Escuela, volví a estudiar. Desde que estoy acá. Fui a hacer un curso de derechos humanos. Quiero decir, fue muy bueno para mí. ¡Fue muy bueno para mí! Para mi hijo, que lo dejé en la escuela, hoy mi hijo sabe leer, sabe escribir.³²

De las entrevistas a los habitantes de la vivienda ocupada también surgía que algunos de ellos habían participado en el pasado en acciones ciudadanas, tales como movilizaciones sociales, ocupaciones de tierras o trabajos comunitarios, antes de ingresar en el Manoel Congo. Estas personas –con frecuencia, mujeres– ya contaban con muchos años de participación en el activismo político y podían usar su experiencia y sus conocimientos para la organización de la ocupación.

En conclusión, las condiciones de vida y actividades pasadas de los habitantes tenían un rol importante en su decisión de participar en la toma. Debido a su situación socioeconómica, habían sufrido la exclusión de una vivienda adecuada, del transporte, del cuidado de la salud y la educación, y también de la vida cultural y pública en la ciudad. Vivir en el edificio ocupado –en pleno centro de la ciudad– les ofrecía entonces una verdadera oportunidad de mejorar sus vidas y las de sus familias. De ahí que la principal razón para la decisión de participar fuera una necesidad personal, mientras que solo algunos señalaban también una motivación política. Este era en particular el caso de los habitantes que ya se habían involucrado en acciones ciudadanas antes de entrar en el Manoel Congo. Sin embargo, no podían darse por sentados ni la conciencia política previa de los actores involucrados ni su desarrollo posterior. De hecho, al comienzo, muchos apenas sabían qué esperar de la ocupación.

No obstante, cuando se los consultó acerca de los cambios y los efectos que habían notado luego de mudarse a la vivienda ocupada, los habitantes también hacían referencia con frecuencia al desarrollo personal que habían experimentado desde la ocupación y por vivir en la vivienda ocupada. Mencionaban una nueva confianza en sí mismos ganada gracias a la participación y la experiencia exitosa de ocupar el edificio. Decían sentirse más fuertes, más confiados, capaces y esperanzados de alcanzar logros y hacer cambios en sus vidas a futuro. Esto se veía aún más impulsado por la nueva situación de

32. Habitante de la Ocupación Manoel Congo, 2011.

vida colectiva en la ocupación, con sus nuevas reglas y condiciones de vida, que venían de la mano de un significativo desarrollo y un cambio personal en términos de aprendizaje y tolerancia de las necesidades de los demás, o de ignorar las opiniones o prejuicios de la gente que no vivía en la ocupación.

En algunos casos, la evolución personal también se relacionaba con el desarrollo de una (nueva) conciencia política. Las entrevistas sugieren que la convivencia diaria con la fuerte presencia de un movimiento social y la obligación de participar, de involucrarse en acciones y objetivos ciudadanos –como reuniones, manifestaciones y educación– tenían aparentemente el potencial de convertirse en una fuerza transformadora y de marcar la diferencia en términos del desarrollo de una conciencia política.

■ Conclusión

La Ocupación Manoel Congo es un ejemplo de la actual resistencia popular a la crisis urbana. El éxito de los habitantes en permanecer en el corazón de la ciudad de Río de Janeiro demuestra que cuando son influyentes y activos en todos los niveles políticos, los movimientos urbanos pueden dar forma a las políticas urbanas y ser un contrapeso «desde abajo» frente a las políticas de exclusión dominantes «desde arriba». Como hemos apuntado en este artículo, esos movimientos urbanos han dado forma a la política urbana por décadas, y el modo en que manejaron la crisis ha resultado muy exitoso, sobre todo en relación con la inclusión del derecho a la vivienda en la Constitución. Pero su continua resistencia no solo ha mostrado resultados y efectos más amplios en el nivel político. Debido a su iniciativa, personas que nunca se habían involucrado antes en la protesta política comenzaron a participar y de ese modo presionaron activamente para lograr cambios y reformas urbanas. En consecuencia, estos actores y su capacidad de acción son también una importante fuerza reguladora en el contexto de la política neoliberal vigente y sus procesos. Aunque sus intentos puedan fracasar o sus éxitos puedan parecer en algunos casos poco significativos, su lucha es de una coherencia importante, una denuncia constante de la política excluyente que demuestra así que el cambio social es posible. 

Los memes: una respuesta popular y humorística ante la crisis mexicana

México vive una de sus mayores crisis en materia de seguridad y de credibilidad en las instituciones, y las clases populares responden con una de las armas que mejor conocen, el humor, para poner en entredicho cualquier afán tendencioso de volver hegemónicos atrocidades e intereses creados. A la par de sus contenidos frívolos, los memes son una poderosa arma de opinión pública y de denuncia social que apuntan con su dedo flamígero hacia toda clase de despropósitos y excesos; pero también dan la mano para hermanar a los mexicanos en su orfandad en la confianza en la justicia.

BLANCA ESTELA RUIZ

¿Quién, en estos momentos de caos, de recelo y de miedo, no ha escuchado la frase «los demonios andan sueltos»? Y es que pareciera que fuerzas malignas anduvieran por ahí, desatadas, perjudicando al común de los mortales¹. Una sociedad en grave estado de anomia encuentra en la superstición

Blanca Estela Ruiz: es doctora en Letras por la Universidad de Guadalajara y profesora investigadora titular en esa casa de estudios. Es autora de un libro de investigación y crítica sobre un escritor jalisciense decimonónico, *Apuntes sobre la obra de Fernando Calderón* (Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1993). Entre sus líneas de estudio figuran temas como el humor, la literatura hispanoamericana y la metodología de la investigación literaria. Correo electrónico: <blancaruiz1019@gmail.com>.

Palabras clave: clases populares, crisis, humor, meme, México.

1. Esta expresión pasó a la historia de la política mexicana en la rueda de prensa ofrecida el 23 de noviembre de 1994 por el entonces subprocurador de la República, Mario Ruiz Massieu, quien investigaba la muerte de su hermano José Francisco Ruiz Massieu, diputado federal y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). José Francisco había sido asesinado dos meses antes y el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, había designado a Mario fiscal en el caso. Sin embargo, este renunció a la investigación y al cargo con el argumento de que altos funcionarios de su partido (el PRI) obstaculizaban su trabajo en el esclarecimiento de los hechos: «El pasado 28 de septiembre una bala mató a dos Ruiz Massieu», dijo, «a uno le quitó la vida, al otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priísta se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos, y han triunfado». Maite Rico: «El fiscal Ruiz Massieu dimite por las trabas en la investigación de la muerte de su hermano» en *El País*, 24/11/1994.

una forma de protegerse contra el mal y enfrentar los demonios y cree que ese prodigio atribuido a ciertos objetos y a determinados individuos habrá de exorcizarlos. En México, tanto la Iglesia como el Estado laico han puesto en marcha una larga tradición hagiográfica para darle a un pueblo sin dirección una tabla a la cual asirse y para así controlarlo ideológica y políticamente. Héroes y santos han intentado saciar la sed de justicia y de igualdad para todos. En busca de esperanza e inspiración, el pueblo mexicano, por ejemplo, leyó durante 20 años las *Vidas ejemplares* de santos y de mártires publicadas por la editorial Novaro que cada semana, desde 1954 y hasta 1974, aparecían en los puestos de periódicos; y a los niños se les sigue enseñando historia nacional con las acciones épicas y conmovedoras de aquellos que han contribuido a «hacer patria».

Suele decirse que «hay crisis» o que «se está en crisis» cuando un conglomerado de pérdidas, de dificultades y desequilibrios alcanza su punto más álgido (cual demonios sin control). Pero este no es momento para aceptar un destino fatal y cruzar los brazos o hincarse a rezar en espera de un milagro, aunque el Estado mexicano debería agradecer que los parroquianos, convertidos en «catalizadores de la creciente inconformidad social», como bien señala el periodista mexicano José Gil Olmos, «en lugar de encaminarse hacia la rebelión han dirigido sus pasos hacia las capillas» para pedir a los santos «lo que el Estado mexicano debería de proporcionar como una obligación: seguridad, justicia, equidad, educación, salud, vivienda, trabajo y bienestar social»². El periodo de crisis brinda la oportunidad de cambiar lo que está mal, analizar una situación adversa y tener el coraje de enfrentarla. Etimológicamente, «crisis» (del griego *krísis*) significa «separación», «discernimiento», «decisión». Cuando un sistemático flujo de desatinos, como gota que derrama el vaso o «llena el buche de piedritas», satura la paciencia de desaliento, ira y hartazgo, es preciso repensar la situación, analizarla y actuar en consecuencia; es decir, ser crítico (del latín *criticus*, y este del griego *kritikós*: «que juzga», «que decide»). La información sin duda otorga herramientas necesarias para generar juicios. Una sociedad bien informada podrá exorcizar verdaderamente sus demonios y contribuir a la posibilidad de un cambio.

México es un país complejo en donde, como dijo Juan Villoro, «el carnaval coincide con el apocalipsis»³. La fiesta y el horror se toman de la mano en México desde tiempos remotos. La violencia ha hecho del territorio mexicano

2. José Gil Olmos: *Santos populares. La fe en tiempos de crisis*, Grijalbo, Ciudad de México, 2016, p. 19.

3. Cit. en Elena Poniatowska: «Prólogo» en Anabel Hernández García, Emiliano Ruiz Parra, Lydia Cacho y Sergio González Rodríguez: *Siete voces contra la impunidad. La ira de México*, Debate, Ciudad de México, 2016, p. 19.

una gran fosa común desde que en 2006, al inicio de su sexenio, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa declarara la guerra al narcotráfico, que continúa con el actual mandatario Enrique Peña Nieto y que a la fecha suma cientos de miles de personas entre muertos y desaparecidos. Junto a esta hecatombe, los actos de corrupción e impunidad alcanzan niveles escandalosos. Hoy como nunca antes, México se ha vuelto una de las naciones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo y la crítica⁴. En esta coyuntura, la sociedad civil ha salido a las calles con pancartas y consignas para hacer valer sus derechos. Artistas urbanos y grafiteros lanzan sus gritos de protesta. Y en el vértigo de las nuevas tecnologías, también el pueblo responde con una de las armas que mejor conoce, el humor, como una válvula de escape que desahoga tensiones y deja salir un enojo en constante ebullición, pero también como un poderoso instrumento de denuncia social que sensibiliza y llega a un considerable número de personas de manera directa y expedita. Precisamente esos videos, fotomontajes, imágenes y textos de construcción multimedia conocidos como «memes», replicados en las redes sociales, son una invitación a repensar la historia desde el compromiso de decir lo que tiene que decirse sin miedo y de señalar aquello que merece ser sancionado. Los memes son un modo de resistencia, una fuerza avasalladora que toma el pulso del acontecer diario y lo redefine, sin censura. Concentran unidades mínimas de información transmisible al servicio de un grupo social que comparte contenidos y opiniones de interés cultural, político o social con un toque de humor. Richard Dawkins, en *El gen egoísta* (1976), acuñó el término «meme» a partir de «memoria» y «mímesis», para nombrar esa información que la enseñanza o la imitación (mímesis) asimila y acumula en la memoria y que, según este científico británico, se replica en el cerebro de una persona a otra, como lo hacen los genes al transferir la herencia biológica de un cuerpo a otro. Ambas formas de transmisión—cultural y genética—evolucionan: los genes desde su naturaleza misma, independiente de la voluntad de sus transmisores; y la cultura, desde el cúmulo de las acciones y conductas de estos⁵.

Las redes sociales son un campo de cultivo en el que los memes se crean y expanden como los virus desde un organismo infectado hacia otro vulnerable; por eso se los llama «virales». Como otros replicadores (los genes o las epidemias), su finalidad es reproducirse. Una vez inoculados en los internautas, estos los seleccionan y se los apropian para desarrollar con ellos

4. «En sexenio de Calderón, 60 asesinatos y 15 desapariciones forzadas de periodistas» en *La Jornada*, 18/7/2013; «¿Quiénes son los 36 periodistas asesinados en el sexenio de EPN?» en *El Economista*, 16/5/2017; «Van 83 activistas desaparecidos con Peña; con Calderón, 56: Comité Hasta Encontrarlos» en *Proceso*, 25/5/2016.

5. R. Dawkins: *El gen egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta*, Salvat, Barcelona, 1993, p. 218.

nuevas expresiones cuyo vigor y vigencia determinan su réplica. Todo es susceptible de «viralizarse»; cualquier contenido en distintos formatos (audio, video, imagen o texto) puede tener la capacidad de reproducirse prácticamente «solo», sin más publicidad que la repetición de muro en muro, de tuit en tuit o de whats en whats.

Generalmente, los memes son indiferentes a la veracidad o falsedad de la información que transmiten. No buscan sino llegar a un número cada vez mayor de usuarios. Pero junto con esa frivolidad, también son un escaparate para exhibir abusos y excesos.

A no pocos personajes les han otorgado sus «cinco minutos de fama» con etiquetas (o *hashtags*, en inglés) que de manera irónica llaman #Ladies y #Gentlemen o #Lords a ciertos personajes *non gratos* que protagonizan desplantes e improperios, o simplemente hechos ridículos con los que «muestran el cobre» y exponen sus prejuicios, su ignorancia o su incompetencia.

Generalmente, los memes son indiferentes a la veracidad o falsedad de la información que transmiten ■

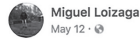
Una de las primeras etiquetas virales con el título de #GentlemanDeLasLomas fue la de un empresario textil llamado Miguel Sacal Smeke, condómino de un exclusivo edificio departamental en el Bosque de las Lomas de la Ciudad de México, quien en julio de 2011 ofendió y golpeó brutalmente al guardia de esa unidad habitacional porque no lo ayudó a cambiar la llanta de su Porsche. El caso se documentó en internet y Sacal Smeke terminó en la cárcel ante la presión pública, pero salió libre tras pagar una multa de 20.000 pesos (unos 1.000 dólares) y llegar a un acuerdo económico con la víctima para que retirara los cargos. El hecho demostró una vez más que la justicia en México suele estar en función del dinero que pueda pagarse para salir impune de un delito cometido. El violento individuo contaba con un historial de exabruptos, como demostró posteriormente otro video que el Grupo Reforma publicó en Youtube en enero de 2012, en el que se lo ve dirigirse furiosamente a un oficial de tránsito que lo grababa mientras era multado por estacionar su automóvil en un lugar reservado para personas con discapacidad, por lo que recibió también el título de #lordiscapitado⁶.

Otro meme de denuncia se difundió en las redes sociales en abril de 2013. En este se ilustraba el berrinche que hizo la hija del titular de la Procuraduría Federal

6. Joaquín López Dóriga: «El video de la vergüenza» en *Noticieros Televisa*, reproducido en Youtube, 10/7/2011 y el video disponible en <www.youtube.com/watch?v=v6Jh0e5q21A>.



Miguel Moisés Sacal Smeke
GENTELMAN DE LAS LOMAS



Se acuerdan de Miguel Sacal? El que le pegó al guardia? Pues lo sorprendí bajándose solo de este hermoso Porsche en el Superama del puente de Tecamachalco en el lugar de discapacitados; de verdad es lamentable que aún existan personas cómo está... please compartan #lordiscapacitado



del Consumidor (Profeco), Andrea Benítez González, porque en un pequeño restaurante de la colonia Roma, en la ciudad capital, no le asignaron una mesa en donde ella quería, pese a que no tenía reservación. La señorita, molesta, amenazó con mandar clausurar el local. Después del percance, inspectores de la Profeco acudieron al lugar y lo cerraron por presuntas irregularidades en el sistema de reservaciones y en la venta de mezcal. El video se hizo viral bajo la etiqueta de «#LadyProfeco», y aunque en su cuenta de Twitter Humberto Benítez Treviño ofreció disculpas por la conducta inapropiada de su hija, fue destituido de su cargo⁷.



7. «Invaden ‘memes’ de LadyProfeco redes sociales; la BBC de Londres le dedica un artículo» en *Nayarit en línea.mx*, 30/4/2013.

En Jalisco, además del apodo de «La rugidora» (por los sapos y culebras que «rugen» en su vulgar vocabulario y el juego de palabras sugerido a partir de la cercanía fonética con su cargo de regidora), Elisa Ayón Hernández, quien fuera diputada local, dirigente estatal del sector popular del Consejo Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y directora de dos escuelas primarias, participó en sonados escándalos de corrupción en la capital jalisciense, por lo que ostentó tres veces el título de #Lady: «#LadyPanteones» (porque el 7 de noviembre de 2013 circularon grabaciones en las que se la escuchaba ofender a trabajadores de la Dirección de Panteones del municipio de Guadalajara y exigirles «cuotas»); «#LadyInspección» (ya que cuatro días después de ese audio circuló otro en el que pedía dinero a los comerciantes establecidos de la calle Obregón de Guadalajara para resolver el problema de la competencia desleal con los vendedores ambulantes de la zona); y «#LadyEducación» (pues también cobraba por dos plazas directivas en sendas escuelas primarias: una en Guadalajara y otra en Puerto Vallarta). Luego de las respectivas averiguaciones, el Congreso local aprobó en marzo de 2014 desaforarla e inhabilitarla por diez años para ejercer cualquier cargo público⁸.



Con frecuencia estas etiquetas también llaman la atención sobre ciertas carencias de sentido común o de límite de las proporciones, mediante la alteración intencionalmente exagerada de una realidad o de una actitud ya sea por exceso (aúxesis, del griego *auxēsis*, incrementar) o por defecto (tapeinosis, del griego *tapeinosis*, bajar). Uno de los memes que llevó al límite la medida fue el difundido entre abril y mayo de 2016 con el título de «#LadyCajero». Fue capturado con un teléfono móvil y subido a las redes sociales por alguien que esperaba su turno en la fila de un cajero automático. La fotografía mostraba a una mujer cubriendo con su suéter a su compañera mientras esta sacaba dinero.

8. Rosa Emilia Porras Lara: «Lady panteón, lady educación... ella es Elisa Ayón» en *Milenio.com*, 16/1/2014.

Aunque la mujer después aclaró que no trataba de ocultarla de un posible robo de su clave de acceso, sino que tapaba el reflejo del sol para que su amiga pudiera ver mejor la pantalla, los internautas optaron por una historia distinta basada en la observación exagerada de las medidas de seguridad. La imagen hablaba por sí misma y se propagó en un sinfín de posibilidades hilarantes de censura y del uso de la manta.



Al principio, los memes eran imágenes estáticas; luego evolucionaron hacia formas más complejas, más creativas y con cierta habilidad en el manejo del fotomontaje (como puede apreciarse en las imágenes anteriores). Pero el meme que alcanzó insospechadas proporciones en todo el país e hizo gala del poder de la réplica fue la historia de una familia potosina cuyo padre, en diciembre de 2016, invitó a toda su comunidad a celebrar los 15 años de su hija Rubí. La convocatoria tuvo tal impacto que alrededor de 1,2 millones de personas confirmaron, vía Facebook, su asistencia a la fiesta⁹.

Prácticamente cualquier participante activo de las redes sociales, conocedor del lenguaje digital y poseedor de un teléfono inteligente con programas multimedia puede generar un meme¹⁰. En la red hay plataformas, programas y

9. Daniela Bermúdez y Mariana Ampudia: «¿Por qué se viralizaron los xv años de Rubí?» en *El Economista*, 8/12/2016.

10. Las agencias de marketing suelen contratar diseñadores para producir memes que ayuden a incrementar sus ventas (algunos de ellos son estudiantes que buscan un ingreso extra para solventar sus gastos durante el curso de su carrera); el publicista estadounidense Ryan Holiday, en su obra *Confía en mí, estoy mintiendo. Confesiones de un manipulador de los medios* (Empresa Activa, Barcelona, 2013) describe algunas técnicas de creación de memes utilizadas por estos despachos. Los partidos políticos también se han convertido en fábrica de memes para desprestigiar a sus adversarios durante las campañas políticas. Existen incluso grupos temáticos en Facebook que generan memes replicados luego por sus seguidores.



Se filtran las primeras imágenes de la vaporera para la barbacoa de los XV de Ruby...



aplicaciones que ofrecen un cúmulo de plantillas para su elaboración que pueden descargarse fácilmente. Existe además un sitio conocido como Meme Database, que concentra datos de aparición y número de réplicas de los más populares. Pero, además de la tecnología, para hacer un meme es necesario también algo de creatividad e ingenio; algo que decir, denunciar, cuestionar o criticar; algo que merezca ser objeto de burla y sobre lo cual se deba tomar conciencia.

La calidad del meme dependerá del nivel cultural de su hacedor, de su inteligencia y sensibilidad para identificarse con la audiencia; y su viralidad o réplica, de que sea breve, sencillo y gracioso; pero principalmente, de que sea pertinente, de que capte una opinión generalizada y despierte un sentimiento positivo de empatía y solidaridad. A propósito de esto último, durante los sismos que sacudieron el pasado 7 y 19 de septiembre de 2017 algunos estados del centro y sur de México, así como su capital, los memes dejaron atrás la frivolidad y la burla sin sentido y se convirtieron en una forma de expresar apoyo y fortaleza a través de imágenes de rescatistas y de actos heroicos viralizados en las redes sociales bajo la etiqueta «#FuerzaMéxico». Por estos medios se invitaba a los internautas a no generar ni replicar noticias falsas que causaran pánico entre la población y a no publicar memes que hicieran mofa de la tragedia. Las imágenes de cadenas humanas colaborando desinteresadamente, puños levantados solicitando silencio para escuchar posibles gritos de sobrevivientes, mensajes de apoyo a los damnificados y de gratitud por la generosa ayuda internacional se tatuaron en la memoria de un pueblo doliente y agradecido.



También en las redes sociales surgió inmediatamente una iniciativa para que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los nueve partidos políticos registrados actualmente en el país donaran a las víctimas de los sismos el dinero aprobado para su operación y las campañas electorales, estimado en casi 7.000 millones de pesos (aproximadamente unos 350 millones de dólares). En menos de 24 horas, la propuesta alcanzó más de 1.600.000 firmas¹¹. Los senadores argumentaron entonces que esa donación sería contra la ley porque el recurso está etiquetado para fines electorales y que ante las próximas elecciones de 2018 no habría tiempo para modificaciones legales. Entonces los memes de protesta volvieron a hacerse presentes.

Para entender la presencia del humor en momentos de crisis hay que observar la mecánica que lo mueve: una fuerza esperanzadora que viene a llenar vacíos en todos los órdenes. Cuando un país ultrajado y herido está fragmentado, suelen acogerse en su reconstrucción los símbolos acuñados

11. Jesús García: «Mexicanos acorralan a sus políticos para donar \$7.000 millones de pesos tras sismos» en *El Diario*, 21/9/2017.



a lo largo de la historia que le dan identidad y que calan hondo en sus raíces: el territorio, la bandera, el escudo, el himno, la raza... El humor contribuye al fomento de un sentimiento de arraigo y de defensa de lo propio. Así, por ejemplo, cuando «Masiosare», que a todas luces es «un extraño enemigo» (según reza un tergiversado verso del Himno Nacional Mexicano)¹² y cuya figura encarna en los últimos tiempos el presidente de Estados Unidos, lastima la dignidad de un pueblo amenazándolo con construir un muro en su frontera sur que blinde a los suyos de la inmigración que busca mejores condiciones de vida. Aun más, cuando ese «Masiosare» no solo insiste en que los mexicanos no son bienvenidos en

12. «Masiosare» proviene de la creatividad popular y hace referencia al verso: «mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo».

su país nomás porque nacieron chaparritos y morenitos, sino que «de pilón», esa muralla habrán de pagarla ellos con dinero de sus bolsillos... entonces, con un «calcetín lleno de piedritas» y la mexicanidad a flor de piel, se despierta un nacionalismo embravecido que había permanecido aletargado, para exaltar el sentimiento de pertenencia, de orgullo y amor patrio, aun en aquel que no sabe la letra completa de un himno que, fuera de los actos cívicos, nomás se canta cuando juega la selección mexicana de fútbol; o en aquel que desconoce los artículos de la Constitución para defenderse, ejercer sus derechos y tener presentes también sus obligaciones. Metafóricamente se «aprestan» «bridones» y «aceros» en esas banderas, escudos y colores patrios que, desempolvados, se colocan en donde todos puedan verlos: en los muros de Facebook y de Twitter, y en los grupos de WhatsApp. Con ellos se traen a la memoria los versos de la «suave patria» que en 1921 escribió el poeta zacatecano Ramón López Velarde: «con una épica sordina: la Patria es impecable y diamantina», y si bien «El niño Dios [le] escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo», la «Patria, [aun en su] mutilado territorio se viste de percal y de abalorio»¹³. E igualmente, en ese «soldado» que a la «Patria querida», «el cielo» «en cada hijo [le] dio», hay un cantor que al unísono, de su ronco pecho mexicano, entona las coplas de un «México lindo y querido», una «Canción mixteca» o un «Cielito lindo»¹⁴, porque bajo las partituras de sus notas habitan no solo las tribus urbanas y campesinas, sino también grupos marginados y vulnerables que integran, todos juntos, un México profundo dispuesto a defenderse de las agresiones del vecino prepotente y también de las vejaciones de su propio gobierno déspota, insensible y deshonesto. Entonces, como una bocanada de aire fresco que ventila el drama asfixiante, prepara ese plato que se sirve frío: la venganza en la ridiculización del poderoso.

13. Ramón López Velarde: «La suave patria» en *Poesías completas. El minuterero. Don de febrero*, Promexa, Ciudad de México, 1979.

14. Las tres son canciones vernáculos que en sí mismas se han vuelto un himno de orgullo patrio y también de nostalgia por el terruño cuando se parte a otras tierras. «México lindo y querido» fue escrita por el moreliano Jesús Monge Ramírez (Chucho Monge); «Canción mixteca», por el oaxaqueño José López Alavez; y «Cielito lindo», por el xochimilca Quirino Mendoza y Cortés. Esta última canción fue entonada espontáneamente en la penumbra de la noche del 19 de septiembre de 2017 por una multitud que llevaba horas trabajando en las labores de rescate de los sobrevivientes del terremoto que ese día sacudió la Ciudad de México. Su conocido estribillo trataba de inyectar optimismo en medio de la calamidad: «Ay, ay, ay, ay... / canta y no llores / porque cantando se alegran, / cielito lindo, los corazones». V. <www.publinews.gt/gt/noticias/2017/09/20/conmovedor-video-muestra-mexicanos-cantando-cielito-lindo-tras-terremoto.html>.



Antes de la expansión tecnológica, la caricatura política era portavoz de la inconformidad popular. Y aunque esta expresión gráfica sigue levantando la voz contra el poder desmedido, ahora es la propia masa social (cual Fuenteovejuna) la que lanza el guante y reta a las autoridades con memes que se propagan profusa y rápidamente. Crear una caricatura supone una rutina mucho más cuidada para pensar la idea y llevarla al papel, de ahí la calidad absolutamente superior que la separa de los memes, aunque los haya algunos muy ingeniosos. Los caricaturistas suelen firmar sus trabajos y recibir a veces un pago como editorialistas gráficos; los memes, en cambio, son anónimos (lo que no necesariamente significa cobardía), no buscan crédito, en el desahogo está la satisfacción.

Actualmente el mundo retoza y se revuelve entre los pliegues de la red de redes que es internet. Hasta los medios impresos, en ocasiones adquiridos más por nostalgia que por necesidad, han migrado a plataformas digitales. Pero no siempre los contenidos del humor gráfico evolucionan con la tecnología: a veces privilegian la cantidad sobre la calidad al suplir la crítica, el ingenio, la sensibilidad y, sobre todo, la solidaridad del humor, con la grosería, lo vulgar, la burla sin sentido y el chiste fácil, misógino, homofóbico y escatológico.

La comicidad y el humor son de naturaleza distinta: una busca el cosquilleo momentáneo, la carcajada fugaz, blancos fáciles del chiste común y un más o menos afortunado juego de palabras o de imágenes; el otro desenmascara y denuncia, lleva dentro una idea cautivadora que pretende fijarse en la memoria y que no se regodea en el acto simple y vacío de reír por reír. Lo cómico es chistoso e, incluso, una distracción, como demostró el crítico francés Henri Bergson en su ensayo sobre la risa. En 1945, el escritor gallego Wenceslao

Fernández Flórez, en su discurso de ingreso como miembro de la Real Academia Española, dijo que si una vez acallada la risa de un sujeto riente no ha quedado en su espíritu una emoción o un pensamiento, es probable que riera de un buen chiste pero no lo tocó el humor. Cómplice del agraviado, el humor tampoco se relaciona con la burla cruel, el cinismo, el sarcasmo o la ironía amarga que ridiculizan desde una posición de superioridad. Cuando un débil se burla de un poderoso hay un dejo de placer y de «justicia divina», pero es indignante cuando sucede al revés.

Los memes no solo son un divertimento que comparten los internautas, sino también una visión comunitaria sobre el acontecer social que compete a todos. Se trata de una forma novedosa de empoderamiento social que gana terreno en la pugna por un pleno Estado de derecho, que coloca en el ojo del huracán de la opinión pública el desempeño de los gobernantes, que denuncia toda clase de despropósitos y que pone en entredicho cualquier afán tendencioso de volver hegemónicos irregularidades o intereses creados. Implacables, los memes no otorgan a sus protagonistas el beneficio de la duda ni el derecho a réplica, por eso la clase política ve en ellos un peligro potencial: en Chiapas, por ejemplo, el diputado Noé Castañón Ramírez, del PRI, presentó en noviembre de 2012 una propuesta de ley denominada Ley de Agenda Digital para el estado de Chiapas, que pretendía regular el uso de las redes sociales, y cuyo antecedente próximo fue la administración del polémico gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien a finales de agosto de 2011, en un excesivo control de autoridad, detuvo a una periodista y a un profesor de matemáticas acusados de «terrorismo y sabotaje» y de «provocar pánico entre la sociedad veracruzana» mediante mensajes en las redes sociales que advertían sobre posibles ataques de grupos criminales a escuelas locales. Otro conato de censura fue el de la diputada local del Partido Verde Ecologista de Sonora, Selma Guadalupe Gómez Cabrera, quien en junio de 2015 propuso al Congreso Estatal una Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Estado, cuyo fin era penalizar los memes contra políticos bajo el argumento de difamación y violación a la vida privada. Una iniciativa más presentada en octubre de 2015 por el entonces senador priísta por Hidalgo Omar Fayad pretendía sancionar a los usuarios de las redes sociales que difundieran «indebidamente» videos, audios, memes o cualquier mensaje con información privada «sin autorización» de los involucrados. Obviamente, como cabeza de hidra, ante el intento de amordazar la opinión pública surgieron más memes bajo las etiquetas, por ejemplo, de «#LadyMeme» o «#LadyCensura» y «#LeyFayad»:



Hace casi 60 años, el «Vate yucateco» Ricardo López Méndez escribió a México un credo enardecido que sigue aguijoneando el alma:

Tú hueles a tragedia, tierra mía,
y sin embargo ríes demasiado,
acaso porque sabes que la risa
es la envoltura de un dolor callado.¹⁵

En medio de la perversidad y la tragedia que atraviesa el país, hay una fuerza vital que mueve a los mexicanos hacia el tan esperado cambio: la fe en la historia y en el ser humano. Mientras tanto, el humor está ahí, aligerando adversidades y hermanando a todos. Quizá en esa risa, «envoltura de un dolor callado», se exorcicen los demonios y un día los memes, patrimonio cultural de los vencidos, constituyan, como la caricatura política, un género reconocido de crítica social. ☐

15. R. López Méndez: «Credo» en *Poesía y pensamiento*, FCE, Ciudad de México, 2004, p. 80.

Bienestar del tiempo: respuesta latinoamericana frente a la crisis socioecológica

HANS-JÜRGEN BURCHARDT

La agudización de los problemas socioecológicos obliga a reorientar los esquemas de crecimiento intensivos en recursos naturales. En tal sentido, el índice de vida saludable y bien vivida (IVSBV), construido en Ecuador, aporta ideas alternativas para medir la calidad de vida. La meta de discutir las ideas sedimentadas de bienestar y los significados de su medición, así como la introducción de la variable «tiempo» como determinante del desarrollo social, buscan avanzar en un modelo socioecológico.

América Latina se enfrenta en la actualidad a diferentes crisis. La *cuestión social* y la *ecológica* surgen como dos problemáticas centrales, que serán determinantes no solo para la región, sino también para el futuro de toda la humanidad. La dificultad particular radica en que hasta hoy casi todas las respuestas frente a cuestiones sociales –como la pobreza, el trabajo informal o la desigualdad– están orientadas al crecimiento económico; esto incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve un esquema global para abordar los grandes desafíos del siglo XXI. Pero al mismo tiempo, no cabe duda de que este

Hans-Jürgen Burchardt: es profesor de Relaciones Internacionales e Intersociales en la Universidad de Kassel y director del Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS, por sus siglas en inglés). Página web: <www.burchardt.uni-kassel.de>.

Palabras claves: bienestar del tiempo, buen vivir, índice de vida saludable y bien vivida (IVSBV), poscrecimiento, Ecuador.

Nota: traducción del alemán de Mariano Grynszpan.

impulso hacia el crecimiento promovido por el modelo de desarrollo imperante conduce al colapso ecológico del planeta. A la luz de este dilema, adquiere sentido la idea de que el bienestar basado en un crecimiento material tiende más a crear pobreza para muchos que una buena vida para todos. En lugar de proponer nuevas formas sostenibles o coloreadas de verde, parece necesario establecer alternativas frente al concepto actual de desarrollo.

Esto obliga, por un lado, a repensar esencialmente la noción de bienestar y calidad de vida y, por el otro, a reflexionar sobre cómo es posible convertir ideas alternativas de desarrollo en políticas concretas. Existe un enfoque interesante, que intenta medir el bienestar para determinar el nivel de desarrollo social de los países. Los mecanismos mencionados no solo buscan obtener información concreta sobre la calidad de vida de las personas, sino que también se apoyan en el alto valor orientativo que tienen los indicadores estadísticos tanto para la política como para los individuos. Estos datos se consideran científicamente fundamentados, neutros, racionales y, por ende, adecuados para disponer las pautas para la vida futura a partir de referencias centrales actuales.

Para establecer definiciones nuevas y alternativas del bienestar, se adoptaron especialmente las propuestas de la Comisión Stiglitz¹, que aportan interesantes sugerencias pero sin abandonar el mantra del crecimiento económico. Precisamente a esto apunta el índice de vida saludable y bien vivida (IVSBV) elaborado en Ecuador². Este sintetiza los conceptos de la filosofía aristotélica con la noción del «buen vivir» –basada en la cosmovisión indígena, ampliamente popularizada en muchos países latinoamericanos y que incluso se ha convertido en parte en una razón de Estado y en un derecho constitucional– e introduce sobre esta base el *tiempo* como unidad de medida central para determinar la calidad de vida. Así, una vez más, América Latina genera un impulso esencial para la teoría del desarrollo y la investigación sobre el bienestar. En las siguientes líneas se expone históricamente el desarrollo del concepto de bienestar y el significado de su medición, se debate la introducción de la categoría *tiempo* como unidad de medida del bienestar, se presenta el criterio metodológico del IVSBV y se examina cuáles son las propuestas planteadas en relación con ese índice para resolver las crisis actuales.

1. Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi: *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*, 2009.

2. René Ramírez Gallegos: *La vida (buena) como riqueza de los pueblos. Hacia una socioecología política del tiempo*, El Viejo Topo, Barcelona, 2012.

■ Con el poder de los números, hacia una alternativa de desarrollo

Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos nació la idea de una contabilidad nacional con el foco reorientado desde los ingresos hacia la producción. Dirigida inicialmente a lograr una planificación eficiente en el terreno bélico, la conceptualización de aquel indicador fijó al mismo tiempo las bases del actual paradigma de crecimiento: con el PIB, el crecimiento económico se constituyó a partir de la segunda mitad del siglo xx en un parámetro válido en todo el mundo para medir el desarrollo y el bienestar, sin que ninguno de estos conceptos fueran debatidos previamente en profundidad.

Desde entonces, el bienestar se equipara fundamentalmente a la producción de bienes materiales y servicios. Se otorga así a las ciencias económicas y a sus indicadores la potestad de definir qué se entiende por desarrollo y bienestar. La fórmula utilizada es sencilla: mediante una asignación de recursos considerada como óptima, el mercado genera una alta producción económica de bienes, que aumentan la riqueza material; el individuo satisface sus necesidades de consumo gracias a la variedad de oferta; una mayor producción de bienes significa mayor bienestar para el individuo; el crecimiento económico aumenta el grado de libertad individual, la sensación subjetiva de felicidad y el bienestar para todos desde un punto de vista objetivo³.

Un indicador central es el dinero o su poder adquisitivo real. Por lo tanto, para efectuar la medición empírica del bienestar se utilizan parámetros como ingresos, producto interno o propensión al consumo. Gracias a su carácter altamente operativo, este enfoque es recibido con beneplácito por quienes se dedican a las estadísticas. Lo opuesto al bienestar es la pobreza, es decir, la escasez de recursos materiales, que reduce el grado de libertad y en casos extremos impide satisfacer las necesidades básicas (como el hambre).

3. Esta concepción del bienestar también fue popularizada en los inicios de la Ilustración europea por la ética utilitarista de Jeremy Bentham. Con su *greatest-happiness-principle* (que postula que el único objetivo de un comportamiento racional es proporcionar la mayor felicidad al mayor número posible de personas), justificó una idea casi mecánica de la felicidad individual, que no se medía en términos cualitativos sino meramente cuantitativos y que se orientaba cada vez más hacia lo material. Ver Martha C. Nussbaum: «Who is the Happy Warrior? Philosophy, Happiness Research, and Public Policy» en *International Review of Economics* vol. 59 N° 4, 2012.

Desde luego, siempre ha habido críticas a esta concepción. Pronto pudo demostrarse empíricamente que esa supuesta relación transparente entre ingresos y bienestar era más endeble de lo que se presumía y que, a partir de un determinado nivel de ingresos, el crecimiento material ya no va acompañado de un aumento análogo en el bienestar⁴. Una alternativa importante para medir el desarrollo sigue siendo hasta hoy el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se basa en el enfoque basado en las capacidades (*capability approach*)⁵. Este enfoque intenta sondear las capacidades (*capabilities*) sociales existentes en el individuo para alcanzar el mayor grado posible de libertad activa. Las libertades mensurables y promotoras de capacidades son la democracia, las instituciones que compensan los efectos del mercado, la igualdad de oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la protección social. Se tienen en cuenta aspectos objetivos y subjetivos del bienestar, y se asigna una clara responsabilidad para el desarrollo tanto a las condiciones contextuales (la economía, la política y el Estado) como al individuo (que debe aprovechar las oportunidades concedidas). Este enfoque ha influido significativamente hasta hoy en muchos otros esfuerzos dirigidos a determinar conceptos y métodos de medición alternativos para el desarrollo, lo que incluye también la importante y ya mencionada propuesta de la Comisión Stiglitz.

Pese a tales iniciativas, el nivel de desarrollo y bienestar de todos los países del mundo sigue clasificándose hasta hoy en primer lugar a través del PIB. La influencia del *world's most powerful number*⁶ y el paradigma de crecimiento subyacente se mantienen intactos y confirman al mismo tiempo el poder normativo de las estadísticas sobre la política y la sociedad.

La ineficacia social de los enfoques alternativos mencionados también radica en que –más allá de numerosos impulsos en otros sentidos– aún adoptan las nociones eurocéntricas de desarrollo. Por un lado, se aferran a la concepción liberal del sujeto, centrada en una persona primordialmente racional y en su libertad individual. Se ve así la influencia de la teoría liberal de la justicia, que pregona la creación de oportunidades iguales para todos bajo el lema

4. Richard Easterlin: «Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence» en Paul A. David y Melvin W. Reder (eds.): *Nation and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramowitz*, Academic Press, Nueva York, 1974.

5. A. Sen: *Resources, Values and Development*, Harvard University Press, Oxford, 1984; M.C. Nussbaum: *Woman and Human Development: The Capabilities Approach*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

6. Lorenzo Fioramonti: *Gross Domestic Problem: The Politics Behind the World's Most Powerful Number*, Zoteró, Londres-Nueva York, 2013.

«igualdad por medio de la libertad». En otras palabras, cada quien sigue siendo el herrero que forja su propio destino, pero tiene derecho a que le den un martillo y un yunque. No se consideran las relaciones interpersonales, los colectivos y grupos sociales o étnicos, ni las identidades. Por otro lado, estos enfoques continúan priorizando sin más ni más el crecimiento material y ese impulso inherente al capitalismo como objetivo central de desarrollo, mientras que otras dimensiones (como el ambiente o las desigualdades internacionales) quedan relegadas a un segundo plano. Para crear una alternativa a la noción imperante de desarrollo y bienestar que también sea mensurable y que aborde el desafío de la crisis socioecológica global sin descuidar su grado de eficacia, es necesario que resulte más sensible al contexto: su categorización debe deshacerse de la concepción liberal del sujeto y del economicismo, sin renunciar por ello a una operatividad precisa. Justamente de esta tarea se encarga el IVSBV.

Desde el punto de vista teórico, este índice se orienta al enfoque aristotélico de la buena vida como acción exitosa: la *eudaimonia*. Según Aristóteles, el individuo puede alcanzar la buena vida si ha logrado satisfacer sus necesidades materiales básicas, conserva su salud y dedica el tiempo libre disponible al ocio, la reflexión e introspección, las relaciones interpersonales, el amor y el erotismo y la participación en la vida pública. En lugar de *vivir cada vez mejor* (es decir, tener más), lo que se busca es la *buena vida* en sí misma. La *eudaimonia* no se constituye entonces mediante bienes u objetivos concretos, sino que es una forma de praxis social. Por otra parte, el IVSBV se nutre de la cosmovisión indígena del «buen vivir», que otorga una gran importancia a la relación entre lo individual y lo colectivo y, además, aboga por un vínculo más equilibrado entre el ser humano y la naturaleza: apunta así a satisfacer las necesidades materiales, sociales y espirituales de todos los miembros de una comunidad, sin que eso vaya en detrimento de otras personas ni de los recursos naturales⁷.

Con esta síntesis, el IVSBV se distancia claramente de aquello que fundamenta el concepto imperante de desarrollo y bienestar: al constructo liberal del individuo y el utilitarismo, opone en primer lugar una noción del sujeto que vuelve a pensar en la persona como un ser social y situado en el contexto de su ambiente. El bienestar, las relaciones sociales y el ambiente sano están así ligados de manera indisoluble. Solo el que vive bien –y en

7. V., por ejemplo, Antonio Luis Hidalgo Capitán, Alejandro Guillén García y Nancy Rosario Déleg Guazha (eds.): *Sumak kawsay yuyai. Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre sumak kawsay*, FIUCUHU / CIM / PYDLOS, Huelva-Cuenca, 2014.



© Nueva Sociedad / Alina Najlis 2018

Alina Najlis es ilustradora y diseñadora gráfica (FADU-UBA). Vivió en París becada por la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de París para desarrollar allí un proyecto editorial personal. Es docente en la Universidad de Buenos Aires desde 2010. Como ilustradora, ha publicado libros y diversidad de notas para medios impresos y digitales internacionales. Página web: <www.alinanajlis.tumblr.com>.

comunidad– puede ser feliz y tener bienestar. Precisamente por este motivo, el aumento permanente de bienes materiales deja además de ser considerado como el factor primordial para

**El aumento permanente
de bienes materiales deja
de ser considerado
como el factor primordial
para medir el bienestar ■**

medir el bienestar, lo que implica invalidar el paradigma de crecimiento.

Por lo tanto, las variables utilizadas por el IVSBV para medir el bienestar no determinan la felicidad individual con un criterio estático (por ejemplo, mediante cantidades materiales o de otro tipo), sino que buscan reflejar el carácter de su origen: se trata de explorar los ámbitos donde se genera bienestar, no de medir un objetivo alcanzado. En tal sentido, el IVSBV se atreve a diferenciarse de los enfoques eurocéntricos y evita establecer metas universales para el desarrollo o proponer caminos para el bienestar personal, ya que esos modelos se definen (o deben definirse) a través de los individuos y en las sociedades mismas.

Si bien se destaca expresamente la importancia de las condiciones de vida externas, desde esta perspectiva los esfuerzos en pos de la seguridad material y la salud van acompañados de otros campos dirigidos a la generación de bienestar: *tiempo* dedicado a a) trabajo autodeterminado, b) ocio y educación, c) relaciones sociales (amor, amistad) y d) participación en la vida pública. La (re)producción de estos campos representa en cada caso un bien autónomo para el IVSBV. Contrariamente a lo que ocurre con la asignación realizada por el mercado, estos bienes se apoyan en el reconocimiento mutuo y la responsabilidad social. Son vitales para los seres sociales, pero solo pueden disfrutarse de manera conjunta. Se basan en el reconocimiento y la motivación intrínseca, por lo que la identidad, la comunicación, los sentimientos y la empatía son componentes importantes. Se trata entonces, principalmente, de relaciones interpersonales genuinas como la amistad y la cooperación, el erotismo, la familia, el compromiso cívico o la participación pública. Dado que son inherentemente recíprocas, se las denomina *bienes relacionales*⁸. De este modo, el IVSBV designa campos precisos en los que el bienestar se genera y se torna mensurable dentro de su entorno. La buena

8. La definición de estos cuatro «bienes relacionales» refleja un amplio consenso contemporáneo acerca de las dimensiones que hoy son consideradas importantes para una buena vida. El concepto de «bienes relacionales» fue desarrollado y presentado casi al mismo tiempo, en 1986, por la filósofa Martha Nussbaum y el sociólogo Pierpaolo Donati y luego fue utilizado en 1987 y 1989 por los economistas Benedetto Gui y Carole Uhlaner, respectivamente. Luigino Bruni: *Reciprocity, Altruism and the Civil Society: In Praise of Heterogeneity*, Routledge, Londres-Nueva York, 2008.

vida adquiere así un carácter operativo⁹. En lugar del dinero, aparece ahora el *tiempo* como indicador central del bienestar. La pregunta ya no es cómo queremos vivir, sino cómo queremos pasar nuestro tiempo.

■ Es tiempo de realizar una nueva medición basada en el tiempo

La aproximación a la categoría *tiempo* implica analizar un fenómeno complejo, que hasta ahora ha sido subestimado desde las ciencias sociales. En primer lugar, parece importante reconocer que el tiempo no es una magnitud física ni naturalizada, como siguen sosteniendo hoy algunos referentes de las ciencias naturales o de la filosofía. En su ensayo sobre el tema, Norbert Elias ya insistía en que nuestra concepción al respecto se basa en una falsa dicotomía entre naturaleza y cultura, que nos impide identificar el carácter profundamente social del tiempo¹⁰. Desde una perspectiva descolonial, Walter Mignolo llega a la misma conclusión en torno de esta categoría y señala que desde el siglo XVIII se han establecido dos diferenciaciones centrales de la Modernidad occidental como dualidad: por un lado, la de la tradición y lo moderno; por el otro, la de la naturaleza y la cultura¹¹. El tiempo es, más bien, una institución social creada a lo largo de más de cuatro milenios de la humanidad. Nuestros actuales regímenes del tiempo surgieron históricamente a medida que las diferentes sociedades fueron conformando el Estado. La introducción de nuevos métodos para medir el tiempo ayudó a coordinar y optimizar el accionar económico y político; además, racionalizó y disciplinó la organización de la convivencia humana. No cabe duda de que la nueva y más precisa medición del tiempo también significó una importante contribución para el nacimiento del capitalismo: promovió en el ámbito laboral la generalización del trabajo asalariado, separó el tiempo de trabajo de la vida privada y fomentó la diferenciación de las sociedades.

Sin embargo, el tiempo ahora tiene un efecto tan perverso que solemos percibirlo como algo externo. Concebido antiguamente como un instrumento para armonizar la convivencia, hoy parece haberse convertido para muchos (por ejemplo,

9. No se trata en este caso de sostener el empirismo, sino de aprovechar principalmente la fuerza normativa de los resultados empíricos para otorgar a las mediciones cuantitativas del bienestar una función de puente, útil para transformar las concepciones del desarrollo. Es una postura que se adopta deliberadamente, considerando que el desarrollo de las categorías y la elección de los indicadores están tan preestructurados en este índice como en la medición economicista del bienestar, y que los indicadores utilizados también por el IVSBV (como los años de escolaridad, el coeficiente de Gini, etc.) solo pueden representar la realidad existente de una manera limitada o incluso distorsionada.

10. N. Elias: *Sobre el tiempo*, FCE, Ciudad de México, 2010.

11. Ver W.D. Mignolo: *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*, Duke University Press, Durham-Londres, 2011.

por la aparente escasez o aceleración) en la batuta autónoma del desarrollo personal. La categoría *tiempo* y la coacción externa de su institución social se han transformado en una pauta de autoacción que abarca toda la vida¹².

En realidad, el tiempo es una categoría creada por el ser humano y sigue siendo configurable. Si se tiene en cuenta que su disponibilidad ejerce una evidente influencia sobre el estado personal y social, el tiempo medible aparece entonces como un factor ideal para redefinir el bienestar y el desarrollo. Además, dada la relevancia para cualquier práctica cotidiana, las propuestas dirigidas a modificar el régimen del tiempo conllevan una orientación de las acciones tanto en lo que respecta al individuo como a la política.

La idea de incorporar el tiempo como componente en las teorías económicas y la medición del bienestar no es nada nuevo. Por lo general, ocupa una posición central el lema de vida de Benjamín Franklin: «El tiempo es dinero». Se piensa

Por lo general, ocupa una posición central el lema de vida de Benjamín Franklin: «El tiempo es dinero» ■

el tiempo como factor de costo de oportunidad, en un marco en el que el individuo decide usarlo para ganar dinero o para realizar actividades no productivas, en cuyo caso renuncia al crecimiento material. En tal sentido, el tiempo libre sigue siendo considerado una variable depen-

diente de la esfera económica. Solo es posible «comprarlo» si se aumenta la productividad o se renuncia a la dimensión material. Cabe mencionar asimismo a Robert Goodin, quien intenta integrar la magnitud al cálculo del bienestar mediante el concepto de *tiempo discrecional*¹³. Sin embargo, este enfoque también se basa en una noción liberal del sujeto y se apoya en gran medida en indicadores económicos para su operatividad; lo mismo puede decirse de otros aportes recientes y muy innovadores, surgidos de América Latina¹⁴.

En el IVSBV, en cambio, el tiempo se introduce como variable autónoma. A través de los bienes relacionales, el índice define campos precisos para medir el bienestar: son las cantidades de tiempo que se requieren para asegurar las necesidades básicas y materiales (descanso, trabajo, salud), así como la

12. Ver Hartmut Rosa: *Alienation and Acceleration: Towards a Critical Theory of Late-Modern Temporality*, NSU Press, Malmö-Aarhus, 2010.

13. R.E. Goodin, James Mahmud Rice, Antti Parpo y Lina Eriksson: *Discretionary Time: A New Measure of Freedom*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

14. V., por ejemplo, Evelyn Benven, Elizabeth Rivera y Varinia Tromben: «Propuesta de un indicador de bienestar multidimensional de uso del tiempo y condiciones de vida a Colombia, el Ecuador, México y el Uruguay» en *Revista de la Cepal*, 2016.

generación colectiva y el disfrute de los rubros ya mencionados: trabajo autodefinido, ocio y educación, relaciones sociales y participación en la vida pública. Por lo tanto, el punto de partida del IVSBV consiste en incorporar estos bienes como variables y asignar a las relaciones sociales un rol importante dentro de la medición del bienestar. El dinero deja de ser el principal indicador del bienestar y el eje central de la evaluación, que adopta como unidad de valor y análisis la cuestión del tiempo disponible destinado a intereses sociales (y ecológicos).

Aunque lamentablemente no es posible ofrecer aquí una descripción metodológica detallada del IVSBV, se puede acceder a ella con facilidad. En líneas generales deben subrayarse las características del logaritmo presentado por el IVSBV, que mediante la medición del tiempo requerido permite exponer matemáticamente hasta qué punto los individuos y los grupos pueden generar bienes relacionales.

El IVSBV se destaca, además, por varias innovaciones: dado que el trabajo ya no se mide únicamente en función de un resultado que asegure la subsistencia, sino también por su calidad como fuente autónoma de bienestar, surgen nuevas opciones para establecer normas en materia laboral o nuevas estrategias dirigidas a organizar los puestos de trabajo de una manera más justa para las personas. Aparece asimismo la posibilidad de evaluar el trabajo y las posiciones sociales conexas a través de la determinación de los propios horarios (en lugar de hacerlo sobre la base de los ingresos) y de revalorizar socialmente las actividades dotadas de una alta autonomía respecto al tiempo.

Por otra parte, en el IVSBV adquieren una visibilidad empírica las actividades reproductivas (realizadas en general por mujeres y no remuneradas). Esto incluye, por ejemplo, los trabajos domésticos y de cuidados, que suelen quedar relegados en los análisis pese a que son determinantes para mantener el bienestar o aumentarlo. Se reconoce de manera explícita que las relaciones de género subyacen constitutivamente a las relaciones productivas. Para revalorizar las prestaciones de reproducción que hasta hoy han sido subestimadas, tal vez lo ideal sea llevar un registro sistemático de las porciones de tiempo en las que se cuida y se preserva la vida del ser humano y cotejarlas con otros bienes relacionales¹⁵.

15. En 11 países latinoamericanos se lleva a cabo desde hace años la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, que proporciona una medida estadística de la carga total de trabajo. Según los resultados obtenidos en la medición, que tiene en cuenta tanto la actividad remunerada como la no remunerada, las mujeres destinan en total mucho más tiempo que los hombres al trabajo, aunque aparecen registradas con más frecuencia como «inactivas en el mercado laboral». V. CEPALSTAT: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009-2013; Cepal: *Panorama social de América Latina 2014*, Cepal, Santiago de Chile, 2014.

Con datos disponibles del país y encuestas de hogares de realización propia, la medición de bienestar del IVSBV fue sometida a un ensayo práctico en Ecuador y cotejada con otros métodos convencionales. El nuevo procedimiento confirmó su viabilidad en los sondeos y arrojó interesantes resultados; si se comparan las mediciones que operan con el indicador dinero o tiempo, surgen diferencias significativas. Los ingresos pierden su efecto determinante sobre el bienestar personal: dentro de la población ecuatoriana, el ingreso promedio del 10% más rico en términos de tiempo es tres veces más bajo que el del 10% más rico en términos de dinero. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que los mayores ingresos están vinculados a jornadas extensas

**No se trata aquí de sostener
el lema «pobre, pero feliz»
y marcar una disociación
entre el bienestar y
la situación material ■**

dedicadas a un trabajo caracterizado por la falta de autonomía, que limita la generación de bienes relacionales.

Desde luego, no se trata aquí de sostener el lema «pobre, pero feliz» y marcar una disociación entre el bienestar y la situación material. Por el contrario,

la evaluación destaca en repetidas ocasiones que se requiere una adecuada base material (de ingresos) para lograr el bienestar; allí donde no existe esa base, el nivel suele decaer drásticamente por las escasas posibilidades de asegurar la subsistencia. Lo que sí hace el hallazgo es debilitar la consabida relación entre ingreso y bienestar. Encima hay un resultado preocupante para las capas adineradas: del 20% con mayores ingresos en Ecuador, apenas una sexta parte pertenece a la franja que ha alcanzado el máximo nivel de bienestar en términos de tiempo.

En promedio, según el IVSBV, la población del país andino disfruta de bienestar solo 11 años, lo que representa alrededor de 14% de su tiempo de vida. Pueden observarse aquí importantes desigualdades: el 10% más rico (en términos de tiempo) dispone semanalmente de 16 veces más tiempo para una buena vida que el 10% más pobre. La mayor distancia se registra en la participación en la vida pública: el primer decil muestra una intervención más de 35 veces superior a la del último, lo que constituye un hallazgo notable no solo para la teoría de la democracia.

Hay dos factores que limitan significativamente la ampliación del bienestar. En primer lugar, las *condiciones laborales precarias*. Gran parte de la población activa –sobre todo, en la economía informal– desempeña trabajos poco calificados y con alta carga horaria, que a duras penas aseguran la subsistencia y

casi no dejan espacio para generar bienes relacionales. En segunda instancia y muy estrechamente vinculadas con el punto anterior, cabe mencionar las diferentes formas de exclusión y discriminación (también en el plano inmaterial, a partir de cuestiones geográficas, étnicas, de género, etc.), que acentúan las *desigualdades sociales* existentes e impiden generar bienes relacionales: dentro de la población ecuatoriana, el decil que más sufre la escasez de tiempo dispone de apenas 4% del tiempo de su vida para generar bienes relacionales.

Seguramente esto también explica por qué el IVSBV aún resulta poco conocido en América Latina. Allí donde las condiciones de vida y de trabajo son precarias o hasta ponen en peligro la subsistencia de amplias franjas de la población, parece desmedido abogar por más tiempo para el ocio. Además, a pesar de que a escala internacional la visión del «buen vivir» subyacente al IVSBV genera empatía, logra una amplia adhesión y se transforma en un punto de referencia para propuestas políticas alternativas, en su región de origen se enfrenta a una fuerte presión. En Ecuador, incluso, el concepto del buen vivir fue instrumentalizado hace tiempo por la política, pero luego pasó a convertirse en cierta medida en lo opuesto y hoy tiende a legitimar una idea de desarrollo que antepone el crecimiento económico al medio ambiente y suele respaldar la explotación extrema de materias primas¹⁶.

Por cierto, este vaciamiento conceptual y las contradicciones concretas no invalidan el IVSBV, sino que confirman su argumento clave: la medición de bienestar propuesta en el índice presupone sin lugar a dudas un apoyo material capaz de satisfacer las necesidades básicas. Si se tiene en cuenta a su vez que la población activa perteneciente a las capas medias prácticamente se ha triplicado en el planeta entre 1991 y 2015¹⁷, debería haber una resonancia considerable para propuestas de la buena vida tanto dentro como fuera de América Latina. El tiempo puede transformarse en una «segunda moneda», reconocida a escala internacional como apta para medir el bienestar.

■ Por quién doblan las campanas: perfiles de una nueva política del tiempo

Del IVSBV se deriva un programa concreto: la «política activa del tiempo». Se trata de una política que busca incidir de manera pública y participativa

16. H.-J. Burchardt, Rafael Domínguez, Carlos Larrea y Stefan Peters (eds.): *Nada dura para siempre. Neo-extractivismo tras el boom de las materias primas*, UASB / ICDD, Quito, 2016.

17. OIT: *La transición de la economía informal a la economía formal. Conferencia Internacional del Trabajo. 104.ª reunión, 2015*, OIT, Ginebra, 2015.

en las estructuras de tiempo de las personas y que, por supuesto, debe afirmar la concepción de esa magnitud como construcción social. Es necesario que la política en cuestión no se apoye únicamente en los acompañamientos estructurales, los objetivos institucionales o sus respectivos discursos; debe enfocarse en las prácticas del mundo real y velar por que haya instrumentos dirigidos a un nuevo régimen del tiempo que encuentren eco en el terreno cultural y como práctica cotidiana, que sean adoptados por los individuos y de forma personal, y que se apliquen en la acción. La política del tiempo debe ejecutarse simultáneamente en dos planos entrelazados: por un lado, a través de marcos institucionales (como programas estatales); por el otro, mediante la apertura social de nuevos espacios facilitadores orientados al mundo real, que se centren en la autodeterminación respecto al tiempo y en la relación entre el ser humano y la naturaleza. Una política del tiempo con tales características puede crear los valores culturales sin los cuales resulta imposible establecer un nuevo paradigma de desarrollo, que vaya más allá del crecimiento económico.

El trabajo informal y la desigualdad social significan una limitación de gran importancia para el bienestar en términos de tiempo ■

Habida cuenta del caso ecuatoriano, que revela que el trabajo informal y la desigualdad social significan una limitación de gran importancia para el bienestar en términos de tiempo, se torna esencial promover condiciones laborales dignas. En América Latina esto implica, sobre todo, reducir el alto nivel de informalidad, que no solo impide el bienestar personal, sino que además es el principal obstáculo para aumentar la productividad y bloquea así cualquier posibilidad de desarrollo económico que apunte más allá de la explotación contaminante de materias primas¹⁸. Un objetivo central de la política del tiempo radica entonces en reducir a la mitad, en un plazo de 10 años, la tasa regional de trabajo informal.

Para lograr esto, es imprescindible revalorizar las actividades de cuidado. Mientras tales prestaciones deban ser proporcionadas por particulares,

18. «La productividad laboral, medida como el PIB producido por hora trabajada, ha ido disminuyendo durante la pasada década en América Latina, en relación con otras economías más desarrolladas. En promedio, en 2016 América Latina representaba una tercera parte de la productividad laboral de los Estados Unidos, una proporción inferior a la registrada hace 60 años. Esta situación contrasta llamativamente con el rendimiento de los países asiáticos de alto crecimiento, como Corea y más recientemente China, o incluso frente a los exportadores de materias primas como Australia, donde la productividad relativa se mantuvo estable». OCDE, Cepal y CAF: *Perspectivas económicas de América Latina 2017. Juventud, competencias y emprendimiento*, OECD Publishing, París, 2016.

muchas familias seguirán recurriendo al ámbito privado y al trabajo doméstico barato. La política del tiempo exige ampliar la infraestructura pública (mejorar el cuidado de los niños y de las personas de edad avanzada) y ofrecer un respaldo sociopolítico a las actividades reproductivas (fortalecer el reconocimiento moral y material a las prestaciones de asistencia). Así como el IVSBV señala que el mayor bienestar material muchas veces va acompañado de una menor disponibilidad de tiempo por el aumento de la carga horaria en el trabajo, las personas que viven en América Latina con altos ingresos y protección social deben saber que una reducción de la jornada laboral puede dar lugar a una economía más respetuosa de los recursos y una mayor calidad de vida¹⁹.

Más allá de estas dos medidas, el IVSBV identifica numerosas áreas de aplicación de una política activa del tiempo. Aunque no es posible explicarlas aquí en detalle, cabe decir que se apunta, por ejemplo, a fomentar relaciones sociales (con políticas en materia de género, familia y juventud), promover una formación de alta calidad (con políticas educativas y culturales) y fortalecer el involucramiento en la vida pública mediante diversas formas de participación.

Parece bastante lógico que esta nueva concepción del bienestar no tenga aún un impacto amplio. En definitiva, los regímenes tradicionales vinculados al tiempo se apoyan en estructuras extremadamente complejas, cuyos cambios conmocionan a poderosas instituciones. Sin embargo, cada vez más gente comprende que ya no se trata de luchar para mejorar su vida y la de sus seres queridos, sino de asegurar ante todo la supervivencia de la humanidad (y, con ella, el futuro de los propios hijos). Las cuestiones ambientales han dejado de ser la expresión de una buena voluntad esclarecida, ahora son la *realpolitik*. El IVSBV llega entonces en el «tiempo preciso». Orienta el desarrollo hacia objetivos no materiales (por ende, con un mayor respeto hacia los recursos naturales), sin entrar en contradicción con las necesidades económicas para el bienestar. Porque su modelo no socava el derecho de los desposeídos de este mundo a obtener mejores condiciones materiales, sino que ofrece a

19. Desde hace años se conoce la correlación positiva entre las jornadas laborales más largas y el uso más intensivo de recursos/energía. Tim Jackson y Peter Victor calcularon un modelo de crecimiento bajo/nulo, en el que el tiempo de trabajo podría reducirse en 15% para 2035 sin que eso implique una gran pérdida material. V. Anders Hayden y John M. Shandra: «Hours of Work and the Ecological Footprint of Nations: An Exploratory Analysis» en *Local Environment* vol. 14 N° 6, 2009; T. Jackson y P. Victor: «Productivity and Work in the 'Green Economy': Some Theoretical Reflections and Empirical Tests» en *Environmental Innovation and Societal Transitions* vol. 1 N° 1, 2011.

los pudientes la oportunidad de aumentar la propia calidad de vida sin que su excesivo consumo de recursos impida alcanzar mejoras a otras personas (y, en última instancia, a ellos mismos); en lugar de adoptar una posición moralizante, promete un incremento del bienestar para todos, lo que facilita su inserción y aplicación en el plano de la política y del mundo real. Para la mayoría de nosotros, la idea de destinar más tiempo a la familia, los hijos, los amigos, el ocio, la participación pública y la naturaleza ha sido hasta hoy algo de carácter muy personal, pero que no resulta inherente a las reivindicaciones políticas. Es necesario que cambiemos esta cosmovisión para que las campanas anuncien una buena vida. ☐

AMÉRICA LATINA HOY
Revista de Ciencias Sociales

Agosto de 2017

Salamanca

Vol. 76

VOTO EXTERNO: Ausentes, pero representados: mecanismos institucionales de representación de emigrantes en América Latina y el Caribe, **Pau Palop García**. Contribuyendo a la democracia en países de origen: el voto externo de los migrantes andinos, **Anastasia Bermúdez, Jean-Michel Lafleur y Ángeles Escrivá**. Argentinos en el exterior: desafíos actuales de su inclusión política en el país de origen, **Ana Margheritis**. Avances en la implementación del voto extraterritorial mexicano: entre dudas y certezas, **Leticia Calderón Chelius**. Cómo explicar la diversidad y variación en el voto de los peruanos en el exterior, **Ángeles Escrivá**. VARIA: Los orígenes del Frente para la Victoria en Argentina (1988-2003), **Pamela Sosa**. Educación física y retorno a la democracia en Uruguay: del cuerpo a la conciencia, **Cecilia Seré Quintero y Alexandre Fernandez Vaz**. NOTICIAS DE LIBROS.

Disponibles a texto completo todos los artículos de *América Latina Hoy* en

<www.americalatinahoy.es>.

América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales es una publicación cuatrimestral del Instituto de Iberoamérica con Ediciones Universidad de Salamanca.

Nueva civilización política, barbarie económica

JOSÉ FERNÁNDEZ VEGA

Dos visiones diferentes frente al neoliberalismo. Dos posicionamientos muy distintos en el mundo político. Dos cosmovisiones distantes al extremo. El reciente libro de los asesores de campaña Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, mentores del acceso al poder de Mauricio Macri en Argentina, y el del ex-ministro de Economía griego Yanis Varoufakis nos permiten acercarnos a la actual razón neoliberal desde perspectivas opuestas: la de quien busca que los políticos se amolden al nuevo contexto posdemocrático y la de quien intenta situarse como un político antisistema desde el interior del propio sistema. Por eso resulta productivo pensar en conjunto *La política en el siglo XXI. Arte, mito o ciencia y Comportarse como adultos. Mi batalla contra el establishment europeo*.

*Todos sabemos lo que hay que hacer,
lo que no sabemos es cómo hacer que nos
reelijan después de hacerlo.*

Jean-Claude Juncker¹

José María Velasco Ibarra, presidente de Ecuador cinco veces –una de ellas como dictador–, contrajo matrimonio con una poetisa argentina, y una placa en el Barrio Norte de Buenos Aires señala la sede de su exilio

en la ciudad. Como a tantas figuras de su país, nadie lo recuerda en Argentina. Los argentinos, tan cosmopolitas en su autoimagen, ignoran la historia de sus vecinos regionales. La cultura popular latinoamericana abunda en bromas contra esta y otras altanerías. Ilusoriamente conectados de manera directa con el «centro del mundo» –Europa y Estados Unidos–, los argentinos han comenzado a experimentar vuelcos históricos en su

José Fernández Vega: es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es autor, entre otros libros, de *Las guerras de la política. Clausewitz de Maquiavelo a Perón* (Edhasa, Buenos Aires, 2005) y de *Francisco y Benedicto. El Vaticano ante la crisis global* (FCE, Buenos Aires, 2016).

Palabras claves: neoliberalismo, política, posverdad, Jaime Durán Barba, Santiago Nieto, Yanis Varoufakis.

1. Citado en: «The Quest for Prosperity» en *The Economist*, 15/3/2007. En ese momento, Juncker era primer ministro de Luxemburgo. Hoy es presidente de la Comisión Europea.

cultura política. La sorpresa no es solo que el «posmoconservador» Mauricio Macri esté ahora en el poder pregonando aquella ficticia conexión directa que fascina a las clases medias autóctonas, mientras demora en producir resultados tangibles en términos de inversiones externas. Se trata de que, de pronto, un ecuatoriano se haya convertido en el principal intelectual público de estas tristes provincias; a Jaime Durán Barba se lo señala como artífice del triunfo presidencial de Macri.

¿Principal intelectual público? Después de lograr que su pupilo vernáculo se proyectara desde la presidencia de un importante club de fútbol asociado a un barrio popular –Boca Juniors– hacia el control de la capital del país como jefe de gobierno y luego hasta la cúspide del poder nacional, resulta comprensible que uno de los consultores de campaña más exitosos de América Latina sea incapaz de disimular su orgullo profesional y goce exhibir sus vastos conocimientos mediante libros, artículos y declaraciones provocadoras que los medios locales replican. Macri acredita esa reputación, puesto que constituye su principal pergamino profesional: logró ubicarlo en el poder del tercer país de la región, en términos económicos y demográficos, cuando apenas había quien lo presagiara. De allí que sea simplemente natural que, junto con su asociado Santiago Nieto, también ecuatoriano, Durán Barba pretenda acuñar en mármol para la posteridad un apotegma personal, a

la vez incierto y poco original en el panorama de la *political science* establecida: la política es una ciencia como las naturales².

Eso concluyen Durán Barba y Nieto tras la extensa digresión con la que inician su libro *La política en el siglo XXI*, donde fundamentan sus ocurrencias a partir de la historia de la física y la astronomía, el origen del lenguaje y la crítica a los dogmas de las religiones orientales y de las monoteístas. Quien opine lo contrario sería alguien incapaz de comprender su época.

■ Hacia una ciencia política realmente científica

Los autores sostienen una epistemología singular y buscan respaldo en un colaborador del diario *El País* de Madrid, el físico Jorge Wagensberg, y en reputaciones más consolidadas: Thomas Kuhn y Carl Sagan. Hay que ir a los hechos –sostienen en este libro–, puesto que la marca de la verdadera ciencia consiste en buscar descripciones empíricas y no perder tiempo en teorizaciones, tal como esas heterogéneas eminencias habrían demostrado. La cuestión reside en respetar «la lógica y el sentido común» sin enredarse en perimidas lealtades a los fantasmas del marxismo (los únicos mencionados).

2. J. Durán Barba y S. Nieto: *La política en el siglo XXI. Arte, mito o ciencia*, prólogo de Jorge Fontevecchia, Debate, Buenos Aires, 2017.

Teorizar es propio de fanáticos sometidos a unos decadentes criterios de autoridad: «Lenin lo dijo», «Gramsci lo escribió», «Marx ya lo había anticipado». La única autoridad racional deriva de la observación fáctica, no de la cita a los próceres, adorados por sectarios, que solo formulaban teorías indiferentes a los hechos. Pocas páginas después, sin embargo, se lee lo siguiente: «Einstein expuso la *teoría* general de la relatividad, Stephen Hawking trató de asociarla con la *teoría* cuántica y *teorizó* acerca de la existencia de los agujeros negros. Sus trabajos causaron polémica, fueron un aporte al avance de las ciencias, pero ahora tienen que integrarse en una *teoría* general»³. La teoría no parece aquí un tema tan tóxico o propio de dogmáticos. Por otro lado, ¿qué observaron en la realidad Einstein o Hawking? ¿Acaso no derivaron sus concepciones de puras especulaciones, a la espera de pruebas que las validaran? La apelación al prestigio de las autoridades, que Durán Barba y Nieto deploran, se vuelve aquí palmaria. Eso no es muy científico. Para colmo, solo arroja resultados contradictorios con lo que pretenden respaldar a partir de dos grandes nombres de la ciencia.

La epistemología de Durán Barba es unilateral y atrasa varias décadas. El revolucionario trabajo de Kuhn, durante mucho tiempo el filósofo estadounidense más difundido (al menos hasta la irrupción de John Rawls), ha sido sometido a múltiples críticas y

ajustes a lo largo de los años y no es el caso de reseñarlas aquí. El empirismo de Durán Barba y su socio tambalea. Es que no hay observación posible sin teoría: todo dato es producto de un sistema que lo busca, lo interpreta y lo reinterpreta a la luz de nueva evidencias o de nuevas teorías. El taxativo «sistema de la ciencia» que ilustra este libro produce sorpresa o sonrisas. Puede impresionar a un público de políticos elementales, pero su alcance se restringe a esa audiencia, quizá la única a la que buscan impactar con su despliegue de referencias.

Sin embargo, los hechos cuentan mucho en política; y en ese experimento crucial que son los comicios, se denominan resultados. Durán Barba y Nieto lograron un excepcional desempeño electoral en Argentina. Combinando lo más nuevo del escenario político nacional (Propuesta Republicana, PRO) y lo más antiguo (la Unión Cívica Radical, UCR), consiguieron desplazar al peronismo del poder tanto en el plano nacional como en el principal bastión electoral, la provincia de Buenos Aires. Allí, para mayor desafío a la sabiduría recibida, ganó una mujer poco conocida (María Eugenia Vidal) y quebró así la tendencia que relegaba a las mujeres a heredar el control de sus maridos (como Hilda «Chiche» Duhalde) o de sus antiguos jefes que aspiran a competir en ligas mayores y les conceden un puesto para que todo quede bien atado en las instancias

3. Mi énfasis.

que dejan atrás. En 2017, Durán Barba y Nieto repitieron la hazaña, incluso la ampliaron: lograron más votos para el oficialismo en las elecciones de medio término y, como se ufano el consultor, esta victoria es inédita puesto que se consiguió en medio de un feroz ajuste de salarios y de tarifas de servicios públicos. Esto constituyó un desafío a la llamada «maldición de Juncker» enunciada en el epígrafe del presente artículo.

En *La política en el siglo XXI* no se pierde ocasión de tomar distancia de las vetustas ilusiones políticas del «sesentismo»; con todo, el postulado central es una bien conocida frase de esa época, adaptada al tema del libro: el candidato es el mensaje. En sus páginas podemos encontrar que en la comunicación política adquieren relieve todo tipo de elementos, pero el menos importante es aquel al cual mentalidades todavía modernas siguen apegadas: el contenido programático de la propuesta partidaria. Los votantes no están interesados en él, lo consideran aburrido; exigen soluciones en lugar de afirmaciones de principios. Deciden su voto por motivos emocionales más que intelectuales. Solo una parte insignificante del electorado sopesa programas o adhiere a alguna ideología. En política, el único actor racional es el consultor; los otros se mueven por vanidad (los candidatos) o por impulsos sentimentales, identificaciones emocionales, o bien por lo que ven en la red u opinan sus conocidos (los electores).

La tarea del consultor consiste en lograr que una corriente de empatía emerja del océano informativo que nos inunda y se dirija subrepticamente hacia un perfil político determinado. Para ello es preciso que su discurso se refiera a temas que atraen a la gente desinteresada por la política y que su imagen comunique novedad y una positiva levedad. De este modo, es posible que esa figura pase a formar parte de la conversación social digitalizada. Ese objetivo es lo más decisivo en campaña. Se vuelve preciso entonces que el candidato, por lo común un personaje egocéntrico, pueda someterse a una disciplina diseñada por el consultor, quien no debe abusar de la publicidad –la política no es marketing–, sino centrarse en determinar en cada caso qué mueve la voluntad del electorado.

Los viejos partidos y las antiguas maneras de transmitir, centradas en ideas expuestas con una oratoria solvente y en intuiciones sociológicas, han quedado definitivamente atrás. El secreto de la política consiste en entender que ella ya no cautiva a casi nadie. El nuevo votante es pragmático y deplora la confrontación entre los dirigentes. Los más jóvenes suman al desinterés generalizado una profunda desconfianza. Y no son los únicos que la tienen. Los acuerdos de las elites que decidían el curso de los acontecimientos en el pasado ya no funcionan; los electorados se rebelan contra las cúpulas que negocian a sus espaldas. Esto explicaría

el «Brexit», la derrota de los demócratas en Estados Unidos y el rechazo a los Acuerdos de Paz en Colombia, tres fenómenos desconcertantes que signaron el año 2016. La «gente común» cambió de mentalidad. No quiere quedar relegada al papel de espectador pasivo que aplaude a un jefe o convalida un contubernio.

El fin de la «era de la palabra» en política genera, de un modo algo paradójico, una opinión pública más autónoma aunque volátil en sus preferencias electorales, aseguran los autores. En la tradición occidental, la autonomía y la libertad siempre se asociaron al uso de la razón, pero ya habría dejado de ser así. La fuente de la libertad se cifra en la ruptura de los viejos lazos identitarios que vinculaban a individuos y grupos con alguna posición partidaria; eso todavía caracteriza a una minoría de la sociedad, pero carente de futuro. Durán Barba y Nieto abundan sobre la maravilla de la comunicación total e instantánea que ha derribado las fronteras del pudor, así como la sumisión a los prestigios que rigieron la conducta de generaciones previas. La fuente de la libertad no es el uso de la razón, como creían los iluministas, sino el uso de internet. El chisme es más potente que el concepto; hablamos para murmurar, no para debatir.

Como afirmó Ralph Waldo Emerson y repitió Jorge Luis Borges, los argumentos no convencen a nadie. En palabras de *La política en el siglo XXI*:

«Cuando un candidato ofrece algo, las palabras que pronuncia no son tan importantes como el efecto que produce en los electores el conjunto de su comunicación, incluidos los contextos, los eventos y las actuaciones». Un candidato sería apenas un holograma cuyas capacidades son connotativas; aquello que su voz denota llega a unos receptores que en realidad reciben los significados a través de su inteligencia emocional.

Durán Barba y Nieto no se limitan a redundar sobre la superioridad de las técnicas para la victoria en unos comicios (a las que apenas se refieren, para desilusión de los lectores). Aspiran a mucho más. Pretenden respaldar sus comentarios y consejos en una visión antropológica. Interpretan la esencia del *Homo sapiens*, sus motivos para hablar, las causas profundas de sus conductas. Afirman haber llegado a esta sabiduría guiados por la ciencia y el estudio de los electorados. Desde luego, no hay ninguna ideología en lo que sostienen, solo evidencia empírica (aunque, a diferencia de los científicos, apenas la dan a conocer). Las valoraciones sobre la condición humana oscilan, incoherentes, entre la euforia apologética (nunca fuimos tan libres ni estuvimos tan informados) y la negatividad (la sociedad «parece capturada por la banalidad», todo es exhibicionismo y entretenimiento, «Google domina al mundo»). Al mismo tiempo –el principio de no contradicción tiene escasa incidencia

en esta filosofía—, retratan a los seres humanos atrapados en sus pantallas y desprecian la soberbia moderna que califica de superficial nuestra cultura.

La política en el siglo XXI, de manera inusitada, se comporta como un vulgar candidato. Promete y no cumple. Lo que abunda en la política finalmente llegó a las librerías y funciona bien. El libro está destinado a fascinar a su público real: la masa oportunista que pugna por candidaturas.

■ ¿Tragedia griega, isabelina o policial negro?

No menos narcisista a su modo —puesto que es el relato en primera persona de las peripecias de un héroe (griego)—, pero en absoluto cínico, Yanis Varoufakis expone en *Comportarse como adultos. Mi batalla contra el establishment europeo* las crudas verdades infraestructurales —por usar un vetusto vocabulario— que Durán Barba y Nieto estilizan en un nivel superestructural⁴. El autor fue ministro de Economía durante 162 extenuantes jornadas en el gobierno de la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza, por su acrónimo en griego), partido por el que fue elegido parlamentario con el mayor número de votos en enero de 2015. Con un talento narrativo inesperado, el libro repasa su lucha contra la hegemonía europea del neoliberalismo. Esta palabra aparece, empero, pocas veces en el texto. El hecho es, por una parte, sorprendente; por la otra, se vuelve

superfluo, puesto que la denominación es reemplazada por algo más sustancial: una descripción detallada de sus mecanismos operativos en los niveles institucional y global.

El vasto volumen se lee como un policial *hard-boiled*, si bien su autor, descartando el lugar común de la tragedia ática, prefiere ubicar la historia que relata bajo el sangriento signo de *Macbeth*. El asesino se conoce de antemano, el *suspense* deriva de los entretelones que llevan al crimen. Y son muy animados, están expuestos con lucidez, resultan lúgubres y cómicos a la vez. Ninguna otra memoria política contemporánea compite con *Comportarse como adultos*, cuaderno de bitácora de un *outsider* calificado al que su destino (helénico) ubicó de pronto en el tempestuoso núcleo del «círculo rojo» mundial.

La primera conclusión que se extrae de este *thriller* crematístico es que —recurrentes tecnicismos aparte— en el mundo de las altas finanzas institucionales apenas se trata de razones económicas (¡jestúpido!). Varoufakis deja en claro desde el comienzo que los acreedores de Grecia se muestran menos interesados en recuperar sus miles de millones que en la imposición de un programa de ajuste salvaje, el cual —y esta es la segunda

4. Y. Varoufakis: *Comportarse como adultos. Mi batalla contra el establishment europeo*, Deusto, Barcelona, 2017.

aclaración importante—saben perfectamente que no funcionará para el logro de sus objetivos declarados.

El deudor jamás obtendrá, mediante recortes salariales y presupuestarios en todo nivel, un ahorro siquiera suficiente para afrontar los intereses de los préstamos acordados. De modo que se verá obligado a pedir otros préstamos y a someterse a «reestructuraciones» todavía más dolorosas (e inútiles) que dinamitarán sus posibilidades de recuperación y lo llevarán a una catástrofe humanitaria, en la que Grecia ya se hallaba sumida. ¿Por qué se insiste entonces en una receta tan imposible como cruel? En una conversación privada reproducida en el libro, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), la francesa Christine Lagarde, reconoce ante el autor que ella advierte de sobra las consecuencias del «plan», pero alega que quienes lo promueven invirtieron en él tanto «capital político» que ya no se puede dar marcha atrás ni en el caso griego ni en ningún otro. Porque el «programa» de ajustes es el mismo para todo el mundo, y este es otro motivo para que no se admitan excepciones, sea cual fuere la situación de algún país específico.

«Adultos en el cuarto» (*adults in the room*) es otra frase de Lagarde que el libro aprovecha como título en su edición en inglés. Su sentido sugiere que toda resistencia al «programa» es una niñería, los argumentos contra él

redundan, todos los conocen; en las negociaciones, se trata de comportarse como adultos y acatar sus directivas. Otra versión del TINA thatcherista (iniciales de *There is no alternative*), a esta altura ya sinónimo del liberalismo global: las cosas son de una sola manera, quien no lo vea así es inmaduro, idiota o demente.

■ Amplios motivos liberales

Como el liberalismo se considera a sí mismo sinónimo de racionalidad, cualquier oposición a sus bases no puede sino provenir de alguna especie de terrorismo. No hay para él adversarios, solo criminales; los opositores admitidos discuten detalles, no fundamentos. Esta anatomía del pensamiento liberal no proviene de la izquierda, sino del polémico Carl Schmitt, un conservador católico coyunturalmente aliado al nacional-socialismo antes de la Segunda Guerra Mundial. Aunque *Comportarse como adultos* no lo menciona, y cualesquiera hayan sido las aberraciones de Schmitt, su diagnóstico aún constituye la mejor síntesis de la *forma mentis* dominante en la llamada troika con la que Varoufakis chocó una y otra vez en su papel de ministro. La troika es el grupo integrado por el FMI, el Banco Central Europeo (BCE) y el decisivo —aunque no surgido de elecciones y, como llegamos a saber, carente de estatuto institucional— Eurogrupo, integrado también por todos los ministros de Economía de la Unión Europea.

Con una gracia peculiar derivada de la precisión de su prosa y de rápidas digresiones en las que exhibe un tacto peculiar para el detalle significativo y una sutil capacidad para la observación humana, Varoufakis deja testimonio de su primer encuentro (en todos los sentidos de la expresión) con el Eurogrupo en Bruselas. Los integrantes de este homogéneo cuerpo de tecnócratas coinciden con el diagnóstico del flamante ministro griego en el sentido de que es preciso reestructurar la deuda, detener la hecatombe social del país y estimular su crecimiento para salir de la espiral del endeudamiento. Sin embargo, se niegan a cualquier modificación del «programa». Debaten diez horas seguidas porque el griego quiere anteponer, como débil objeción, la palabra «modificado» al sacrosanto «programa» en la declaración final. Pero hay una rotunda voluntad que se niega: la de Wolfgang Schäuble, ministro de Finanzas alemán, ostensible macho alfa de la manada. La capitulación debe ser incondicional. Nadie osa levantar la voz. Las mayores comparsas con que cuenta el ministro germano son los pequeños países bálticos de la ex-órbita soviética, sumados a Eslovaquia y Eslovenia.

La economía griega está en bancarrota y Varoufakis arriesga todo. El peligro más inminente es el colapso del sistema bancario de su país en cuestión de horas si el BCE retira su asistencia, algo con lo que su presidente, el italiano

Mario Draghi, ya lo había amenazado apenas unos días antes en Fráncfort⁵. Las cartas del ministro son escasas, pero letales: el súbito abandono del euro –un «Grexit»– provocaría un terremoto continental, pero también un inmediato desastre doméstico, puesto que, entre muchos otros motivos, no hay un solo dracma disponible para afrontar el más sencillo intercambio.

Entretanto, la corrida bancaria helénica ya se había desatado. El «Grexit» constituía para Varoufakis un indeseado plan x, según lo denomina, pero necesitaba organizarlo para el caso de que no consiguiera vencer la rigidez del alemán y su compacto grupo de adláteres. Debía comprar tiempo⁶. Opositor en su momento a la entrada de Grecia al euro, el ministro apenas contaba con un margen de maniobra para un plan y (que diseña a toda velocidad); la segunda opción era salir de él (plan x) conteniendo sus inmediatos

5. En un paso de comedia, Varoufakis cuenta que recibe la advertencia de Draghi a través de un llamado «casual» en una pizzería a la que lo invitan dos socialdemócratas alemanes que simulan confraternizar con las posiciones de Syriza, hasta que le pasan el teléfono y advierte que todo era una puesta en escena para encubrir la amenaza del banquero.

6. Esa es la consigna de la hora para todas las partes involucradas en la gestión global del capitalismo según Wolfgang Streeck. V. su análisis en *Comprando tiempo. La crisis pospuesta del capitalismo democrático*, Capital Intelectual / Katz, Buenos Aires, 2016. Del mismo autor, *How Will Capitalism End?*, Verso, Londres, 2016, con penetrantes comentarios sobre el crédito barato que llovió sobre Grecia y la debacle que acabó poniendo inicialmente en serio riesgo a los bancos alemanes y franceses, algo que también explica Varoufakis en su libro.

efectos caóticos, aunque a mediano plazo constituyera una solución factible para escapar del laberinto económico. Este es uno de los aspectos que diferencian la crisis griega de la que sufrió Argentina a partir de finales de 2001 –además del hecho de que Grecia carece de *commodities*–: el control de la moneda soberana y la posibilidad de devaluarla. Grecia solo podía depreciar salarios y pensiones, un proceso sin final a la vista en el que el país venía embarcado desde hacía tiempo y al que el gobierno de Syriza –al menos eso prometió en las elecciones– aspiraba a poner freno. Una vez elegidos, no sabían cómo hacerlo. Era casi la inversión de la «maldición de Juncker».

Una primera reunión con Schäuble ya había tenido lugar días antes en Berlín, ocasión en la que este renovó sus credenciales como cuadro mayor del ordoliberalismo tradicional en su país a partir de la última posguerra⁷. Un antiguo colaborador, transfugado ahora al bando de Varoufakis, le anticipó algunos rasgos personales del superministro alemán: ante todo un abogado, débil manejo económico, odia los mercados, ardiente europeísta que goza interpretar el papel de policía malo, si bien se puede debatir con él⁸. Previamente, el encargado de finanzas italiano no le había comentado en Roma que cuando le preguntó a Schäuble cuál sería la medida decisiva que debería tomar para ganar su confianza, este le respondió sin vacilar: «una reforma laboral de mercado»⁹. Coherente con

este retrato, Schäuble no perdía ocasión de contraponer la probidad alemana a la corrupción griega; entrando en cuestiones de fondo, le aseguró a Varoufakis que el Estado de Bienestar europeo era excesivo en su generosidad y debía ser sacrificado sin contemplaciones en el altar de la productividad global. Un comentario

7. Para una sintética relación de los principios ordoliberales de la llamada Escuela de Friburgo –en contraste con los del neoliberalismo surgido en Viena–, v. Marcel Hadeed: «The Ordoliberal Ghost» en *Social Europe*, 2/8/2017.

8. Un dato interesante en el relato de Varoufakis son los inesperados apoyos que consigue entre los *torres* británicos, el presidente Barack Obama, asesores financieros privados arrepentidos y unos pocos ex-comisarios económicos del FMI y la troika que, horrorizados por las consecuencias de los ajustes que habían orquestado en sus distintos destinos internacionales, se suman a su equipo, para sobresalto de sus antiguos colegas que siguen negociando del otro lado de la mesa. Varoufakis valora el *know how* de estos inesperados «aliados» y su visión desde adentro, de la que carecen los jóvenes candidatos doctorales integrantes de su equipo.

9. Un condensado y sólido perfil del personaje se puede leer en Joshua Rahtz: «The Soul of the Eurozone» en *New Left Review* N° 104, 3-4/2017, donde se lo califica como «el más consecuente político europeo de su generación» y el más antiguo miembro del Bundestag (al que se integró en 1972). Schäuble es un crítico conservador de la modernidad cultural y del Estado «excesivo» (a la vez que permisivo e incapaz de sustituir a la religión para impregnar a la sociedad de consumo de la necesaria dimensión trascendente, cuyas traducciones mundanas son la familia y el trabajo entendido más allá de mero medio de vida). Se lo caracteriza como partidario de privatizar las infraestructuras, desregular, bajar salarios y, al mismo tiempo, muy preocupado por los peligros que afronta Occidente debido a la crisis de legitimidad de sus sistemas políticos y su vacío espiritual, factores que ensombrecen su predominio económico. Por lo demás, Schäuble quizá «no pasó un día fuera de su país excepto en misiones oficiales».

general, aunque propedéutico respecto de lo que tenía que prescribirle a Grecia. Y no solo a ella. Su objetivo final no era Atenas –ni Madrid, ni Roma–, sino París.

Si la férrea ortodoxia de Schäuble no sorprendía a nadie, los dobleces de los socialdemócratas europeos todavía pueden llamar la atención. Tanto el responsable de la economía del gobierno de François Hollande como el jefe del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) que cogobernaba con la canciller Angela Merkel (única persona capaz de contrarrestar la radicalidad de Schäuble, al menos en ocasiones) coinciden en privado con el programa que les expone Varoufakis para resucitar la economía de su país. Pero tras esos cónclaves a cuatro ojos sigue la habitual ronda de prensa donde, sin previo aviso, declaran todo lo contrario ante el ministro con el que habían departido minutos antes. Varoufakis interroga a ambos personajes sobre el brusco cambio de actitud. Sigmar Gabriel reconoce que cada vez le cuesta más ese tipo de piruetas; el francés es menos individualista: «Francia ya no es lo que era», arguye con una sonrisa. Para un antiguo asesor del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK, por sus siglas en griego) como Varoufakis, estos episodios no hacen sino confirmar el carácter continental de la capitulación socialdemócrata ante el dogma del TINA. El único cuadro europeo que se revela más consistente es

uno que haría historia tras el naufragio del Partido Socialista Francés (PSF): Emmanuel Macron, entonces uno de los varios funcionarios económicos de Hollande, pero sin presencia en el Eurogrupo. Una gestión de buena voluntad de Macron en el clímax de la crisis fue abortada por el entorno de su presidente. Las vueltas de la historia hicieron de Macron el líder que ahora intenta aplicar *à la française* el menú de Bruselas-Berlín¹⁰.

■ Regreso a Ítaca

La propuesta de la troika era desastrosa no solo para Grecia, sino también para los contribuyentes europeos, puesto que se trataba de financiar lo que no tenía futuro alguno e iba a demandarles cada vez más dinero dirigido, en realidad, a sostener a los bancos griegos cuyos propietarios estaban fundidos (solo en los papeles, puesto que se habían beneficiado de los muchos préstamos y habían fugado sus ganancias). Sobre estos fundamentos, Varoufakis imaginó entonces que esos contribuyentes podrían ser los dueños de los bancos, algo que la troika

10. La popularidad del flamante presidente cayó en sus primeros 100 días más que la de cualquiera de sus tres predecesores, incluyendo su deteriorado ex-jefe François Hollande. *The Economist* lo justifica argumentando que ello se debe a que está haciendo lo correcto. La tensión entre economía y democracia parece irresoluble para el neoliberalismo, como Hollande (y el PSF) experimentaron duramente y de primera mano. «Emmanuel Macron Finds Change Is Often Unpopular» en *The Economist*, 26/8/2017.

rechazó de plano. El problema era que no podían permitir que un gobierno con ideas alternativas se saliera con la suya y generara émulos en el muy endeudado continente, aun cuando solo se hablara de reestructurar las deudas y no de repudiarlas. Una vez superada la coyuntura de la quiebra bancaria griega que inicialmente amenazó el entero sistema financiero alemán y francés antes de la asunción de Syriza, el dinero seguía sin ser lo más importante para los acreedores. La subordinación era lo central. En el Eurogrupo nadie deseaba ver emerger a Grecia cuando se aproximaban elecciones en Irlanda, Italia, España y Portugal, países que habían sido sometidos a la disciplina fiscal. Los españoles, aclara Varoufakis, tampoco querían ver triunfar los proyectos de los amigos de Podemos.

Las ideas de Varoufakis no solo eran resistidas por el ala izquierda de Syriza, sino también por otros analistas internacionales que las rechazaron por considerarlas demasiado moderadas, inviables en el campo de fuerzas políticas vigente en la arena europea y excesivamente favorables a los intereses de los acreedores. Eric Toussaint lo acusó de connivencia con la antigua clase política de su país y de ofrecer apenas una rebaja del superávit exigido por Bruselas, cuando debía propugnar un déficit para movilizar la inversión y expandir el gasto social¹¹. Estos planteos presuponen

el repudio a las instituciones europeas y a su moneda única. Como su prioridad era mantenerse en la zona euro, Varoufakis, según este comentario, admitía bajo ciertas condiciones las privatizaciones exigidas que debilitaban al Estado griego y aceptaba entregar a Europa la propiedad de la arruinada banca privada, a cambio de fundar un ilusorio banco para promover el desarrollo nacional. Lo que debía hacer –según estas opiniones– era atenerse al programa inicial de Syriza y forzar una auditoría de la deuda con participación popular mientras se suspendía todo pago. Pese a sus concesiones, y como no podía ser de otra manera, su plan keynesiano fracasó y Alexis Tsipras terminó firmando un acuerdo leonino tras el alejamiento de su ministro.

Más allá de las objeciones que puedan elevarse al programa que expone *Comportarse como adultos* para salir de la crisis, el libro describe un panorama político de máximo interés. Muestra, por ejemplo, que la ahora popular noción de «hechos alternativos» o posverdad se incubó primero en los cónclaves financieros (un antiguo funcionario del FMI no duda en advertirle que allí se miente descaradamente).

11. Toussaint, portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM), desplegó sus objeciones en dos artículos: «Propuestas de Varoufakis que conducían al fracaso», CADTM, 17/8/2017 y «Le récit discutible de Varoufakis des origines de la crise grecque et ses étonnantes relations avec la classe politique», CADTM, 17/8/2017.

Varoufakis relata una y otra vez reuniones en las que sus interlocutores le daban la razón, para luego alinearse con posiciones dogmáticas en los plenarios, por no hablar de los gráficos y cálculos erróneos con los que respaldaban sus dictados. Las contraargumentaciones en esas cumbres, ironiza Varoufakis, tenían el mismo efecto que entonar el himno nacional sueco.

Por otra parte, su propio ministerio estaba colonizado por burócratas que respondían a Bruselas y percibían sueldos incluso mayores que el del primer ministro. El delegado de Grecia en el Eurogrupo era un quintacolumnista al servicio de la troika, así como también un apreciado ex-colega de la universidad al frente del «independiente» Banco Central del país, herencia envenenada del gobierno anterior hundido por las políticas que le habían impuesto desde el eje Bruselas-Berlín. La oficina de impuestos tampoco le respondía. Lo curioso es que la troika insistía en visitas de sus expertos a Atenas para recabar datos de los que ya disponía de primera mano. Se trataba en realidad de escenificaciones políticas: columnas de autos de alta gama que llevaban a funcionarios coloniales a hoteles cinco estrellas rodeados de seguridad y con la clase política indígena a su disposición.

En el desenlace, el aspecto decisivo fue que en el partido en el poder comenzaron las conspiraciones y defecaciones, encabezadas por la del propio

jefe del gobierno de Syriza, Tsipras, cuya actitud oscilante, depresiva en ocasiones, lo condujo a la capitulación ante la troika pese a que había conseguido un impresionante 61,31% de apoyo popular en un referéndum sobre la deuda. En realidad, asegura Varoufakis, Tsipras lo había convocado para perder y justificar su sumisión, aunque obtuvo una victoria impactante. Nadie, fuera del ministro, festejó el arrasador triunfo en la casa de gobierno. Al día siguiente, con todo el capital político para enfrentar de nuevo al Eurogrupo, el ministro debió renunciar porque le resultó claro que su premier estaba decidido a firmar cualquier acuerdo que se le presentara desde Bruselas. Resulta difícil entender por qué esperó tanto para dar ese paso. A lo largo de los últimos tramos del libro trata de justificarse sin llegar a convencer. Arguye motivos de lealtad, espera que Tsipras recapacite, se apegue a ciertos gestos, comentarios y señales inconsistentes.

Ya era evidente, sin embargo, que su jefe político se había entregado o había caído en la trampa mortal que le había tendido Merkel. El paso final fue la aprobación, a espaldas del resultado electoral, de un programa recalcitran- te avalado por abrumadora mayoría parlamentaria (232 diputados entre el oficialismo y la oposición pro-troika), con solo 32 votos en contra de disidentes de Syriza y 11 abstenciones. El devastador plan, un documento de 1.000 páginas, mal traducido al griego,

llegó por la noche y se votó a primera hora de la mañana siguiente.

Este episodio nos lleva al núcleo político de la historia de la deuda griega, que por supuesto se proyecta al destino de las democracias occidentales. En una de sus primeras asambleas con el Eurogrupo, Schäuble afirma que las iniciativas de Varoufakis para alterar los términos de un fracasado acuerdo financiero no se pueden aceptar puesto que no es posible que «las elecciones permitan cambiar la política económica». Son irrelevantes para lo que realmente cuenta. Las opiniones populares no pueden torcer el curso de la realidad. Aquí reside una cifra de la crisis de legitimidad de las democracias actuales. Grecia sucumbió finalmente a la troika, pero los complejos e indirectos efectos de su hundimiento quizá puedan rastrearse en reacciones posteriores como la del «Brexit» o la emergencia de Donald Trump. En un contexto así, la ingeniería electoral de Durán Barba y su socio –su *scienza nuova* para las democracias– no parece tener tantas perspectivas. Hay contenidos que se ponen en juego para todos en momentos de agudización de la crisis.

Varoufakis soportó una lluvia radioactiva de críticas mediáticas paneuropeas que lo persiguieron incluso después de su renuncia. Pero el poder periodístico concentrado (en Grecia pasó a manos de los bancos, en cuyo control vieron la posibilidad de su supervivencia) no

logró torcer la voluntad de los votantes en el referéndum. Por otra parte, las comunicaciones del ministro estaban interceptadas. Jeff Sachs, un economista estadounidense –«ex FMI»– que colabora con él lo llamó de nuevo tras una conversación para contarle que el National Security Council de su país se había comunicado para confirmar si la amenaza de *default* de la que habían hablado un momento antes iba en serio.

Los alemanes, de su lado, conocían sus maniobras para obtener asistencia financiera de China y las bloquearon para impedir que Grecia pudiera recibir oxígeno por fuera de su área de influencia exclusiva, estatuto reconocido por los propios funcionarios de EEUU. En este último país, sin embargo, Varoufakis recibió el espaldarazo simbólico de unos sindicalistas demócratas. El consejo que le dan es la versión proletaria de las consideraciones de Schmitt: «Se quejarán de tu irracionalismo hasta que adviertan que no pueden comprarte o engañarte o intimidarte. Solo entonces negociarán en serio, a menudo muy tarde por la noche».

Las noches interminables son una constante en este libro, donde nadie descansa y se suceden el estrés y las inútiles reuniones. El lema de esos sindicalistas de Washington estaba inscripto en la pared de sus oficinas: «Ninguna persona razonable logró nunca nada». Así enfrentaban la selectiva y autocontradictoria razón liberal. Nada parece más sensato. ☐

Summaries ■ *Resúmenes en inglés*

Fernando Molina: Socio-Electoral Tendencies in the Bolivia of Caudillismo [4386]

The decision by the Bolivia's Plurinational Constitutional Court to endorse the indefinite reelection of the president and the rest of the elective positions marks a turning point in a country traditionally reluctant to the «perpetuation of power». Furthermore, that possibility had been rejected in a referendum in February 2016.

Facing the new scenario, most of the opposition has been quick to denounce the «dictatorship» and even the «totalitarianism» of the government, an exaggeration that could constitute a serious interpretation error for the near future. Evo Morales, although less popular than before, is still a political figure with social and electoral roots and spaces for political action are still open. *Keywords:* Caudillismo, Democracy, Opposition, Socialism, Evo Morales, Bolivia.

Leticia Salomón: Indignation and political crisis in Honduras [4387]

The recent elections held in Honduras raised many doubts about the security of the data processing system, a fact that was denounced both by the opposition and by international organizations.

Opponents of the re-election of Juan Orlando Hernández have asserted their constitutional right to civil disobedience and have taken to the streets to denounce electoral fraud and violations of the Constitution, in the repressive context opened with the coup d'état of 2009 and continued since. Corruption, impunity, and violence are the fuel for intense popular indignation. *Keywords:* Coup d'Etat, Corruption, Elections, Juan Orlando Hernández, Honduras.

Macià Serra / Gemma Ubasart González / Salvador Martí i Puig: Catalonia and Spain's Triple Crisis [4388]

The Catalan pro-independence *procés* put in crisis the State of 78, which emerged from the post-Franco Transition. A wing of the old Catalan nationalism, traditionally politically moderate and economically liberal, was launched to a drift that included a declaration of unilateral independence. Although this did not have real effects, it seemed to dynamite Catalan politics. Beyond the relevant motivations, the roots of the current crisis are deep and go beyond the historical tension between Catalan and Spanish nationalism: they are related to the triple crisis—economic, political and territorial— that Spain has experienced since 2007. As was seen on 21st December,

an election will not be enough to resolve things. *Keywords: Crisis, Independence Movement, Nationalism, Carles Puigdemont, Catalonia, Spain.*

Julia Roth / Albert Manke: What Crisis and What Responses? Considering Crisis in their Socio-Historical Context [4389]

The majority of Latin American countries share multiple, fragmented and often contradictory stories in which they faced and face numerous forms of crisis. Within this framework, the focus centered on responses to the crisis contributes to «completing» a split panorama. This article aims to conceptualize a notion of the term «crisis», opening up paths to approach and discuss the multiple ways in which diverse Latin American actors have faced moments and structures of crisis, with the aim of (re)imagining and remapping the social world and conceiving possible alternative alliances. *Keywords: Capitalism, Crisis, History, Neoliberalism, Post-Colonialism, Latin America.*

Alejandro Grimson: Argentina and its Crises [4390]

An analysis of several Argentine crises allows distinguishing between the wide uses of the term «crisis» in the colloquial language and the question about how to open a conceptual debate about the term «crisis», its uses, its economic, political, and cultural dimensions. A polysemic, normative, and objectivist term carries several risks, so a «restricted» use is necessary. Within this framework, the interest of this article is to understand, through the analysis of the Argentine case, the cultural dimensions involved in the crises, because in certain contexts there are crisis of confidence in the economy, crisis of confidence in politics, crisis of representation or social legitimacy. *Keywords: Crisis, Human Rights, Neoliberalism, Political Culture, Argentina.*

Claudia Tomadoni / Carlos Romero Grezzi / Sebastián Chirino: Unthinking Socio-Environmental Crises: Cooperative Production of an Inclusive Habitat [4391]

Housing production has played an important role in relation to economic activity, employment and the development of urban space in Argentina. The crisis of 2001 intensified the problem of the housing deficit and from 2003 the problem was faced with public solutions that, nevertheless, did not manage to overcome the economic perspective. The emergence of associative alternatives opens up new opportunities and the possibility of reformulating the notions of crisis and habitat. The Cooperative Pole of Inclusive Innovation (PCI) in the city of Rawson, located in the Argentine province of San Juan, provides an empirical experience based on social mobilization. *Keywords: Crisis, Habitat, Inclusive Innovation, Cooperative Organization, Housing Policies, San Juan, Argentina.*

Valeria Coronel / Luciana Cadahia: Republican Populism: Beyond «State Versus People» [4392]

To understand more profoundly the populist experiences which unfolded in Latin America, a theoretical framework must be built, in a populist and republican key, which abandons the legacy by which the people are thought of as «the other» of the State, and that allows us to think of a reciprocal interpellation. For this it is useful to delve into some old debates between populism and socialism, and other more recent ones between populism and autonomy, with the purpose of revisiting the role of the State and institutions when thinking about emancipation and popular self-determination. *Keywords: Democracy, Populism, Republicanism, Socialism, State, Latin America.*

Ronny J. Viales Hurtado / David Díaz Arias: Costa Rica and Multiclass Social Pacts: The Reform of the Labor Procedure Code (2015-2017) [4393]

The reform of the Labor Procedure Code in Costa Rica between 2015 and 2017 allows us to delve into the way in which crises are faced in Costa Rica and pacts are built. The fundamental thesis of this article is that this reform responds to an historical Costa Rican political style that privileges intra- and inter-class pacts and, as such, the broadening of democratic institutions. In this sense, it forms part of a Costa Rican political style, allowing for the resolution and prevention of sociopolitical crises and avoidance of radicalization. *Keywords: Conflict Resolution, Labor Reforms, Social Crisis, Work Code, Costa Rica.*

Nicole Schwabe: «We Are Not Children of Democracy, but Grandchildren of the Dictatorship»: The Chilean Student Movement in 2011 and Since [4394]

The 2011 student protests in Chile put into question, through their criticism of a for-profit educational system, one of the pillars of the dictatorship's legacy. They also showed a generational change that overflowed politics and was the seeds of a new Left. One of its expressions is the *Frente Amplio*, a coalition of parties that rejuvenated Chilean politics and had in the recent elections a notable electoral performance. This new force is headed by former student leaders and proposes to build a more just and caring country in which the rule of law is a strength. *Keywords: Political Alternative, Counter-Hegemony, Education, Student Movements, Frente Amplio, Chile.*

Bea Wittger: The Brazilian Urban Crisis and Solutions «From Below» [4395]

Brazil is facing a significant housing deficit. Currently, millions of people

live in inadequate conditions and face problems due to a lack of access to housing. However, many of those facing these problems find responses managed «from below» in the face of exclusive policies, through the occupation of abandoned buildings in central zones. The example of an occupied building in Rio de Janeiro serves to analyze the motivation of its occupants to participate actively in social protests, and also to observe the widest effects of the struggle in urban policies, as well as in personal development. *Keywords: Exclusion, Favelas, Neoliberalism, Social Movements, Brazil.*

Blanca Estela Ruiz: Memes: A Popular and Humoristic Response to the Mexican Crisis [4396]

Mexico is experiencing one of its biggest crises in terms of security and credibility in the institutions, and the working classes are responding with one of the best weapons they know, humor, to call into question any tendentious desire to return hegemonic atrocities and vested interests. Along with its frivolous contents, memes are a powerful weapon of public opinion and social complaint that point with their flaming finger towards all kinds of nonsense and excesses; but also they give the hand to unite Mexicans in their lack of confidence in justice. *Keywords: Crisis, Humor, Meme, Working Classes, Mexico.*

Hans-Jürgen Burchardt: Well-Being of Time: Latin American Response to the Socio-Ecological Crisis [4397]

The exacerbation of socio-ecological problems forces a reorientation of natural resource-intensive growth schemes. In that sense, the Healthy and Well-Lived Life Index (ivsblv), built in Ecuador, provides alternative ideas to measure the quality of life. The goal of discussing set ideas of wellbeing and the meaning

of their measurement, as well as the introduction of the variable «time» as a determinant of social development, seeks to advance in a socio-ecological idea of development. *Keywords:* «Buen Vivir», *Healthy and Well-Lived Life Index (IVSBV)*, *Post-Growth*, *Well-Being of Time*, *Ecuador*.

José Fernández Vega: New Political Civilization, Economic Barbarism [4398]

Two different visions in the face of neoliberalism. Two very different positions in the political world. Two extremely different worldviews. The recent books by campaign advisors Jaime Durán Barba and Santiago

Nieto, mentors of Mauricio Macri's rise to power in Argentina, and by the former Greek Economy minister Yanis Varoufakis allow us to approach the current neoliberal reason from opposite perspectives: one which looks for politicians to confirm to the new post-democratic context, and one which aims to position itself as an anti-system politician from within the system itself. As such, it is productive to analyze *Politics in the 21st Century: Art, Myth, or Science* and *Adults in the Room: My Battle with Europe's Deep Establishment* together. *Keywords:* *Neoliberalism*, *Politics*, *Post-Truth*, *Jaime Durán Barba*, *Santiago Nieto*, *Yanis Varoufakis*.



REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2017

Gijón

Nº 91-92

A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE
Siguiendo su estela

SUSCRIPCIONES

Suscripción personal: 36 euros

Suscripción bibliotecas e instituciones: 45 euros

Suscripción internacional: Europa - 60 euros (incluye gastos de envío)

América y otros países - 80 euros (incluye gastos de envío)

Suscripción digital: 19 euros

Abaco es una publicación trimestral de CICEES, C/ La Muralla Nº 3, entlo. 33202 Gijón, España. Apartado de correos 202. Tel./Fax: (34 985) 31.9385. Correo electrónico: <revabaco@arrakis.es>, <revabaco@telecable.es>. Página web: <www.revista-abaco.es>.

Alemania: F. Delbanco, Tel.: (49 4131) 2428-8, e-mail: <post@delbanco.de>.

Argentina: Distribuidor: Jorge Waldhuter, Pavón 2636, Buenos Aires, Tel./Fax: 6091.4786, e-mail: <jwalibros@ciudad.com.ar>. Librerías, Buenos Aires: Librería De la Mancha, Av. Corrientes 1888, Tel.: 4372.0189.

Bolivia: en La Paz: Yachaywasi, Tel.: 2441.042, e-mail: <yachaywa@acelerate.com>, Fax: 244.2437. Plural Editores, Tel./Fax: 2411.018, e-mail: <plural@plural.bo>.

Colombia: Librería Fondo de Cultura Económica, Calle 11 No. 5-60, Barrio La Candelaria, Bogotá, Colombia. Tel.: (571) 2832200, e-mail: <libreria@fce.com.co>.

Costa Rica: Librería Nueva Década, Tel.: (506) 2225.8540, e-mail: <ndecada@ice.co.cr>.

Ecuador: LibriMundi, Tel.: (5932) 252.1606, 223.4791, e-mail: <librimu1@librimundi.com.ec>.

España: Marcial Pons-Librero, Tel.: (34 914) 304.3303, e-mail: <revistas@marcialpons.es>; Mundi-Prensa Libros, (34 914) 363.702.

Guatemala: F&G Libros de Guatemala, 31 avenida "C" 5-54, zona 7, Colonia Centro América, 01007 Guatemala, Tel.: (502) 2433 2361 (502) 5406 0909, e-mail: <informacion@fygeditores.com>.

Japón: Italia Shobo, Fax: 3234.6469; Spain Shobo Co., Ltd., Tel.: 84.1280, Fax: 84.1283, e-mail: <info@spainshobo.co.jp>.

Nicaragua: Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Km 9 1/2 carretera a Masaya, Tel.: 276.1774 (Ext. 8), Apartado Postal 2438, e-mail: <comunicacion@ipade.org.ni>.

Perú: El Virrey, Bolognesi 510, Miraflores, Lima, Tel.: 444.4141, e-mail: <info@elvirrey.com>.

Puerto Rico: en Río Piedras: Compañía Caribeña de Libros, Tel.: (1-787) 297.8670, e-mail: <cclibros@yahoo.com>.

Ventas y consultas por Internet:

<www.nuso.org>

Distribución internacional a librerías:

<distribucion@nuso.org>

PARA SUSCRIBIRSE A NUEVA SOCIEDAD

SUSCRIPCIÓN	ANUAL	BIENAL
Incluye flete aéreo	6 números	12 números
América Latina	US\$ 70	US\$ 121
Resto del mundo	US\$ 107	US\$ 196
Argentina	\$ 700	\$ 1.400

> Formas de pago

1. **Pago online:** Ingresa en <<http://www.nuso.org/suscribe.php>>, donde encontrará un formulario para registrar su pedido y efectuar el pago.

2. **Pago con tarjeta de crédito vía postal:** Complete el cupón incluido en la revista y envíelo por correo a: Nueva Sociedad, Defensa 1111, 1° A, C1065AAU Buenos Aires, R. Argentina.

3. **Pago con cheque:** Envíe un cheque por el importe correspondiente a la orden de Fundación Foro Nueva Sociedad a la siguiente dirección: Nueva Sociedad, Defensa 1111, 1° A, C1065AAU Buenos Aires, R. Argentina, acompañado de los datos del suscriptor (nombre, domicilio postal completo, teléfono, correo electrónico).

> Para otros medios de pago y cualquier otra consulta, escriba a <distribucion@nuso.org>.

LAS NUEVAS TRAMAS DE LA GLOBALIZACIÓN

COYUNTURA

Alejandro Velasco. Chavismo en crisis, chavismo en disputa

TRIBUNA GLOBAL

Marc Verzeroli / Olivier de France. ¿De la victoria del capitalismo a la derrota de la democracia? Entrevista con Étienne Balibar

TEMA CENTRAL

Birgit Mahnkopf / Elmar Altvater. El planeta limitado y la globalización del 1%
Marina Aizen. El portazo de Estados Unidos al Acuerdo de París: un ruido que no se escuchó

Wolf Grabendorff. Los dueños de la globalización. Cómo los actores transnacionales desmantelan el Estado (latinoamericano)

Jorge Argüello. América Latina: su lugar en el mundo y en el G-20

Ann L. Phillips. Globalización, fragmentación e inseguridad. Respuestas y desafíos del siglo XXI.

Fabian Bohnenberger / Clara Weinhardt.

Malestar en el libre comercio. Un nuevo rol para la OMC

Ernst Hillebrand. La encrucijada socialdemócrata. Entre la globalización y el Estado nacional

Nicolás Comini / Alejandro Frenkel. La política internacional de América Latina: más atomización que convergencia

Pierre Salama. Menos globalización: ¿marginación u oportunidad para América Latina?

Cheludo Butale. Género y globalización. Una mirada desde el Sur global

Fátima Mello. Desafíos de un Foro Social Mundial debilitado

ENSAYO

Martín Baña. Volver sobre la Revolución Rusa. Configuraciones, debates y perspectivas 100 años después

SUMMARIES

¿SON LOS IMPUESTOS, ESTÚPIDO!
 Justicia tributaria e igualdad

COYUNTURA

José Natanson. La «ola amarilla» en Argentina. Reconfiguraciones tras el triunfo de Cambiemos

Gerardo Caetano. ¿Milagro en Uruguay?

Apuntes sobre los gobiernos del Frente Amplio

Sunniva Labarthe / Marc Saint-Upéry.

Leninismo *versus* correísmo: la «tercera vuelta» en Ecuador

TRIBUNA GLOBAL

Armelle Choplin / Olivier Pliez.

Globalizaciones discretas. Hacia una nueva geografía de los intercambios mundiales

TEMA CENTRAL

Juan Pablo Jiménez. Equidad y sistema tributario en América Latina

Claudio Lozano. Sin impuestos no hay igualdad. (Aunque a veces el progresismo lo olvide)

María Fernanda Valdés. ¿Dónde estamos? Desigualdad y reformas tributarias en América Latina

José Antonio Ocampo. La reforma de la tributación corporativa internacional. La perspectiva de la ICRICT

Krishen Mehta. El camino hacia la justicia fiscal: ¿dónde podemos avanzar?

Ricardo Martner. Someter la evasión fiscal para reducir la desigualdad. Agendas globales y locales

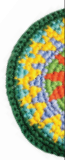
Dereje Alemayehu. Los flujos financieros ilícitos en África: ¿qué hacer?

Francisco Saffie. Contra la elusión. Una revisión crítica del proyecto BEPS

ENSAYO

Carlos Walter Porto-Gonçalves. Amazonia, Amazonas. Tensiones territoriales actuales

SUMMARIES



www.nuso.org

Enero-Febrero 2018

COYUNTURA

Fernando Molina Tendencias socioelectorales en la Bolivia del caudillismo

Leticia Salomón Indignación y crisis política en Honduras

TRIBUNA GLOBAL

Macià Serra / Gemma Ubasart González / Salvador Martí i Puig Cataluña y la triple crisis española

TEMA CENTRAL

Julia Roth / Albert Manke ¿Qué crisis y qué respuestas? Pensar las crisis en su contexto sociohistórico

Alejandro Grimson Argentina y sus crisis

Claudia Tomadoni / Carlos Romero Grezzi / Sebastián Chirino Impensar las crisis socioambientales

Valeria Coronel / Luciana Cadahia Populismo republicano: más allá de «Estado *versus* pueblo»

Ronny J. Viales Hurtado / David Díaz Arias Costa Rica y los pactos sociales multclasistas

Nicole Schwabe El movimiento estudiantil chileno en 2011 y después

Bea Wittger La crisis urbana brasileña y sus soluciones «desde abajo»

Blanca Estela Ruiz Los memes: una respuesta popular y humorística ante la crisis mexicana

Hans-Jürgen Burchardt Bienestar del tiempo: respuesta latinoamericana frente a la crisis socioecológica

ENSAYO

José Fernández Vega Nueva civilización política, barbarie económica

